SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 24 VEINTICUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Compañeras y compañeros Diputados, siendo las 14:26 catorce horas con veintiséis minutos, se abre la sesión Pública Ordinaria Número veinticuatro, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Orden del Día.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión.
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 23 celebrada el 07 de febrero del presente año.
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones.
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia del sistema estatal anticorrupción.
7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima.
9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 14 bis de la Ley de Educación del Estado de Colima.

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones XVI y XVII y se adiciona una fracción XVIII al artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima.

12. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a cinco iniciativas con proyecto de decreto relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima.

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro.

14. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a una iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar.

15. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, correspondiente a dos iniciativas con proyecto de decreto relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

16. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones del primer párrafo del artículo 79 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

17. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor del Estado de Colima, y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.

18. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.

19. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y

adicionar diversas disposiciones al artículo 89 de la Ley de Educación del Estado de Colima.

20. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura relativo a desechar la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, relativa a incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento durante el año 2017, la leyenda: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez”.

21. Asuntos generales.

22. Convocatoria para la próxima sesión.

23. Clausura.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, del orden del día, que acaba de ser leído.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba al orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De conformidad al orden del día aprobado, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Lista de asistencia. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José Guadalupe Benavides Florián, presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado J. Santos Dolores Villalvazo, Diputado; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios

Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Presidente informo a usted que están presentes los 25 legisladores que integran esta asamblea.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Una vez verificada la lista de presentes ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 14:35 catorce horas con treinta y cinco minutos del día 15 quince de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, declaro formalmente instalada la sesión número 24 veinticuatro, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y ser válidas las resoluciones que en ésta se tomen. Pueden ocupar su lugar. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 23 veintitrés, celebrada el 7 siete de febrero del presente año.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura del citado documento y proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria número 23 veintitrés. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta de referencia.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el acta en referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica, la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de enviar su lectura y que la misma sea insertada en firma íntegra en el Diario de los Debates.

SINTESIS DE COMUNICACIONES

1. Oficio número SGG.CEQ.092/2017 de fecha 23 de enero del presente año, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

2. Oficio número SGG 103/2017 de fecha 9 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a través del cual en términos de los artículos 58 fracción IV y 82 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, somete a la consideración de este Órgano Legislativo, la designación del C. José Guadalupe Franco Escobar, para desempeñar el cargo de Procurador General de Justicia.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.

3. Oficio número INE/COL/JLE/0182/17 de fecha 9 de febrero del presente año, suscrito por el C. D. Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo en el Estado del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual comunican la organización del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, señalando que en nuestra entidad fueron electos como legisladores infantiles los niños Leonardo de Jesús Méndez Gallegos por el Distrito Electoral 01 y Alejandro Maldonado Blanco por el 02, quienes representarán al Estado durante las actividades de dicho evento; así mismo solicitan apoyo para que en el marco de la ceremonia que con motivo del día del niño que realiza esta Soberanía, se pueda incluir en el orden del día la entrega del documento que contienen las propuestas y compromisos de Declaratoria del citado Parlamento.- Se toma nota y se turna al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.

4. Oficio número SM-056/2017 de fecha 10 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual solicitan autorización con el objeto de que dicha autoridad municipal realice la condonación al 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto de pago del impuesto predial, servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado; licencias comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas; a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago de ambos conceptos, durante el período comprendido a partir del día siguiente hábil al que entre en vigor la presente medida y hasta el 28 de abril del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

5. Oficio número MDPRSA/CSP/261/2017 de fecha 18 de enero del presente año, enviado por la Séptima Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual comunican que con esta misma fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan de manera respetuosa al Presidente de la República y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que lleven a cabo diferentes medidas de austeridad, como el recorte a un conjunto de gastos no sustantivos para el ejercicio de gobierno, indicando su monto y el total de todas y cada una de las medidas que se anuncien, con el objeto de revertir el incremento del precio de la gasolina y el diesel; así mismo exhortan de manera respetuosa a los 32 Congresos locales, para que se pronuncien a favor de revisar las políticas más lacerantes causadas por el incremento nacional del precio de los combustibles.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.

6. Oficio número 06/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

7. Oficio número 08/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de FEBRERO de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

8. Oficio número 09/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MARZO de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

9. Oficio número 14/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

10. Oficio número 15/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de MAYO de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

11. Oficio número 31/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de JUNIO de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

12. Oficio número 33/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

13. Oficio número 34/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de AGOSTO de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

14. Oficio número 35/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

15. Oficio número 36/2017 de fecha 8 de febrero del año en curso, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

16. Oficio número 10/2017 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre de Enero a Marzo del ejercicio fiscal 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

17. Oficio número 10/2017 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Primer Semestre de Enero a Junio del ejercicio fiscal 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

18. Oficio número SHA/024/2017 de fecha 13 de febrero del año actual, suscrito por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

19. Oficio número SHA/025/2017 de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

20. Oficio número CAPAMC/025/2017 de fecha 3 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el Acta de Consejo Extraordinaria de la CAPAMC de fecha 29 de diciembre de 2016, así como

las proyecciones de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

21. Oficio número SHA/0021/2017 de fecha 13 de febrero del año actual, suscrito por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite a esta Soberanía, una iniciativa por la que solicitan autorización para otorgar condonación en un 100% por los conceptos de multas y recargos en el pago del impuesto predial y agua potable, como estímulo a los contribuyentes de ese Municipio, beneficio que tendrá una vigencia de enero a mayo de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

22. Oficio número CES/SG/E-222/2017 de fecha 1º de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, a través del cual comunican que con fecha 31 de enero de 2017, aprobaron un Punto de Acuerdo por el que hacen del conocimiento de los Poderes Federales de la Unión, que se unen a la demanda nacionalista de dignidad y de respeto que merece el pueblo de México, siguiendo los principios normativos que señala el artículo 89, fracción X, y demás preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América, que surgieron a partir del 20 de enero de 2017, por motivo del cambio de administración de ese País.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.

23. Oficio número TCA-P-10/2017 de fecha 10 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual solicita a esta Soberanía, el apoyo para que le sea incrementado el presupuesto de ese Órgano Jurisdiccional, con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento del pago que le ha sido formulado por la Dirección de Pensiones del Estado y que dicho pago quede contemplado en el presupuesto para no incurrir en la responsabilidad señalada en el artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

24. Se da cuenta del oficio D.G.P.L. 63-II-8-2950 de fecha 2 de febrero del año actual, suscrito por el Diputado Raúl Domínguez Rex, Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual acusan recibo del Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se exhorta a la citada Cámara, para disminuir en un 50% el Impuesto sobre Producción y Servicios de las Gasolinas.

25. Se da cuenta del oficio número DC-2017-08-110 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. Jorge Morales, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Colima, mediante el cual comunica a esta Soberanía, que el Ing. Antonio Cárdenas Walle, Coordinador General del Sector Enlace Legislativo, Anticorrupción y Transparencia, será representante de esa

Cámara ante el H. Congreso del Estado, en las diferentes actividades que se realicen en los temas mencionados.

26. Se da cuenta de la copia del oficio número CSCT-6.6-0246/17 de fecha 7 de febrero del año actual, suscrito por el C. Ing. Guido Mendiburu Solís, Director General del SCT Colima, mediante el cual hace del conocimiento al Ing. Carlos Bussey Sarmiento, Director General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se solicita se exente del pago de la caseta de la carretera Colima-Manzanillo a todas las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de Seguridad Pública y Vialidad de los Municipios; solicitándole a su vez su intervención, ante quien corresponda, a fin de que se atienda la petición de este H. Congreso.

27. Se da cuenta de la copia del oficio número SSP/CGAJ/192/2017 de fecha 13 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, por medio del cual solicita al Secretario de Planeación y Finanzas, le informe la viabilidad financiera para que el Gobierno del Estado realice las erogaciones en relación al exhorto aprobado por esta Soberanía, para que a los agentes de la Policía Estatal Preventiva se les realice el pago de viáticos cuando estos se deriven de su encomienda, se les pague sus horas extras laboradas y que sus jornadas de trabajo sean de 12 por 24 horas.

28. Oficio circular número 101 de fecha 16 de diciembre de 2016, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual comunican la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, la Instalación de la Diputación permanente del Primer Receso, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.

29. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/0818/2017 de fecha 12 de enero del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, por medio del cual informan que con esta fecha instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Primer Período de Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el mismo.- Se toma nota y se archiva.

30. Oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/0819/2017 de fecha 12 de enero del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos legislativos correspondientes al Primer Período Ordinario de su Segundo año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva.

31. Oficio número DGPL-2P2A.-84.8 de fecha 2 de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la instalación del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.

32. Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor por el Diputado Nicolás Contreras Cortés y demás integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

33. Oficio número HCE/SG/AT/042 de fecha 15 de enero del año actual, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta misma fecha llevaron a cabo la Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota y se archiva.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 15 DE FEBRERO DE 2017.
LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
PRESIDENTE

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA
SECRETARIA

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
SECRETARIO

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente por vía electrónica.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar, adicionar y derogar, diversa disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción. Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara.

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de los medios de comunicación. Con su permiso Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Magaña Lara, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 76 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE PROPONE REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA EN MATERIA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera presentada por los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y la segunda por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, ambas relativas a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de Sistema Estatal Anticorrupción, lo anterior queda señalado bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Que mediante oficio número DPL/490/016, de fecha 22 de Junio de 2016, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada por los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de Sistema Estatal Anticorrupción.
2.- Que mediante oficio número DPL/558/016, de fecha 16 de agosto de 2016, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia del Sistema Estatal Anticorrupción.

A N Á L I S I S D E L A S I N I C I A T I V A S

I.- Que la iniciativa correspondiente al antecedente número 1, en su exposición de motivos señala textualmente que:

> *"La presente iniciativa es de la más alta importancia en aras de introducir mejoras sustanciales al funcionamiento del sistema político y de gobierno del estado de Colima. Significa un esfuerzo sin precedentes para contar con*

instituciones y funcionarios gubernamentales estrictamente apegados al interés público y alejado de la búsqueda de beneficios personales o de grupo. Se trata de una decisión estructural que promueve establecer un andamiaje institucional y procedimientos eficaces de prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, que toma forma en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción."

Su impulso está relacionado con la reforma a la Constitución Federal del 27 de mayo de 2015, en materia anticorrupción. Pero su origen es el histórico y legítimo reclamo ciudadano de contar con gobiernos de resultados, nutridos por servidores públicos íntegros, éticamente probados, que entiendan con claridad el propósito de la función pública, que es servir a la sociedad para mejorar su bienestar y resolver sus problemas públicos, mediante una actuación legal, transparente, y con rendición de cuentas.

Esta propuesta también está sustentada, debe decirse, en los postulados históricos del Partido Acción Nacional, que señalan la necesidad de emprender una lucha abierta y frontal contra la corrupción, pues éste es uno de los síntomas sociales que los fundadores del partido asociaron con el desorden moral de la nación. Se trata de una lucha panista que nunca debe abandonarse, con la finalidad de impedir y erradicar prácticas ilícitas ejecutadas por malos funcionarios y gobernantes.

Además, esta propuesta de reforma se fundamenta en la Plataforma Electoral 2015- 2018 del Partido Acción Nacional, en la que se reconoce al "Combate total a la corrupción como el primero de seis frentes estratégicos, cuyo contenido mayormente propone la presentación a nivel federal, de la iniciativa conocida como "Sistema Nacional Anticorrupción", el cual se erige de alcance nacional, estatal y municipal, y demanda que nadie deba quedar al margen de su aplicación.

En el mismo sentido, se toma como base el contenido de la Agenda Legislativa 2015-2018 del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de este H. Congreso del Estado de Colima, la cual señala como prioridad número uno, el "Emprender una Lucha Frontal contra la Corrupción", que comenzaría con la armonización legislativa constitucional para instituir en la entidad el Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas características principales serían:

- *Fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de gobiernos abiertos, transparentes y participativos.*
- *Blindar el uso de recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno*
- *Ser una amplia propuesta que contempla disposiciones legales para hacer más transparentes a las instituciones, y establecer controles eficaces sobre la deuda y la inversión públicas.*

- *Tener un alcance estatal, en coordinación con el nivel nacional y municipal, para que nadie quede al margen de su aplicación.*

  Ahora bien, la corrupción es un problema que se define como "el abuso del poder Público en beneficio privado", y se da en forma de muy diversas conductas y comportamientos, tales como sobornos, pagos irregulares, desvío de recursos, tráfico de influencias, facturas a sobreprecio, conflictos de interés, licitaciones acordadas, colusión, abuso de poder, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información gubernamental, nepotismo, ocupación privada de un espacio público entre otras.

  En México la corrupción es escandalosa, tanto por su magnitud como por el nivel de impunidad que la acompaña. "Observamos que tiene consecuencias negativas en el crecimiento pero la dejamos operar. Sabemos que daña la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye el bienestar pero optamos por practicarla. Identificamos a los que la cometen pero los premiamos con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad.

  Se trata de uno de los principales problemas estructurales de nuestro país. Su práctica no es privativa de un nivel socioeconómico particular, de un grado de educación especifico, de un nivel jerárquico concreto, o de un solo partido político.

  La corrupción esta culturizada a tal grado que la condenamos pero la justificamos; nos indignamos pero no pasamos de apelar a la ética; nos quejamos en redes sociales pero no hacemos nada en su contra; la señalamos en privado pero la permitimos y toleramos socialmente.

  El Índice de Percepción de corrupción que publica la organización Transparencia internacional señala que México es un País estancado en la corrupción, pues obtiene calificaciones promedio de 35, cuando cero es altamente corrupto y 100 es muy limpio. En la última edición de este estudio, que data del año 2015, nuestro país por ser uno de los más corruptos de los que integran la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asímismo, en los últimos cinco años nunca ha mejorado de la posición 95, que significa que es uno de los países más corruptos en el mundo.

  Las mediciones internacionales no sólo encuentran a nuestro país como uno de los que mayor corrupción experimenta, sino también como uno de los más ineficaces en él combate a este problema. A este respecto, el Banco Mundial expresa en su estudio lndicadores Globales de Gobierno del año 2014, que México está en la posición 154 de 209, en cuanto a la capacidad institucional para impedir, detectar y castigar los hechos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado.

Los anteriores datos son confirmados por mediciones nacionales. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía apuntan a que la corrupción es el segundo problema de mayor magnitud en el país, solamente por debajo de la inseguridad y la delincuencia. De la misma fuente se desprende que el 89% de los mexicanos considera que la corrupción se presenta de manera frecuente y muy frecuente.

En lo relacionado con los ámbitos e instituciones donde es más común observar hechos de corrupción, la citada encuesta lleva a concluir que los entes más corruptos son los policías, seguidos por los Partidos Políticos, el gobierno federal, el ministerio público, los diputados y senadores, los gobiernos estatales, y los gobiernos municipales. Al realizar un análisis de varios años se encuentra que México, tanto en el índice internacional como en los datos nacionales, lejos de Avanzar en el combate a la corrupción, se encuentra claramente estancado o ha retrocedido.

La extensión, la magnitud, el crecimiento y la profundidad de la corrupción en el país advierten la necesidad de brindar una respuesta institucional amplia y decisiva, en la que las normas y las autoridades sean un conjunto articulado que trabaje sistemática y transversalmente en contra de las faltas administrativas, de los hechos de corrupción y de la impunidad, al mismo tiempo que favorezca la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la justicia, y el apego estricto a valores como la honradez, la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia.

Es en atención a este imperiosos requerimiento, al impulso enérgico y constante del Partido Acción Nacional de promover una lucha frontal contra la corrupción, y al cumplimiento por parte de México de los tratados internacionales a los que está adherido, tales como la convención lnteramericana contra la corrupción de la organización de los Estados Americanos (1997) y la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003), que el H. congreso de la unión aprobó la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, en materia de corrupción.

Con esta reforma constitucional se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como una"...instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Con este Sistema se está ante un gran desafío para contar con una política de Estado completa, articulada y coherente de combate a faltas administrativas y hechos de corrupción, de alcance nacional.

Ante este reto y el impulso federal paradigmático para enfrentar el problema de la corrupción, es que los suscritos Diputados MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA y CRISPÍN GUERRA CARDENAS, así como los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , nos henos dado a la tarea de impulsar en el estado de colima, en un ejercicio de armonización legislativa con la Constitución Federal, la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, como la instancia local de coordinación entre autoridades competentes de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, , así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Así, en la presente iniciativa de reforma a la constitución política del Estado Libre y soberano de colima, en un afán de articulación normativa e institucional de las autoridades competentes en el combate a la corrupción, se propone:

1. *Sustituir el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo por un Tribunal de Justicia Administrativa con nuevas facultades de sanción a servidores públicos que cometan faltas administrativas y particulares vinculados a ellas.*

2. *Crear la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, la cual será autónoma y estará encargada de la investigación y persecución de los actos de corrupción que deriven en delitos, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.*

3. *Fortalecer y ampliar las facultades del órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, por ejemplo, para poder realizar auditorías en tiempo real, al mismo tiempo que se derogan los principios de posterioridad y anualidad.ART 20 CONST*

4. *Considerar la existencia, como pare del Sistema Estatal Anticorrupción, de órganos internos de control en todos los entes públicos estatales y municipales, así como en los órganos autónomos reconocidos por la Constitución Local.*

5. *Instituir el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia de coordinación de autoridades competentes en combate a la corrupción, conformado por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana. Son integrantes del Comité Coordinador un Representante del Comité de Participación Ciudadana, el titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, el titular de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, el representante de los órganos Internos de Control, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado .*

6. *Ampliar las facultades del Congreso del Estado, para que pueda expedir la ley que establezca las bases de creación y operación del sistema Estatal Anticorrupción, para elegir a los miembros del Comité de participación Ciudadana del Sistema Estatal, para designar a los titulares de los órganos internos de control, y para nombrar al Fiscal General Especializado en Combate a la Corrupción.*

7. *Ampliar el nivel constitucional de prescripción de las faltas administrativas graves, de tres a siete años.*

8. *El establecimiento de un nuevo régimen de responsabilidades, donde se separan las faltas administrativas, las faltas administrativas graves, y los hechos de corrupción constitutivos de delitos.*

9. *Se introduce de manera expresa el concepto de juicio político, y los caso en que procede".*

II.- Que la iniciativa correspondiente al antecedente número 2, en su exposición de motivos señala textualmente que:

"La corrupción, es junto con la desigualdad, uno de los problemas históricos más graves que enfrenta México, constituyendo un fenómeno pernicioso que ha afectado de manera significativa el desarrollo de la nación, y con ello, el bienestar de la sociedad. A lo largo de la historia, la corrupción ha afectado los esfuerzos del Estado mexicano para combatir la pobreza y la exclusión social.

Este fenómeno, debilita el propósito principal a cargo de los órganos del Estado que es el de impulsar el bienestar colectivo, así como salvaguardar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, generando vicios en la actuación de las instituciones y de la propia sociedad que tienden a ensanchar la brecha de desigualdad existente y que terminan privatizando el ejercicio de la función pública en beneficio de unos cuantos.

La corrupción se reproduce en buena medida como resultado de la debilidad de los poderes públicos, la ausencia de una auténtica política de Estado para combatirla y la carencia de medios de control y rendición de cuentas adecuados y funcionales; situación que genera una percepción social de impunidad que a su vez incentiva la proliferación de más corrupción.

En nuestro país se han venido dando algunos pasos significativos para afrontar el flagelo de la dupla corrupción-impunidad, a través de la implementación de estrategias en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, con instituciones y herramientas normativas cuyo objeto primordial es limitar el espacio a la discrecionalidad, la opacidad y el influyentismo, entre las cuales cabe destacar las siguientes:

- *Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (1982), y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2012), cuyo objetivo fue abatir el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, los abusos de autoridad y los conflictos de intereses.*

- *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2000) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (2000), que principalmente pretenden acabar con los favoritismo y sobornos en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de bienes, arrendamiento y ejecución de obra por parte del Gobierno Federal.*

- *Reforma constitucional en materia de contabilidad, gasto público y fiscalización (2008), con el objeto de terminar con el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y abatir las asimetrías de información y la ausencia de rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.*[1]

  Asimismo, México se ha comprometido a nivel internacional a tomar medidas para combatir la corrupción, firmando y ratificado tres importantes convenciones en la materia: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU), también conocida como la Convención de Mérida.

  Lo anterior dio impulso a una importante reforma en materia de Combate a la Corrupción, que se manifestó a través de cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), publicados el día 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, por la cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, imponiendo a las entidades federativas la obligación de armonizar y hacer compatibles sus disposiciones locales con las nuevas normas constitucionales aprobadas, con el fin de sumar esfuerzos para combatir la corrupción en la esfera pública y privada de nuestro país.

  El Decreto que contiene la reforma constitucional referida, en su artículo cuarto transitorio otorgó un plazo para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto.

  Por tanto, esta iniciativa tiene el propósito de ajustar la Constitución Local a la indicada reforma a la Constitución Federal, armonizando nuestro orden jurídico interno con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus implicaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos y de fiscalización de los recursos públicos.

  Asimismo, íntimamente vinculada con la reforma Anticorrupción en comento se encuentra la igualmente trascedente reforma en materia de Disciplina Financiera, que en esta iniciativa se aborda en conjunto con aquella para efectos de garantizar una mayor coherencia normativa y una mejor implementación sistémica.

  Sobre el particular, el 26 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Federal en materia de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, en la que se estableció que el Estado Mexicano deberá velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, bajo un marco de responsabilidad hacendaria, de manejo racional y escrupuloso de los instrumentos de crédito y deuda pública, con el propósito de coadyuvar al crecimiento económico, al desarrollo humano y al empleo.

  La reforma constitucional señalada determinó la facultad del Congreso de la Unión para aprobar leyes generales que contengan las bases para que los estados y municipios

[1] Dussauge Laguna, Mauricio I. 2010. "Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas: Avances, Limitaciones, Pendientes y Retrocesos." En Los Grandes Problemas de México Vol. XIII. ed. José Luis Méndez. México: El Colegio de México.

puedan incurrir en endeudamientos razonables y equilibrados, así como en materia de disciplina financiera que constriñan a la Federación, los estados y sus municipios, a una conducción sostenible de las finanzas públicas en sus respectivos ámbitos de competencia.

El Decreto de la citada reforma constitucional en sus artículos transitorios segundo y tercero, otorgó un plazo de 90 días naturales para que la Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los municipios, fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, y a su vez 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la referida ley reglamentaria para que las legislaturas de las entidades federativas realicen las reformas necesarias para armonizar su legislación con lo previsto por el Decreto y ley citada.

En alcance a lo previsto por los artículos transitorios del referido Decreto, el 27 de abril de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objeto de establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de su presupuesto y de la deuda que pretendan contraer en el futuro.

Las reformas constitucionales nacionales en materia de Combate a la Corrupción y Disciplina Financiera constriñen a las entidades federativas a realizar una reforma armónica, congruente y eficaz a su legislación local, comenzando por sus constituciones estatales, debiendo adoptar un nuevo paradigma en la relación Gobierno-Sociedad que restablezca la confianza en las instituciones, fortalezca el Estado de Derecho, impulse la estabilidad financiera, investigue y sancione las malas prácticas, y garantice los principios de legalidad, probidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

Los cambios que se proponen en la iniciativa son del tenor siguiente:

Se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

De conformidad con el reconocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, se faculta al Congreso del Estado para expedir la ley que establezca las bases de coordinación del referido Sistema, así como la ley que fije las responsabilidades administrativas, obligaciones y sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, y los procedimientos para su aplicación, todo ello de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes generales que ha expedido el Congreso de la Unión en la materia.

Se replantean los principios de actuación del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, suprimiendo los de posterioridad y anualidad, que ya no contempla la Constitución Federal, para posibilitar la revisión de manera casuística y concreta, de ejercicios anteriores al de la cuenta pública de las entidades en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatal o municipales.

Asimismo, dicho órgano fiscalizador tendrá la facultad de promover el fincamiento de responsabilidades de los servidores públicos que deriven de sus investigaciones por faltas administrativas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones correspondientes.

Al respecto, se propone la reconfiguración del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que pasaría a denominarse Tribunal de Justicia Administrativa, como un órgano jurisdiccional de carácter colegiado conformado por tres magistrados propietarios, con facultades para resolver procedimientos en materia de responsabilidades de los servidores públicos derivados de faltas graves, el cual entrará en funciones hasta en tanto se apruebe y entre en vigor la nueva ley que lo regule que al efecto expida el Congreso del Estado, preservando su facultad originaria de resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares.

Se establece la obligación para la Fiscalía General del Estado de contar con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, siguiendo el modelo establecido por la Constitución Federal para la Fiscalía General de la República, para garantizarla investigación y persecución de prácticas tipificadas como delitos asociadas a hechos de corrupción en la entidad, estableciendo los requisitos, la duración del cargo, el procedimiento de nombramiento y remoción del Fiscal Especial en la materia, así como las facultades y atribuciones de la fiscalía especializada en el ámbito local.

Se modifica la denominación del Capitulo Único del Título XI para intitularse "De las responsabilidades de los servidores públicos, y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción", y se establece un nuevo régimen jurídico de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de determinar procesos claros para cada tipo de responsabilidad en la que puede incurrir un servidor público o los particulares en su caso, así como las sanciones aplicables y la autoridad facultada para su imposición.

En este apartado, se reconoce la implementación de los órganos internos de control en los entes públicos estatales y municipales, con facultades de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; así como para presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De la misma manera, se establece de manera específica los funcionarios públicos que serán sujetos al procedimiento del juicio político, así como las etapas y autoridades competentes para su substanciación, y las sanciones aplicables en caso de comprobarse este tipo de responsabilidad, dotando de certeza y objetividad a este apartado de la Constitución Local.

Por su parte, se faculta al Congreso para que fije las bases, conforme a las cuales el Poder Ejecutivo Estatal puede celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, con la limitación que establece la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Federal y aprobar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes los contratos respectivos del Estado y los municipios, con las mejores condiciones del mercado, y previo análisis de su destino y capacidad de pago, así como en su caso reconocer y mandar pagar las deudas que contraiga el Estado.

En el mismo rubro, se establece que el Estado y los municipios podrán contratar obligaciones, sin la aprobación del Congreso, cuando sea destinado para el refinanciamiento, reestructuras o cubrir necesidades de corto plazo sin rebasar los límites

máximos que establece la propia Constitución Federal y la Ley de Disciplina Financiera, debiéndose liquidar a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, excepción que la propia Constitución Federal prevé en la fracción VIII de su artículo 117.

Asimismo, se establece que todas las resoluciones de Ley o Decreto que sean aprobadas por la Legislatura local incluyan en su dictamen correspondiente una estimación real sobre el impacto presupuestario de su aplicación, en concordancia y congruencia a lo que ordena con meridiana claridad el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera, ello con el propósito de que toda disposición normativa que autorice el Congreso y que implique costos económicos en su implementación se encuentre debidamente fundada y motivada bajo el soporte de un estudio técnico que determine su viabilidad.

Igualmente, se propone reformar la fracción IV del artículo 108 de la Constitución Local para establecer que la Hacienda Pública se formará por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, garantías, avales, así como de los llamados contratos de asociación público-privada.[2]

Finalmente, se agregan a la presente iniciativa disposiciones jurídicas en materia de remuneración de los servidores públicos con el objetivo de establecer las bases para su determinación, apegado a los principios de legalidad, transparencia, honradez y economía, así como sus límites, determinando que ningún servidor público podrá tener una remuneración mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente, y la prohibición para los representantes de elección popular de recibir de manera personal ni manejar de forma discrecional ningún tipo de recurso o fondo de apoyo social, ni disponer de ellos, salvo que la disposición de esos recursos o fondos corresponda al ejercicio de su función pública de acuerdo a la ley que los rija".

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales emitimos los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción I del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión es competente para conocer de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de ambas Iniciativas de ley relativas a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de Sistema Estatal Anticorrupción, se arriba a la conclusión de que ambas son substancialmente procedentes y apegadas a derecho, complementándose para de esta manera obtener el producto final contenido en este dictamen.

---

[2]Los contratos de asociación público-privada son aquellos que se realizan para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con el propósito de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país, los estados o los municipios.

Se coincide con los iniciadores, fundamentalmente en que la corrupción es uno de las grandes problemáticas sociales del País de las cuales nuestro Estado no es la excepción, y que impiden el sano desarrollo de la democracia y el bienestar general, al debilitar las instituciones públicas, el estado de derecho, y consecuentemente la afectación de los derechos humanos y la calidad de vida de los Colimenses.

Las causas que originan la corrupción, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores, que son como ejemplos una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.

Pero además la corrupción es un hecho que provoca la pérdida de credibilidad en el sistema político y en los actores que conforman nuestras instituciones públicas, lo que a la vez genera un justo reclamo y hartazgo en la sociedad, y sin dudas es un mal ejemplo para las nuevas generaciones de ciudadanos que ante tal cultura se les hace fácil incursionar en la delincuencia.

Es loable el reconocimiento del problema que al respecto ha hecho el Congreso de la Unión, y la principal respuesta o medida de solución, la reforma constitucional en materia de combate a la Corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, así como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambos ordenamientos jurídicos publicados el 19 de Julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

En dichos ordenamientos, se solicita que las Entidades Federativas, adopten una normativa que ataque los problemas de corrupción realizando una reforma armónica, congruente y eficaz a su legislación local, comenzando por sus constituciones estatales, para con ello recuperar la confianza en las instituciones fortaleciendo el Estado de Derecho, impulsando de muchas maneras la estabilidad financiera, así como investigar y sancionar las malas prácticas y que garantice los principios de legalidad, probidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

En razón de lo anterior, el presente proyecto de dictamen es el resultado de una reunión de trabajo, signada por el Diputado Héctor Magaña Lara, en su carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 19 de diciembre de 2016, con los temas relativos al Sistema Anticorrupción, a la que asistieron los CC. Dr. Mario de la Madrid Andrade, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, Lic. Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez Director Jurídico de Legislación de la Consejería Jurídica, Dip. Martha Leticia Sosa Govea, Dip. Joel Padilla Peña, Lic. René Rodríguez Alcaráz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Lic. Christian Velasco Milanés, Comisionado de INFOCOL, Lic.

Edgar Uriel Lara Chávez Auxiliar Jurídico de la Contraloría General del Estado, Licda. Roció Campos Anguiano Comisionada Presidenta de INFOCOL, Licda. Indira García Pérez, Comisionada de INFOCOL, Licda. Claudia Hernández Antúnez, Lic. Carla Martínez Ríos jurídico del Partido del Trabajo, Mario Ochoa García Jurídico del OSAFIG, Alejandro Camarena, Tesorero del Comité Ciudadano de Colima, Viridiana Solano Gracia asesor Jurídico en Dirección jurídica, Sixto Elohim Rivera Vázquez Dirección de Planeación de la PGJ, Ma. Del Carmen Morales Voguel, encargada de Despacho de Auditoría Financiera de OSAFIG, Águeda Solano Pérez Contralora General del Estado, Magdalena Harayd Ureña Pérez, Coordinadora Jurídica de la Contraloría General, Lic. Juan Pablo Carrasco Fernández, Director de Proceso Legislativo del Congreso del Estado y Lic. Enrique Velasco Cabrales, Director Jurídico del Congreso del Estado.

En dicha Reunión de trabajo los invitados a participar, realizaron diversas aportaciones de suma importancia para los integrantes de esta Comisión dictaminadora de los cuales queremos resaltar los siguientes puntos:

Por parte del Dr. Mario de la Madrid Andrade de la Universidad de Colima:

- *Respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, tiene que ver con los organismos internos de control que no se les otorga en el artículo 120 último párrafo, la posibilidad de impugnar las decisiones de la fiscalía, les otorga la posibilidad de que puedan impugnar las decisiones de ejercer las acciones correspondientes, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en el cuan deben incluirse los órganos de control interno, si no de otra manera pues estarán supeditados absolutamente a lo que hagan otras instancias, no obstante que ellos tienen la posibilidad incluso de tomar las acciones correspondientes.*

- *La Comisión Federal no se refiere a la posibilidad de que el Congreso intervenga es más bien secciona la intervención al Congreso, para autorizar los refinanciamientos y las estructuras de los créditos ya otorgado.*

- *En relación con la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes municipales y estatales de desarrollo por parte del OSAFIG, dice que justamente podrá emitir la recomendación que estime conveniente, la constitución federal habla de "solo" podrá emitir las recomendaciones, pero como se trata de analizar, realmente si se cumplieron los objetivos o no, creo que también tienen que prever, la posibilidad de sancionar por no cumplirlos, porque pude haber situaciones muy extremas*

- *En la Constitución Federal, si está previsto un plazo para prorrogar la presentación de la cuenta pública por parte del ejecutivo, es decir, el ejecutivo puede pedir una prorroga, en el caso de que no pueda cumplir en los tiempos correspondientes, pero esa prórroga, no puede ser mayor a 10 días naturales, ese tema no está en la constitución local, como se está previendo en la reforma.*

- *Hay una contradicción en la cual la constitución local le otorga autonomía técnica y de gestión al Fiscal Anticorrupción, sin embargo su nombramiento y remoción queda sujeto al Fiscal General, entonces sería un contrasentido. Realiza la sugerencia de analizar la posibilidad, como se le está dando autonomía, la posibilidad de que quedara como un órgano adelante del Fiscal General, no dependiente del Fiscal General.*

- *En la Constitución Federal se encuentra el hecho de que las recomendaciones del comité coordinador no sean vinculantes para los órganos correspondientes, pero entonces, estamos armando un comité coordinador, como está el federal, en donde resulta que sus recomendaciones no sirven para nada, básicamente, digo a la mejor orientadoras pero si no les haces caso no les hacen nada yo creo que aquí debiera analizarse que las recomendaciones sean vinculantes en el Estado de Colima.*

- *Hace la recomendación que el artículo 139, ya se le quite la expresión de "fuero", dicen "Gozarán de fuero desde el día en que tomen posesión de su cargo, y durante su ejercicio", esa palabra "fuero" de alguna manera es anacrónica y es el equivalente a inmunidad procesal, creo que es la más apropiada, sugeriría que aprovechando las reformas incluyeran de una vez, ahí, "Gozarán de inmunidad procesal desde el día en que tomen posesión de su cargo" en lugar de fuero.*

- *La desarticulación está en que si se le pone una cierta atención al tema del OSAFIG, se le pone una cierta atención al aspecto penal, buscando un mejor análisis a los temas de los órganos de control interno, es decir, las llamadas Contralorías porque insisto, si ustedes ven el tema de Responsabilidad Administrativa ¿Cuál es el órgano que lo aborda o que lo trata? ya que de nada sirve que se le den todas las atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de seguir responsabilidades administrativas cuando no todo es cuenta pública, hay otros temas de corrupción que no están tratados, ni siquiera en el ámbito Federal, por eso les digo que Colima puede ser el parte aguas si estructuran bien un sistema en donde se le dé la importancia que corresponde al tema de la corrupción visto así en forma como hoy dicen holística, en lo particular se le debe dar autonomía a la OSAFIG.*

- *Lo anterior en razón de que cuando llegue el tema al congreso, intervienen en la cuenta pública y a la hora de la hora, es un tema que se politiza cuando la idea debería de estar más en un ámbito completamente autónomo. Por otra parte, con una cierta participación de la sociedad civil, solamente se le da otra denuncia popular, no se le otorga la posibilidad de perseguir la responsabilidad administrativa, ya no digamos la penal ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.*

En la aportación por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, resalta lo siguiente:

- Se busca lograr un consenso entre todos los actores involucrados que van a *tomar parte del sistema Estatal Anticorrupción, estamos hablando pues, del órgano garante, transparencia que está aquí presente, de la Procuraduría, la Fiscalía, cuando ésta ya entre en vigor, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se convertirá en Tribunal de Justicia Administrativa, de los órganos de control interno, con su representante la contralora, General del Estado y así todos los actores que están involucrados y desde luego el componente fundamental que es la sociedad civil, que están involucrados en el andamiaje que va a conformar el Sistema Estatal Anticorrupción.*

- *De acuerdo a nuestros cálculos tiene que estar aprobada el 19 de enero del próximo año 2017, es nuestra fecha límite, para tenerla aprobada a partir de la aprobación de esta reforma Constitucional Local, van a venir una serie de nuevas reformas a las leyes secundarias, la que constituya por ejemplo, y le de organización al Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, también importante, derivada a su vez de la Ley General que ya está aprobada, la Ley de Responsabilidades Administrativas local, a su vez, derivada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y así una serie de normas.*

La aportación por parte de Lic. Mario Ochoa García, Jurídico de OSAFIG:

- *En cuanto al Artículo 116 de la reforma a la Constitución Local, considero importante mantener las palabras referentes a iniciar estas revisiones no solo derivado de denuncias, sino también de información pública, o de indicios, esto le daría mayor atribución al órgano fiscalizador para poder iniciar las revisiones correspondientes, aún cuando no exista, denuncia de por medio, porque estaríamos condicionado ese requisito de procedibilidad.*

- *En cuanto al Artículo 117, falta añadir el plazo al cual el Congreso del Estado debe estar sujeto para emitir la convocatoria para elegir el nuevo Auditor Superior del Estado, actualmente no se prevé, entonces, eso nos está generando, incluso en algunos estados del país, amparos por omisiones legislativas.*

- *En el artículo 120 de la propuesta del Ejecutivo está hablando de la clasificación de las faltas administrativas, en graves y no graves, considero correcto que se precise que esta clasificación va a ser atendiendo a la Ley General de Responsabilidades que ya esta publicada en el Diario Oficial de la Federación para no dejar al arbitrio de los órganos internos de control o del órgano fiscalizador para hacer esta clasificación.*

- *En el Artículo 128 Bis, que habla sobre la integración del Comité Coordinador, en la iniciativa propuesta del Ejecutivo creo que nos falta por ahí añadir que este Comité será presidido por el representante del comité de coordinación ciudadana, que viene más o menos en ese sentido en la reforma constitucional y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.*

- *En cuanto al Artículo 144 de la reforma propuesta, nos habla sobre las remuneraciones a los servidores públicos, hay una parte que habla sobre que, los servidores públicos no pueden recibir remuneraciones extraordinarias como bonos, gratificaciones o cualquier concepto análogo, en ese aspecto considero que debe hacerse extensiva esa prohibición para manejar recursos como de fondos de ayuda social o de recibir remuneraciones extraordinarias con cargo al presupuesto de egresos para el resto de los funcionarios y hacerla extensiva para los Magistrados del Supremo Tribunal de justicia en el Estado, a los Magistrados del Tribunal Electoral, para los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de Arbitraje y Escalafón, a los Concejeros Electorales del Instituto Electoral y servidores públicos desde el nivel de secretario, titular de organismos públicos descentralizados, desconcentrados y autónomos de Estado, hasta el nivel de directores de área, en la administración pública estatal, o sus equivalentes en la administración municipal, y Paramunicipal, así como de las áreas y dependencias administrativas de los poderes legislativo y judicial del estado.*

En la aportación de Lic. Christian Velasco Milanés, Comisionado de INFOCOL, resaltamos:

- *En lo relacionado a la autonomía presupuestaria, no veo que ni la fiscalía especializada en combate a la corrupción, la doten de esa autonomía ni tampoco al Tribunal de Justicia Administrativa, si hablan de su libertad de decisiones, pero no de su autonomía presupuestaria, considero importante que estos dos órganos, incluido el Instituto de Transparencia, porque somos parte de y somos un órganos autónomo, no gozamos de esa autonomía en general, porque si el Fiscal y el Tribunal van a combatir la corrupción pues tienen que gozar de esa autonomía necesariamente.*

Ahora la aportación de Licda. Rocío Campos Anguiano, Presidenta Comisionada De INFOCOL, resalta los siguientes puntos:

- *En cuanto a los Órganos de Control Interno, los Órganos Autónomos, va a ser nombrado por parte del Congreso, no se establece como va a ser el mecanismo o quizás en las Leyes Secundarias se regule quienes nombrarán a los titulares de los órganos de control interno de cada órgano autónomo, que serían algunas de las precisiones que ya se han hecho, como incluir al Presidente del Supremo Tribunal de justicia en el Comité También del Sistema Estatal Anticorrupción, y también sería importante que el sistema tenga cierto presupuesto para operación.*

Por parte de la Licda. Viridiana Solórzano García, Asesora Jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, aporta lo siguiente:

- *Apoyo la propuesta que hace el Ejecutivo del Estado, referente a que solo exista una fiscalía especializada anticorrupción, yo no apoyo el hecho de que le Fiscalía, que exista un Fiscal Anticorrupción autónomo, si creo que nuestros legisladores deben de tomar en cuenta la situación económica del estado y que tan funcional va a ser el hecho de que existan dos fiscalías,*

por ejemplo, la Fiscalía General del Estado y a parte un Fiscal Anticorrupción.

Por parte del Lic. Sixto Elohim Rivera Vázquez, Dirección De Planeación De La Procuraduría General De Justicia En El Estado:

- *En el tema de los órganos de Control Interno, cada una de las dependencias debe de tener su propio organismo, que va a vigilar y supervisar el desempeño de la función de esa dependencia, principalmente, su función de ingresos y egresos que se viene generando y no nada más es la parte de la supervisión del desempeño del servidor público, sino como este ejerciendo ese recurso y como se está aplicando.*

Por parte del Lic. René Rodríguez Alcaráz, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado:

- *Si bien es cierto que la reforma de mayo del 2015, la Federal, habla de que cada uno de los órganos autónomos tengan su propio órgano interno de control, desde aquel momento, les dije que yo consideraba que era incosteable financieramente e infuncional, lo que se puede hacer es un ejercicio que ya lo hace la federación, yo pienso que se debe fortalecer al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, y que se designe una persona que sea el controlador de cada uno de los órganos autónomos, que este materialmente ubicado en la dependencia, pero dependa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, porque si ponen a una persona que dependa de la propia dependencia que va a revisar, pues la verdad es como poner a la Iglesia en manos de Lutero.*

- *Considero que el OSAFIG fortalecido debería de designar una persona que estuviera en transparencia otro que estuviera en lo contencioso, otro que estuviera dedicado en los órganos, que materialmente estuviera ahí establecido, pero dependiera del propio órgano de control, que a quien le diera cuentas sería al Titular del Órgano de control para que pudieran evidentemente hacer su trabajo con la transparencia que se requiere.*

- *Los tiempos que estamos viviendo con respecto al concepto de los derechos humanos son muy especiales, yo pediría con respecto a la propuesta que manda el Ejecutivo del Estado, por ejemplo aquí se dice que el Magistrado que se nombre o los magistrados que se nombre para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, van a estar durante seis años improrrogables, sin embargo, si ustedes ven el propio titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, puede quedarse una vez más, a todo mundo le está diciendo que se pueden quedar una vez más, entonces, obviamente hay que tener cuidado con el principio de equidad, porque en un momento determinado se hace un comparativo se va a poder determinar el porqué aquí se dice que no puede estar más que en un periodo y en todos los demás nombramientos pueden permanecer en el cargo, una vez más.*

La L.A.E. Águeda Solano Pérez. Contralora General Del Estado, en sus aportaciones señala que:

- *La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción trae aparejado 4 ejes, específicamente el fortalecimiento de la OSAFIG, un reforzamiento de la Contraloría General del Estado, por todas las atribuciones que mencionan, la transformación del Tribunal Contencioso Administrativo, ahora el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y la creación de la Fiscalía Especializada como una institución encargada de perseguir y castigar actos de corrupción propiamente la Contraloría General del Estado, se convertiría en un órgano de control interno del Gobierno del Estado de Colima, con las facultades que determine la ley respectiva para prevenir, corregir e investigar, actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, de igual manera tendrán la facultad de sancionar aquellas que sean distintas a las de competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como para presentar denuncias por hecho u omisiones que puedan ser constitutivas de delito, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Así las cosas, la Contraloría General del Estado, contará con nuevas atribuciones y competencias en el estado, entre las cuales podemos destacar las siguientes, la contraloría sería la encargada de fiscalizar la aplicación de los recursos públicos que maneje y de sancionar faltas que caigan en su ámbito de responsabilidad.*

- *También le correspondería en este caso a la Contraloría General del Estado, investigar actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos la cual denunciará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para los casos que sean de competencia de estos órganos. La Contraloría podrá recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.*

- *Considero sumamente importante también lo que se mencionaba en cuanto a que todo esto implica una inversión de recursos, implica efectivamente dotar de suficiencia presupuestal a todos los entes que forman parte del sistema estatal porque anticorrupción dado que si no tenemos fortalecidas las estructuras que le van a dar esta fortaleza, todas estas leyes anticorrupción pues van a ser solo de papel.*

Por parte de la Licda. Claudia Margarita Hernández Antúnez, Directora de Planeación y Vinculación Institucional del Poder Judicial del Estado:

- *Como bien decían ya otras personas, también la Contraloría, que nosotros no formamos parte del Comité Coordinador, ya en la propuesta del Ejecutivo, sería únicamente la única observación que tenemos, además de la situación presupuestal que ya todas las instituciones han dicho y ya creo*

que todas las instituciones tienen la preocupación financiera, nosotros nos sumamos a ella también.

Por parte de Alejandro Camarena Berra, Tesorero de cómo Vamos Colima:

- *En cuanto al nombramiento del Fiscal Especializado, creemos que también por un ejercicio que ya hubo en la elección del Auditor Superior, considero que también podrían involucrar a la ciudadanía en la elección del Fiscal Especializado porque si estamos hablando que es una Ley Anticorrupción y a nosotros como ciudadanos, lo que más nos importa es ese punto, hoy en día es lo que más le hemos estado insistiendo en este tema yo creo que la ciudadanía debería de estar involucrada en el tema del nombramiento del Fiscal Especializado.*

- *Por otra parte, se está hablando de que no hayan sido presidentes municipales, secretarios, contralor de ayuntamientos etc., un año anterior a su designación, yo consideraría que por lo menos tres años, para que haya más independencia, yo considero que un año es muy poco tiempo. Y en cuanto a una situación que tal vez debamos tomar en cuenta, es en cuanto a la remoción del Fiscal que se esté nombrando, digo, creo que eso queda también por parte del Congreso, también insistiría en que se involucrara e la ciudadanía, en caso de remoción porque eso estaríamos hablando de mucha transparencia en cuanto a que no es una cuestión de, pues compadrazgos o algo así.*

TERCERO.- En este sentido, la presente reforma Constitucional Local obedece a una homologación con la reforma a la Constitución Federal citada, con objeto de sentar las bases de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos y contar con una política de Estado completa, articulada y coherente de combate a faltas administrativas y hechos de corrupción, incluidas en el Sistema Estatal Anticorrupción, así como su coordinación y vinculación con el Sistema Nacional.

Esta Comisión considera importante invocar el Artículo 113 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, la cual sirve como parteaguas para dicha Iniciativa relativa a reformar diversos Artículos de la Constitución Local.

Artículo 113. *El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:*

I. *El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía*

Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

II. *El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y*

III. *Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:*

a) *El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;*

b) *El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;*

c) *La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;*

d) *El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;*

e) *La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.*

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Además, nuestro País cuenta con la firma de Tratados vigentes contra la Corrupción, uno de ellos es la Convención Interamericana Contra la Corrupción, adoptada en la Ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, aprobado por el senado el 30 de Octubre de 1996 y entrando en vigor el 02 de Julio de 1997. En su Artículo III, nos habla sobre:

Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen

con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

Lo anterior consideramos que es de suma importancia para dicho proyecto de dictamen, ya que no se está hablando de un tema novedoso, si no de un requerimiento urgente por parte de nuestra sociedad, que exige más claridad en el quehacer de la administración pública, y así mismo es un llamado a las leyes, a que cada vez más se adecuen a una realidad jurídica y social.

Ahí es donde radica la importancia de la presente reforma, que reconoce el problema de la corrupción por un lado, y establece medidas de solución por otro, como por ejemplo con el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación conformada por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana. Siendo integrantes del Comité Coordinador un Representante del Comité de Participación Ciudadana, el titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, el titular de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, el representante de los órganos Internos de Control, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Además de lo anterior, destacan como principios y directrices fundamentales de la presente reforma:

a) Sustituir el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo por un Tribunal de Justicia Administrativa con nuevas facultades de sanción a servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y particulares vinculados a ellas.

b) Crear la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, la cual estará encargada de la investigación y persecución de los actos de corrupción que deriven en delitos, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

c) Fortalecer y ampliar las facultades del órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, por ejemplo, para poder realizar auditorías en tiempo real, al mismo tiempo que se derogan los principios de posterioridad y anualidad.

d) Considerar la existencia, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de órganos internos de control en todos los entes públicos estatales y municipales, así como en los órganos autónomos reconocidos por la Constitución Local.

e) Ampliar las facultades del Congreso del Estado, para que pueda expedir la ley que establezca las bases de creación y operación del sistema Estatal Anticorrupción, para elegir a los miembros del Comité de participación Ciudadana del Sistema Estatal, para designar a los titulares de los órganos internos de control, y para poder objetar el nombramiento de Fiscal General Especializado en Combate a la Corrupción.

f) Ampliar el nivel constitucional de prescripción de las faltas administrativas graves, de tres a siete años.

g) El establecimiento de un nuevo régimen de responsabilidades, donde se separan las faltas administrativas, las faltas administrativas graves, y los hechos de corrupción constitutivos de delitos.

Por lo que respecta a la composición del Comité Coordinador de una manera plural, con ello se garantiza que la elaboración de políticas públicas combine la visión de cada autoridad que lo compone, derivado de la especialización y naturaleza de sus respectivas funciones, así como con las exigencias de la sociedad civil representada por el Comité de Participación Ciudadana, quien será el encargado de coordinar y encauzar de manera permanente los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
El Comité de Participación Ciudadana se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.
La meta general del Sistema Estatal Anticorrupción nos queda claro, es que todos los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y se garantice el fin último del estado de derecho: la justicia. Lo que busca es convertir la corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos. Por ello, el Sistema se integra por instancias competentes y afines, cuyo objeto es coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales en materia de prevención, control y sanción de la corrupción, así como la promoción de la integridad, y la participación ciudadana.
Otro de los objetivos principales del Sistema Estatal Anticorrupción es la creación de políticas públicas que regulen la actuación de particulares y servidores públicos dando a conocer a la sociedad en general los criterios relacionados al tema de la corrupción. En la medida que estas políticas públicas permeen en nuestra sociedad se podrá generar una cultura cívica en donde la corrupción no tenga cabida.
De capital importancia resulta la obligación de los Servidores Públicos de presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés ante las autoridades competentes, mecanismo transparente y de rendición de cuentas que inhibirá la comisión de actos de corrupción en el desempeño de la función pública, considerando que:
La declaración patrimonial, permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el

patrimonio del candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares.

La declaración de intereses permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario. Hacer pública esta información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares.

La declaración fiscal es el comprobante de que un contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos. La declaración fiscal corrobora que quien aspira a un cargo público ha contribuido a los recursos públicos que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo.

Finalmente, por lo que respecta a las faltas administrativas que podrán imponerse a los Servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán fijarse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable, y en base a los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; se dividen en faltas administrativas de carácter no grave, las de carácter grave y los actos de particulares vinculados con faltas administrativas

En lo que respecta a personas morales, se tratará de la sanción económica; la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; la suspensión de actividades, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios; la disolución de la sociedad respectiva, y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Como se aprecia, podemos concluir que parte medular de la reforma propuesta consiste en erradicar la impunidad, es decir que ninguna persona sea servidor público, particular o persona moral que cometa faltas administrativas, actos de corrupción que afecten la hacienda pública o la buena marcha de la función pública quede sin su sanción correspondiente; de esta manera se estará logrando un eficiente y frontal combate al flagelo de la corrupción.

De igual manera se coincide en términos generales con el Ejecutivo del Estado en lo que respecta a que efectivamente estrechamente vinculada a la reforma que instaura el Sistema Estatal Anticorrupción, se encuentra la reforma en materia de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo del 2015 con objetivo de que los endeudamientos que contraigan los referidos ordenes de gobierno sean

razonables y equilibrados y que no pongan en riesgo la estabilidad y sustentabilidad de las finanzas publicas.

Lo que es congruente con el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Federal en sus párrafos segundo cuarto que son del tenor siguiente:

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

Sin lugar a dudas con la homologación de nuestra máxima carta Local a la Federal en materia de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios, que estará sentando las bases para la expedición en nuestro Estado de la respectiva ley secundaria.

Importante es precisar que a diferencia de la iniciativa presentada por los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en que se propone que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sea un Órgano Constitucional Autónomo que será nombrado a través de una terna propuesta por el ejecutivo del Estado y aprobado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado; la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima propone no reconocer el carácter de Órgano Constitucional Autónomo a la referida Fiscalía, y que su titular sea nombrado y removido por el Fiscal General del Estado, si bien dicho nombramiento y remoción puede ser objetado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado.

A juicio de los integrantes de esta Comisión dictaminadora es improcedente jurídicamente reconocer el carácter de Órgano Constitucional Autónomo, en primer lugar porque la Fiscalía A nivel Federal si bien goza de autonomía técnica y de gestión depende de la Procuraduría General de la República, máxime que en términos de lo dispuesto por el artículo 116 fracción IX de la Constitución General de la República las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de Procuración de Justicia se realicen en base a los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que evidentemente la autonomía queda garantizada, pero sobre todo en función de que la Institución del Ministerio público es indivisible en términos de lo preceptuado por el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que no es viable su separación Orgánica en órganos desvinculados ya que la Institución del Ministerio Público se insiste debe ser única e indivisible.

De igual manera, no coincidimos con los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Crispín Guerra Cárdenas por lo que respecta a derogar las fracciones II y III del artículo 116 de la Constitución particular del Estado, ya que ello implicaría un retroceso en materia de fiscalización el derogar la facultad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de revisar ejercicios anteriores de la cuenta pública de las entidades en revisión cuando el programa, proyecto o erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales; o bien derivado de denuncias efectué la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas así como respecto de ejercicios anteriores. Más si se considera que el artículo 79 fracción I párrafos cuarto y quinto de la constitución Federal otorga las mencionadas facultades a la Auditoría Superior de la Federación.

Salvo las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales realizamos por técnica legislativa, los ajustes pertinentes, correspondiente a las dos iniciativas en comento, ya que las mismas representan definitivamente un gran esfuerzo por erradicar la impunidad derivada de hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, particulares o personas morales que afecten la hacienda pública, así la buena marcha de la función pública, con lo que seguros estamos se estará previniendo, reduciendo y erradicando este flagelo que tato ofende con justa razón a la sociedad.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 33 fracciones XI, XI Bis, XXIX y XLI Bis; 58 fracción XXXVIII; 60 párrafo segundo; 64; 77; 81 párrafos segundo y

tercero; 116; 117; 118 párrafos tercero y cuarto; la denominación del Capítulo Único del Título Sexto; 119; 120; 121; 126; 128; y 144; **se adicionan** un párrafo octavo al artículo 20; la fracción X Bis al artículo 33; un párrafo segundo al artículo 83; y el artículo 120 Bis; y **se derogan** la fracción segunda del articulo 74; y los artículos 122, 123,124 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los siguientes términos:

Artículo 20. . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Los titulares de los órganos internos de control de los órganos estatales autónomos previstos en esta Constitución, serán nombrados en los términos de las respectivas leyes que los regulen.

Artículo 33. . . . . .

I a la X. . . . . .

X Bis. **Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción; así como expedir la ley que distribuya competencias para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos estatales y municipales, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación**;

XI. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del **año anterior de los poderes del Estado, los órganos estatales autónomos previstos en esta Constitución, los ayuntamientos y las entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, examinar que los ingresos deriven de la aplicación de los ordenamientos jurídicos que los autoricen, comprobar si los egresos se han ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto, cerciorarse que la obra e infraestructura pública se haya adjudicado y ejecutado con apego a**

la legislación en la materia, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos.

La revisión no sólo comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderá a una revisión legal, económica, financiera y contable del ingreso y gasto público, verificará la exactitud y justificación de las cantidades erogadas y que los cobros y pagos efectuados se sujetaron a los precios y tarifas autorizadas o de mercado.

Asimismo, fiscalizará las acciones de los referidos entes públicos en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, incluyendo los que se destinen y ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada, o los que en su caso se transfieran a fideicomisos, mandatos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.

La revisión y fiscalización de la Cuenta Pública la realizará el Congreso del Estado a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Si del examen que éste realice, aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, y en general, existan irregularidades en el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, se determinarán las responsabilidades y promoverán las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Constitución y la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, dicho órgano podrá emitir las recomendaciones que considere necesarias, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del año anterior de los entes públicos señalados en el párrafo primero de esta fracción, deberá ser enviada al Congreso del Estado, debidamente aprobada por sus respectivos órganos de gobierno, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio del Congreso.

El Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, debiendo emitir al efecto el Decreto correspondiente, con base en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública que le remita el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas continúen su curso legal.

El Congreso evaluará el desempeño del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

XI Bis. **Elegir al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los términos previstos en esta Constitución y la ley de la materia**;

XII a la XXVIII. . . . . .

XXIX. Aprobar los nombramientos de los magistrados del **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado**, propuestos por el titular del Poder Ejecutivo, en los términos previstos en esta Constitución;

XXX a la XLI. . . . . .

XLI Bis. Expedir la ley que instituya el **Tribunal de Justicia Administrativa** del Estado, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos **y que establezca su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones; y**

XLII. . . . . .

Artículo 58. . . . . .

I a la XXXVII. . . . . .

XXXVIII. **Proponer** los nombramientos de los magistrados del **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado** y someterlos a la aprobación **del Congreso del Estado en los términos previstos en esta Constitución**;

XXXIX a la XLII. . . . . .

Artículo 60. . . . . . .

En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará de un Secretario General de Gobierno y de los Secretarios, Consejero Jurídico, **Contralor General** y demás servidores públicos de las dependencias y entidades que integran la administración pública centralizada y paraestatal en los términos que dispongan las leyes respectivas.

. . . . .

. . . . .

Artículo 64.- Mientras se encuentren en ejercicio de su cargo los secretarios de la Administración Pública Estatal, el Consejero Jurídico **y el Contralor General** no podrán desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el Notariado.

Artículo 74. . . . . .

I. . . . . .

II. DEROGADO

III.a la XIV. . . . . .

Artículo 77.- La función jurisdiccional en materia administrativa, fiscal **y de responsabilidades**, estará a cargo del **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en los términos que disponga esta Constitución y la ley que lo regule**.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

El Tribunal **será colegiado** y estará integrado por **tres magistrados quienes deberán cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia** previstos en el artículo 69 de esta Constitución.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado durarán en el ejercicio de su encargo seis años.

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado el nombramiento de la persona que considere idónea para ocupar el cargo de magistrado, quien deberá cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en esta Constitución. El Congreso, previa comparecencia de la persona propuesta, designará al o los magistrados respectivos con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles. Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por aprobada la propuesta de nombramiento de magistrado presentada por el Ejecutivo Estatal.

Si el Congreso se pronunciase dentro del plazo indicado negando la aprobación, lo notificará al titular del Poder Ejecutivo, quien deberá realizar una segunda propuesta de nombramiento, procediéndose en los mismos términos del párrafo anterior.

En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos propuestas de nombramiento sucesivas, se tendrá por aprobada la propuesta que libremente determine el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

Durante el ejercicio de su cargo los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sólo podrán ser removidos por las causas graves que señale la ley.

La ley que regule al Tribunal establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones.

Artículo 81. . . .

La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones contará con los fiscales especializados, agentes, **peritos, policía investigadora y demás servidores públicos** que estarán bajo su autoridad en los términos que establezca **esta Constitución y** la ley. **Las fiscalías especializadas se constituirán y funcionarán como órganos con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus funciones**.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá a su cargo la investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción en el ámbito de competencia del Estado.

El nombramiento del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción se sujetará al procedimiento de nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, previsto por el artículo 77 párrafos sexto, séptimo y octavo de esta Constitución.

Los elementos policiacos del sistema de seguridad pública podrán intervenir de manera auxiliar en la investigación de los delitos en los términos que dispongan las leyes respectivas.

Artículo 83. . . . . .

I a la VI. . . . . .

Para ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General previsto en este artículo.

Artículo 116.- En el lugar de residencia de los poderes del Estado habrá un Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento **y resoluciones, en los términos que disponga esta Constitución y la Ley.** La función de fiscalización a cargo de ese órgano se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. **Los informes de auditoría concluidos que emita tendrán carácter público**.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública correspondiente.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos **y deuda**, así como el manejo, la custodia y la aplicación de fondos **y recursos locales de los entes públicos** a que se refiere la fracción XI del artículo 33 de esta Constitución, **así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas**, **a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley**.

   También en los términos que establezca la ley, fiscalizará, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, las participaciones federales que correspondan al Estado y sus municipios.

II. Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública de las entidades en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque, para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de **los planes** o programas estatales o municipales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, emita dicho Órgano, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión;

III. **Sin perjuicio de lo previsto en la fracción anterior, en las situaciones que determine la ley, derivado de denuncias o indicios de irregularidades, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los términos y plazos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes**.

IV. Evaluar el manejo y ejercicio de los recursos económicos **que disponga el Estado y los municipios de conformidad con las bases dispuestas** en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos que dispongan **las leyes de la materia**.

V. **Presentar**, al Congreso del Estado, el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX de esta Constitución, el cual tendrá carácter público;

VI. **Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales o municipales, y a los particulares**;

VII. Rendir un informe anual pormenorizado al Congreso del Estado de las actividades realizadas en ejercicio de sus funciones de **control, auditoría** y fiscalización, en los términos que determine la ley de la materia; y

VIII. **Guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la entrega al Congreso del Estado del informe de resultados a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición**.

La falta de cumplimiento a lo dispuesto en este precepto será causa de responsabilidad del titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y de los funcionarios del mismo.

Artículo 117.- El Congreso del Estado, previa convocatoria pública con la participación de la sociedad civil, designará al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para

su designación. Dicho titular durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución.

Para ser titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental se requiere:

I. **Cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General del Estado se encuentran previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 83 de esta Constitución**;

II. **Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello**;

III. Contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; y

IV. **No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado, Contralor del Estado o del Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante los cuatro años previos al de su designación y que en el ejercicio de la función pública no haya sido sancionado por hechos de corrupción**.

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Artículo 118. . . . .

. . . . .

Dicho órgano gozará de acceso irrestricto a la información pública. Los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos, independientemente de su origen o naturaleza, deberán proporcionar la información y documentación que se le solicite, **de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y** sin perjuicio de la competencia de otras autoridades **y de los derechos de los**

usuarios del sistema financiero. Tratándose de recursos federales deberán atender los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.

En caso de no proporcionar los auxilios o la información requerida, los responsables serán sancionados en los términos que establezcan **las leyes**.

TÍTULO XI

CAPÍTULO ÚNICO

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos **y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado**

Artículo 119.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como a los servidores públicos de los órganos estatales autónomos previstos en esta Constitución, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

El Gobernador, los diputados **integrantes del Poder Legislativo del Estado**, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros de los ayuntamientos, los integrantes de los órganos **estatales** autónomos previstos en esta Constitución, así como los demás servidores públicos estatales y municipales, serán responsables por infracciones a la **Constitución Federal**, esta Constitución y a las leyes generales, federales y locales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos públicos **federales y locales**.

Los servidores públicos que determine la ley y en los términos que en ella se disponga, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.

Artículo 120.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. **Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 120 Bis a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho**.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. **La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable**.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. **Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones**.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y los órganos internos de control estatales y municipales, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se estará a lo dispuesto al procedimiento de vigilancia y disciplina que de manera autónoma se prevea al interior de dicho poder, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución; **y**

IV. **El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales**.

Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Contraloría General del Estado, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes correspondientes.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares en términos de lo dispuesto por el artículo 1, fracción XII de esta Constitución, tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 120 Bis.- Podrán ser sujetos de juicio político el Gobernador, los diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado, los miembros de los ayuntamientos, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Tribunal de Justicia Administrativa, los consejeros del Instituto Electoral, los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el Fiscal General del Estado, los secretarios de la Administración Pública del Estado, el Consejero Jurídico y los titulares de los órganos internos de control del Estado y los municipios.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el Congreso del Estado procederá a la acusación respectiva ante el Supremo Tribunal de Justicia, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de dicho Congreso, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación el Supremo Tribunal de Justicia, erigido en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión,

una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia se ajustarán a las reglas que para la substanciación del procedimiento de juicio político establezca la ley.

Artículo 121.- Los diputados y munícipes propietarios y el Gobernador del Estado gozan de inmunidad procesal desde la declaración de validez de su elección. Los diputados y munícipes suplentes desde el momento que asuman la titularidad y ejerzan la función. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Tribunal de Justicia Administrativa, los secretarios de la Administración Pública del Estado, el Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, los consejeros del Instituto Electoral del Estado, así como los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, gozarán de inmunidad procesal desde el día en que tomen posesión de sus cargos y durante su ejercicio.

Para proceder penalmente contra los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución del Congreso del Estado fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo o dejado de tener inmunidad procesal por cualquier causa, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán

graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 122.- DEROGADO

Artículo 123.- DEROGADO

Artículo 124.- DEROGADO

Artículo 126.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 121 de esta Constitución.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 120 de esta Constitución. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Artículo 128.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. **El Sistema Estatal contará con un Comité Coordinador que estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; los titulares del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Contraloría General del Estado en su carácter de Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo del Estado; por los Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado**;

II. **El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley**;

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Estatal, en los términos que determine la ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Sistema Estatal y el Sistema Nacional Anticorrupción;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité Coordinador sobre la atención que brinden a las mismas.

Artículo 139.- DEROGADO

Artículo 144.- Los servidores públicos de los poderes del Estado, los órganos estatales autónomos previstos en esta Constitución, los ayuntamientos, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, y de cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser estrictamente proporcional a sus responsabilidades y a la función que realizan.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales;

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente;

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos cuando la ley así lo permita, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente;

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado;

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie; y

VI. Será causa de responsabilidad las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado continuará funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta en tanto entre en vigor la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, de esta Constitución y se constituya el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de este ordenamiento.

TERCERO. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán, en su oportunidad, a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa en los términos que determine la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis de esta Constitución, en correlación con el 77 de este ordenamiento.

CUARTO. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis de esta Constitución, en correlación con el 77 de este ordenamiento, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley determine.

QUINTO. En observancia al artículo transitorio octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, los magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados.

SEXTO. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales que resulten aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberanos de Colima y la legislación local en la materia.

El Gobernador dispondrá se publique, circule y observe.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Decreto, se dé trámite a lo señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

A T E N T A M E N T E
COLIMA, COL., 16 ENERO DE 2017

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo
Secretario

Dip. Joel Padilla Peña
Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la tribuna nuestra compañera Martha Sosa Govea.

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, muy buenas tardes, honorable Asamblea. Amable auditorio, medios de comunicación. Iniciamos esta sesión con uno de los dictámenes más importantes que podamos haber visto en los últimos meses. Yo me congratulo de poder participar tenía la información de que ya se había visto en una ocasión anterior, y bueno, no puedo dejar de manifestar la satisfacción que tenemos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y su servidora, en lo particular, porque

gracias a la confianza de mis compañeros, pude hacer punta, o pude liderar el proyecto de presentar esta iniciativa, que se está dictaminando el día de hoy, conjuntamente con la del Ejecutivo del Estado. Celebro que finalmente en el dictamen se hayan recogido aspectos tanto de una como de otra iniciativa, que en esas reuniones de trabajo en que nos hicieron favor de invitarnos la Comisión dictaminadora, hayamos podido aportar argumentos y sobre todo que se nos haya escuchado, a mi me parece que es de una toral importancia, porque aquí los 25 Diputados coincidimos en que si hay algo que molesta, que lacera que preocupa a la sociedad, sin dudas, en un primer término, mas allá quizás, de la preocupación por la inseguridad o de la preocupación por la generación de empleos, es la corrupción. La corrupción sobre todo que se observa en las esferas gubernamentales y de las cuales también la sociedad no es ajena, pero que cuando se observa en los servidores públicos causa mucho daño, causa mucho desencanto, frustración y enojo de la sociedad, por eso, creo que debemos de congratularnos todos el día de hoy, porque al fin, el Congreso del Estado de Colima, está cumpliendo con la armonización legislativa de nuestra máxima regla, de nuestro máximo ordenamiento que es la Constitución local, acorde a lo que ya se dispuso en la Constitución Federal. Y en esto pues se sienta pues, el primero ladrillo de lo que pueda ser la construcción de todo un Sistema Estatal Anticorrupción, que de verdad nos de la satisfacción de haber sido la Quincuagésima Octava Legislatura, donde se sentaron las bases de este Sistema Estatal. Este es el inicio, apenas la armonización constitucional, nos queda toda una serie de normatividades, de leyes, como la propia Ley que debe de establecerse para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, como una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como una nueva Ley de lo que será el Tribunal de Justicia Administrativa y que vendrá a sustituir al Contencioso Administrativo, como nuevas disposiciones en el Código Penal, como nuevas disposiciones en materia de órganos internos de control, etcétera, etcétera, pero bueno, el primer paso esta dado y seguramente que todos nos preocuparemos que en el corto plazo, estar presentando iniciativas que entre todos vengan a conformar este gran Sistema Estatal Anticorrupción, pero sobre todo a estar al pendiente de la emisión de esa convocatoria para que se conforme el Concejo de Participación Ciudadana y el Concejo Coordinador que son los dos brazos importantísimos de este sistema y de que pueda pues, irse aterrizando en Colima, la idea, la idea de que la corrupción no es permanente, de que la corrupción no es cultura en los mexicanos, de que la corrupción si es combatible y de que esta

Quincuagésima Octava Legislatura quiere dejar la huella precisamente de haber puesto la primera piedra sobre el particular. Para concluir señalo lo más relevante de lo que hoy estaremos aprobando en unos momentos mas: ¿Cuáles son los alcances de estas reformas y adiciones propuestas a la Constitución del Estado de Colima?, se implementan órganos internos de control de cada uno de los órganos gubernamentales, aquí ya no habrá escusas ni pretextos, todos los ayuntamientos, todos los organismos descentralizados, este Poder Legislativo, el Poder Judicial, debe de tener un órgano interno de control y lo mismo pasará con el Instituto Electoral del Estado, con el Tribunal Electoral del Estado, con el INFOCOL, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. El propio Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima. Se están otorgando nuevas facultades a este legislativo para que regulemos y creemos la ley que establecerán las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de determinar las sanciones a quienes cometan los actos de corrupción. Se eleva a rango constitucional, esto es muy importante la posibilidad de revisar y fiscalizar cuentas públicas de años anteriores. Auditoría que no solo se enfocará a las partidas de ingresos y egresos sino también de aspectos legales, precios de mercado, justificación de cantidades erogadas y cobros, además de que las auditorías, podrán también realizarse en el mismo ejercicio fiscal, es decir, en el momento preciso, que se puedan estar cometiendo las irregularidades o los actos de corrupción. Se crea el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que es el que sustituye al actual Tribunal, como ya lo había comentado, con una nueva conformación, ya serán decisiones colegiadas y no decisiones unitarias, para que se sancione a servidores públicos por la mala práctica o actos de corrupción. Con este dictamen compañeras, compañeros, se crea la Fiscalía para combate a la corrupción, también una figura nueva de especial relevancia, cuyo titular será nombrado por las dos terceras partes de nosotros los Diputados que estemos presentes en el momento de su aprobación. Esta Fiscalía será la encargada de investigar los actos que pudieran ser constitutivo de delito cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Se determina también un sistema de responsabilidades de los servidores públicos, en donde ya claramente se hace referencia a las hipótesis en las que podrá ser procedente el juicio político, las faltas administrativas graves, que también por primera vez se consideran y sean investigadas y substanciadas por el OSAFIG, y los órganos internos de control estatales y municipales, según corresponda, resueltas ambas, o sobre todo las graves, perdón, por el Tribunal de Justicia Administrativa, por la

posible responsabilidad de delitos cometidos durante el tiempo de encargo de los servidores públicos. Con esta armonización se establece el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y el Comité de Participación Ciudadana, éste, es muy importante resaltarlo, deberá integrarse por cinco ciudadanos, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción y claro que serán designados de manera análoga al mecanismo federal por una comisión de ciudadanos, que a su vez, será designada, nombrada por este Poder Legislativo. Y finalmente, con este dictamen que hoy aprobaremos se determinan las características de la remuneraciones de los servidores públicos, que deberán ser estrictamente proporcionales a sus responsabilidades y a su función que realizan, además que ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador Constitucional del Estado en el presupuesto correspondiente. Por todo lo anterior pues, nos congratulamos de que al fin este dictamen vea la luz, y hago votos porque a partir de esta publicación nos aboquemos a la preparación y presentación de todas las leyes correspondientes. Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias compañera Diputada Martha Leticia Sosa Govea. ¿Alguien más en el uso de la palabra del asunto en comento? Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor.
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Martha Sosa, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. La nueva historia en este Congreso, se está escribiendo, Luis Ayala, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor.
DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a reformar el primero párrafo del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, En el uso de la palara nuestra compañera Juana Andrés Rivera. Gracias. En el uso de la tribuna el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de la prensa y público en general que nos acompaña…….DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 73 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDIGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

A los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 3° de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de conformidad a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Que el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 09 de Agosto de 2016,

presento ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 3° de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

2.- Los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima en sesión pública ordinaria celebrada el 16 de Agosto de 2016, remitieron con esa misma fecha mediante oficio número DPL/561/2016 a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la iniciativa de Ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 3° de la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima.

3.- Es por ello que los integrantes de estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- Que la iniciativa de Ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 3° de la Ley Orgánica de los Derechos Humanos del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta textualmente dispone:

> *"En la Nueva redacción del artículo 102-B, de la Constitución Federal, establece que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la República, como las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.*
>
> *Esta adecuación es de suma ¡importancia, en virtud de que en el grado en el que estos cuerpos protectores de los Derechos Humanos se vean desvinculados de ¡intereses de gobierno, contarán con una mayor legitimidad, credibilidad y confianza de la sociedad a quienes se deben sus funciones.*
>
> *La encomienda que la sociedad ha depositado en estos organismos, es de lo más delicado y trascendente, pues el nivel de evolución de una sociedad se mide en el respeto y garantía de sus derechos humanos, otorgar cada vez más autonomía a éstos, implicará que puedan desarrollar sus funciones en el mayor grado de satisfacción para la población, ya que, aun cuando no se señala expresamente, es a ésta a quien se deben y ante la que en el reproche moral juicio paralelo condenaran o celebrarán su buen o mal desempeño.*
>
> *El 10 de junio de 2011, entró en vigor la reforma más importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, relacionada particularmente con la apertura y afianzamiento del respeto y protección de los derechos humanos en México. Entre sus disposiciones se encuentra la modificación del artículo 102 apartado B, mismo que regula aspectos básicos de*

estructura y funcionalidad de los organismos protectores de derechos humanos en el país. Le reconoce a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autonomía constitucional de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios, respecto a las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal hoy ciudad de México, establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 86, establece:
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colimo será el organismo público dotado de pleno autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estoara o cargó de lo protección y defensa en la Entidad, de los derechos humanos que otorgue el orden jurídico mexicano".

Ahora bien, respecto a los órganos constitucionales autónomos, se debe entender a la Autonomía en sus diversas variantes a exponer: de tipo político-jurídica (en el sentido de que los órganos constitucionales autónomos gozan de cierta capacidad normativa que les permite crear normas jurídicas sin la participación de otro órgano estatal); administrativa (que significa que tiene cierta libertad para organizarse internamente y administrarse por sí mismo, sin depender de la administración general del Estado), y financiera (que implica que los órganos constitucionales autónomos pueden determinar en una primer instancia sus propias necesidades materiales mediante un anteproyecto de presupuesto que normalmente es sometido a la aprobación del Poder Legislativo).

Así mismo, debe entenderse que el mandato de la citada reforma constitucional, que los organismos protectores de derechos humanos sean "organismos públicos autónomos", con total independencia de los poderes tradicionales, además de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder.

Hoy en día, el poder se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo, judicial y organismos constitucionales autónomos, lo que no significa que entre ellos no deba existir coordinación, auxilio y colaboración.

Lo que no hay es subordinación de uno hacia el otro, si no una plena autonomía de gestión; sus órganos actúan con la más amplia libertad dentro de los marcos indicados por la Constitución y la ley.

No obstante lo anterior, hay constancia documental que el Estado mexicano ha tenido que atender en instancias internacionales por denuncias de violación a Derechos Humanos de los ciudadanos; algunos de ellos ocurrieron en entidades federativas que, "en su momento, no actuaron. En varios casos, por la debilidad de los organismos estatales de derechos humanos. Uno de los elementos que la causa, es su falta de autonomía. Por tanto, para el fortalecimiento a estos derechos, no basta únicamente dotar a la Comisión Nacional de los Derecho Humanos de autonomía de gestión y presupuestaria, fundamentalmente debe hacerse también desde las entidades lo que además de fortalecerlos, les dará más credibilidad a sus decisiones ante la ciudadanía.

Con esta descripción de los elementos, podemos apreciar a todas luces que la independencia y autonomía son elementos clave para el desempeño de cualquier órgano constitucional autónomo, no solo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sino de forma relevante las comisiones estatales.

Los elementos esenciales se enfocan a que estos órganos constitucionales no estén alineados o supeditados de modo alguno frente a los poderes políticos clásicos.

Consideramos que de llevarse a cabo esta reforma, se dejará atrás un vacío legal y una excusa para que el organismo de derechos humanos del Estado de colima estuviesen condicionados a las autoridades administrativas locales, lo que da lugar a la falta de imparcialidad y objetividad en sus resoluciones, elemento básico de la razón de su existencia.

Así, las Constituciones de los Estados y la de la hoy ciudad de México establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

Lo antes expuesto, encuentra armonía y sustento en lo previsto en los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidos con los Principios de París que aquí citamos la parte que interesa donde se expresa:

"B. Composición y Garantías de independencia y Pluralismo.

1. Lo composición de lo institución nocional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse o un procedimiento que ofrezco todos las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de los fuerzas sociales (de lo sociedad civil) interesadas en lo promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr lo cooperación eficaz o lo participación de los representantes de:

- los organizaciones no gubernamentales competentes en lo esfera de los derechos humanos y lo lucho contra la discriminación racial, los sindicatos, los organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades científicos; - los corrientes de pensamiento filosófico y religioso; - los universitarios y especialistas calificados;

- el Parlamento;

- las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán en los debates o título consultivo).

2. Lo institución nocional dispondrá de una infraestructura apropiado poro el buen desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suficientes. Esos créditos deberán destinarse principalmente o la dotación de personal y locales propios, o fin de lograr la autonomía respecto del Estado y no estor sujeto a controles financieros que podrían limitar su independencia.

3. En el interés de la estabilidad del mandato de los miembros de lo institución nocional, sin lo cual no habrá una verdadera independencia, su nombramiento se hará mediante acto oficial en el que se señale un plazo determinado de duración del mandato. Este podrá prorrogarse bojo reservo de que se sigo garantizado el pluralismo de lo composición."

Así también, no debe soslayarse la atención a las recomendaciones del examen periódico universal, que es el mecanismo de derechos humanos que estableció la Asamblea General en su resolución 60/257, de 15 de marzo de 2006. A través de este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas en

cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos, que las últimas recomendaciones del año 2013, se manifiesta lo siguiente:

"148.29 Considerar los medidas adecuadas poro garantizar que los funciones de lo Comisión Nacional de Derechos Humanos sean independiente e imparciales continuar los esfuerzos para garantizar la autonomía de los instituciones nocionales encargados de lo protección de los derechos humanos.
148. 99. Continuar con lo aprobación de lo legislación secundaria necesaria, con respecto o lo reforma constitucional, armonizándola en los estados y o nivel federal."

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las fracción que antecede, ello mediante oficio DJ-380/016 de fecha 25 de Noviembre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio S.P. Y .F/1182/2016, recibido con fecha 07 de diciembre de 2016, en el que señala que la iniciativa en estudio se encuentra alineada en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que muestra congruencia para la discusión en el pleno, documento que se anexa al presente dictamen.

III.- Leída y analizada la iniciativa de Ley con proyecto de decreto en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 12 de diciembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Francisco J. Mujica"*, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción I del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión es competente para conocer de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora procedimos a realizar el análisis y estudio detallado de la presente iniciativa, concluyendo que se coincide en todos los términos con la misma, ello en función de que se considera una relevancia capital, perfeccionar y fortalecer la autonomía que el orden jurídico otorga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Fortalecer la Autonomía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, implica su total independencia de los Poderes Públicos del Estado, Partidos Políticos y otros factores reales de poder, lo que de ninguna manera excluye la colaboración interinstitucional dinámica y necesaria con otros Entes Públicos siempre en beneficio de la sociedad.

Por tal motivo coincidimos en fortalecer la independencia e imparcialidad en el actuar de los Servidores Públicos adscritos al referido ente Autónomo, en el ejercicio legal de sus atribuciones, lo que sin duda redundará en un mejor servicio a favor de los habitantes del Estado que lo requieran.

TERCERO.- Para acercarnos más al concepto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su carácter de Órgano Constitucional Autónomo, es menester hablar de las principales características de todo Organismo de dicha naturaleza.

Puede decirse que órganos constitucionales autónomos son aquellos que se ponen como “inmediatos participes de la soberanía”; aquellos órganos que surgen de modo “inmediato” de la Constitución, o aquellos a los que el concepto de “jerarquía” no puede aplicárseles. Por este motivo, a lado de su denominación como órganos constitucionales autónomos aparecen igualmente como órganos de vértice, órganos supremos u órganos fundamentales del Estado.

La evolución a que ha sido sometido el concepto de referencia, ha llevado a concluir, en términos generales, que los elementos que distinguen a los órganos constitucionales autónomos sean los siguientes:

1.- Representan un elemento necesario del ordenamiento constitucional, en el sentido que su ausencia supondría la inmediata detención de la actividad estatal.

2.- Se erigen como un elemento indefectible del Estado, en el sentido que desde el punto de vista institucional, su actividad no puede ser sustituida por otros órganos constitucionales.

3.- Tienen una estructura dictada desde la misma Constitución, de modo que queden netamente encuadrados en el contexto de la separación de los poderes supremos del Estado, y dentro del sistema de equilibrios constitucionales.

4.- Gozan de una posición de paridad respecto a los otros órganos constitucionales, con el objeto de garantizar su común independencia.

5.- Participan en la dirección política del Estado, de forma que con su actuar se concretiza la voluntad del Estado en un sentido coherente y armónico con el conjunto de valores y principios que inspiran al

ordenamiento constitucional. Los órganos constitucionales autónomos aparecen bajo estos elementos como consecuencia necesaria de las funciones que se les atribuyen dentro del sistema constitucional.

Todos ellos de la máxima trascendencia jurídica en tanto se vinculan con la dirección política del Estado, con la tutela de su unidad de actuación y su soberana potestad de imperio.

En función de lo anterior, se considera que ese fortalecimiento de la autonomía del citado Organismo Constitucional propuesto por el iniciador implica que a características como la autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; se le sumen otras de primordial importancia como son la autonomía presupuestaría, técnica y de Gestión.

Pues por lo que refiere a la autonomía en la gestión presupuestal, en el estudio realizado por la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación denominado “Aproximación al Concepto de Autonomía Técnica y de Gestión refiere en su título XII que la autonomía de gestión de la EFSF debe entenderse como su capacidad para decidir libremente la administración, manejo, custodia y aplicación de sus ingresos, egresos, fondos y en general, de todos los recursos públicos que utilice para la ejecución de los objetivos contenidos en la Constitución y las leyes. Es decir, que implica la plena facultad para la aplicación y ejecución del presupuesto asignado al ente público de que se trate sin más condicionamientos que el cumplimiento del marco legal y presupuestario aplicable, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones.

En ese sentido, es procedente otorgar autonomía en la gestión presupuestal a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque con ello se fortalece su autonomía en la administración en general de los ingresos y egresos públicos a condición de que se utilicen para la ejecución del marco legal y presupuestario aplicable, fortaleciendo así su autonomía e independencia interna, y evitando la dependencia económica en relación a otros Poderes.

La autonomía de gestión supone un ámbito de libertad conferido a una institución para que pueda ejecutar su presupuesto con miras a cumplir debidamente con el objeto para el que fue creada, para que pueda ejercer sus facultades y alcanzar los objetivos y metas estipulados en las normas que la regulan. Esto significa conferir al órgano suficientes atribuciones para que puedan elegir y realizar sus propios objetivos constitucionales, administrativos o económicos, al margen de cuál haya sido la fuente de su presupuesto. Por lo que evidentemente la autonomía de gestión se encuentra estrechamente ligada a la presupuestaria, pues en la medida en que se tenga esa libertad de ejercer el presupuesto asignado para le cumplimiento de las atribuciones legales del Organismo de que se trate.

La autonomía técnica implica reconocer al Órgano Constitucional respectivo su perfil altamente técnico y especializado, en clara contraposición al perfil político con el que actúan otros órganos del Estado, cuya valoración se asienta en criterios subjetivos y de oportunidad política. La concepción etimológica sugiere que la autonomía técnica implica la capacidad que se reconoce a un órgano para regir su comportamiento bajo criterios de especialización, sin depender de criterios de comportamiento dictados desde otro órgano.

Es en atención a lo anteriormente considerando que con el reconocimiento de la autonomía presupuestaría, técnica y de gestión, se está fortaleciendo de manera preponderante la autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a favor de las personas que habitan nuestro Estado, ya que tales conceptos como se anoto implican un profundo cambio en la concepción de la autonomía e independencia del citado organismo, y no sólo en la enunciación formal de tales conceptos.

Sin embargo, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estima conveniente únicamente reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, lo anterior en función de dar cumplimiento a las reglas jerárquicas, y posteriormente aprobada, se proceda a homologarlo a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

D E C R E T O

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 86.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, **con autonomía presupuestaría, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones**, de carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estará a cargo de la protección y defensa en la Entidad, de los derechos humanos que otorgue el orden jurídico mexicano.

. . . .
. . . .

. . . .
. . . ..
. . . .
. . . .
. . . .

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

“El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite a lo señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

A T E N T A M E N T E
Colima, Col., 12 de diciembre de 2016

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo
Secretario

Dip. Joel Padilla Peña
Secretario

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE

Dip. Juana Andrés Rivera
Presidenta

Dip. Federico Rangel Lozano
Secretario

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo
Secretario

Dip. Nicolás Contreras Cortés
Vocal

Dip. Crispín Guerra Cárdenas
Vocal

Dip. Octavio Tintos Trujillo
Vocal

Dip. Martha Alicia Meza Oregón
Vocal

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la negativa.

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, Crispín Guerra Cárdenas, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Martha Sosa, a favor.
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, Norma Padilla, a favor
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera Gutiérrez, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con

proyecto de decreto para expedir la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés.

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, con el permiso de todos ustedes…….. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, HÉCTOR MAGAÑA LARA, Y FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, ……DAN LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 84 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A EXPEDIR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

P r e s e n t e.

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se aprueba la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante oficio número DPL/949/017 de fecha 26 del mes de enero del año 2017, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Compromiso por Colima", por el que se aprueba la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- La Iniciativa, en su exposición de motivos, señala:

"*En fecha 8 de septiembre de dos mil dieciséis, esta Honorable Legislatura emitió el Decreto número 150, mediante el cual se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, instrumento que tiene por objeto regular las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza del sector público, instrumento cuyas disposiciones aplican de manera directa para el Poder Ejecutivo y la administración pública del Estado, centralizada y paraestatal, así como para los municipios y la administración pública municipal, centralizada y paramunicipal."*

"En el documento mencionado en el párrafo que antecede se establece que los Poderes Judicial y Legislativo, así como los órganos estatales autónomos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la citada Ley sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control."

“La emisión del ordenamiento antes mencionado obedeció a la necesidad de sujetarse a las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 134 el cual, en lo conducente, establece que: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. Así también el propio precepto señala: “Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.”

“De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en lo referente a la adquisición de bienes, y de contratación de arrendamientos y servicios precisa que: “Los contratos administrativos se adjudicarán a través del procedimiento administrativo que disponga la ley, con base en los principios de legalidad, publicidad, igualdad, concurrencia y transparencia. Cuando las condiciones no sean idóneas, los entes públicos podrán adjudicarlos bajo los supuestos de excepción que les garanticen las mejores condiciones de contratación”.”

“No existe actualmente ordenamiento alguno que regule, en el Poder Legislativo, las operaciones que se realicen para materializar la adquisición de bienes, así como la contratación de arrendamientos y servicios, que se requieren para la realización de las funciones institucionales, lo que constituye un área que consideramos necesario atender, en el propósito de contribuir a la construcción de un marco jurídico integral inherente a esta Soberanía, acción con la que se estará dando certeza a las operaciones que en el futuro se realicen y además se fortalecerá la percepción de transparencia que prevalece en torno a este ente público.”

“Por lo demás, al regularse este importante ámbito de nuestro quehacer administrativo, se optimiza la aplicación de los recursos institucionales y se genera la convicción de que se instituyen buenas prácticas para el manejo de los recursos que integran el erario, aunado a que se posibilitará un mejor control a las instancias administrativas que dependen de este Honorable Congreso.”

“De igual manera, existe una sensible diferencia entre el monto total de recursos a ejercer por el Poder Ejecutivo del Estado y el que ejercerá este Poder Legislativo; también se advierte un gran contraste entre los bienes que deben adquirir uno y otro Poder, para ejercer adecuadamente las funciones institucionales a su cargo, aunado a que las estructuras administrativas resultan diametralmente dispares. En esa tesitura, se consideró conveniente incluir en esta propuesta procedimientos más sencillos y ágiles, en el propósito de facilitar la actuación de las instancias administrativas que en el Poder Legislativo tienen a su cargo las funciones a que se refiere este texto normativo.”

TERCERO.-Que esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el análisis y estudio de la iniciativa, compartimos la idea de la iniciadora y la viabilidad de la propuesta; toda vez que del texto del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, así como la prestación de servicios se realizarán a través de licitaciones públicas para obtener las mejores condiciones para las entidades públicas, precisando ese mismo precepto que por excepción las leyes establecerán bases, procedimientos, reglas y demás elementos para garantizar mediante la aplicación de criterios de economía, eficacia y honradez, las mejores condiciones para el Estado.

En ese contexto y al no existir en la actualidad un instrumento normativo que rija los procedimientos de adquisición que lleva a efecto esta Soberanía, se considera conveniente la aprobación del documento contenido en el presente dictamen, en el propósito de conceder a las dependencias de este Poder Legislativo los mecanismos y procedimientos jurídicos que otorguen

certeza a su actuación y contribuyan a elevar los índices de transparencia con que se conduce la presente Legislatura, en el ánimo de sustentar la credibilidad hacia las instituciones.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación, el siguiente:

D E C R E T O

ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima, en los siguientes términos:

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Generalidades

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público y se expiden de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tienen por objeto establecer las bases a que habrán de sujetarse las instancias administrativas del Poder Legislativo del Estado de Colima, para llevar a efecto los procedimientos para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios, buscando la racionalización y transparencia en el ejercicio del presupuesto respecto a los conceptos mencionados.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Acta: El documento en que consta la celebración de una sesión de los órganos facultados para celebrar los procesos de adquisición, en los términos de la presente Ley, en que se resuelve respecto de la adquisición de bienes o la contratación de arrendamientos y servicios.
Adjudicación Directa: El procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de arrendamientos y servicios, como excepción a la licitación pública, en el cual se determina que un solo proveedor o un grupo restringido de proveedores se adjudiquen el contrato.
Adquisición Ordinaria: La acción de adquirir que se efectúa en forma regular y periódica para cumplir con las funciones normales propias del Poder Legislativo.
Adquisición Urgente: Es aquella acción de adquirir que se realiza en función de una situación apremiante o necesidad inmediata, que requieran de urgente atención.
Bienes: Los muebles tangibles, derivados de un proceso de transformación y de la mano de obra del hombre, que son materia de comercio.
Comisión: La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Colima.
Congreso: El H. Congreso del Estado de Colima.
Cotización: El documento en el cual se fijan precios y condiciones que el proveedor debe proporcionar por escrito, como respuesta a un requerimiento del Oficial Mayor o de la Comisión.
Dependencias: Las unidades administrativas del Congreso.
Dirección: La Dirección de Administración, Finanzas y Servicios Generales del Congreso.
Factura: El documento expedido al H. Congreso por el proveedor seleccionado, después de formalizada la operación, el cual debe reunir los requisitos fiscales legalmente establecidos.

Ley: La presente Ley.
Licitación: El procedimiento administrativo de adquisición de bienes y servicios que se efectúa mediante convocatoria pública, para que los interesados, sujetándose a las bases fijadas formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
Orden de Compra: El documento formal, mediante el cual el Congreso, por conducto del Oficial Mayor o de la Comisión, autorizan al proveedor elegido para que proporcione los bienes o servicios materia de la adjudicación.
Precio Firme: La condición por la cual existe el compromiso de no modificar precios, durante el tiempo transcurrido entre la orden de compra o servicio y la entrega del bien o la prestación del servicio.
Precio Máximo de Referencia: El precio máximo que el Congreso estaría dispuesto pagar para llevar a efecto la adquisición de un bien o contratar un arrendamiento o servicio.
Precio Sujeto a Escalación: La condición por la cual se fija un aumento en el precio del bien o servicio, mismo que se va reflejando conforme transcurre el tiempo de entrega del bien o de la prestación del servicio.
Proveedor: La persona física o moral que ofrece y vende sus productos y servicios, o arrenda bienes al Congreso.
Requisición: El documento que se formula de manera individual para cada adquisición por parte de la dependencia interesada en solicitar la adquisición de un bien o servicio que estime necesario para el desempeño de sus funciones.
Servicios: Las actividades calificadas o especializadas que se realizan a cambio de una remuneración.
Subdirección: La Subdirección de Administración y Servicios Generales.

Artículo 3- El presente ordenamiento será aplicable a las dependencias del Poder Legislativo, así como a las personas físicas o morales que contraten con la Legislatura local la venta de bienes o contraten los arrendamientos y servicios requeridos por aquél, en lo que corresponda.

Para todo lo no previsto en este ordenamiento, será aplicable supletoriamente la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, las adquisiciones comprenderán los casos en virtud de los cuales el proveedor se obliga a suministrar determinados bienes y el Congreso a pagar por ellos un precio determinado en monetario.

En los contratos de adquisiciones podrá incluirse la instalación de los bienes por parte del proveedor, siempre y cuando el precio del bien adquirido sea superior al de su instalación.

Artículo 5.- De acuerdo a las disposiciones de esta Ley, los arrendamientos comprenderán:

I.- Los contratos en virtud de los cuales el arrendador o subarrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de un bien mueble y el Congreso a pagar un precio determinado o determinable en dinero; y
II.- Los contratos de arrendamiento financiero de bienes muebles; por los cuales la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso y goce temporal, a plazo forzoso, al Congreso, obligándose éste a pagar una contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad de dinero determinada o determinable. Será optativo para el Congreso prorrogar el contrato a su vencimiento, adquirir el bien en propiedad u obtener parte del precio por la enajenación a un tercero de los derechos de adquisición.

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, los servicios comprenderán los contratos en virtud de los cuales el prestador de servicios se obliga a desempeñar los trabajos requeridos, suministrando lo necesario para su realización; por su parte, el Congreso se obliga a pagar un precio determinado o determinable en monetario.

Artículo 7.- Las controversias legales que se susciten con motivo de la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de los contratos celebrados con base en la presente Ley y del cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, serán resueltas mediante el recurso de reconsideración o bien, mediante juicio que se tramite ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima.

Artículo 8.- El recurso de reconsideración se tramitará en la forma y términos que se establece en la presente Ley.

Artículo 9.- Las adquisiciones de bienes y servicios no podrán fraccionarse para simular los topes establecidos en el presente ordenamiento.

Capítulo II
De las Unidades Competentes

Artículo 10.- Los órganos y dependencias competentes para la aplicación y vigilancia de la presente Ley son:

I.- La Comisión;
II.- El Oficial Mayor;
III.- La Dirección, y
IV.- La Subdirección.

Artículo 11.- Las Dependencias que cuenten con la autorización del Oficial Mayor para manejar y disponer de fondo revolvente, podrán adquirir directamente y bajo su responsabilidad, bienes o servicios urgentes en términos de lo que establezca el ordenamiento que al efecto se emita, siempre y cuando el monto de la operación no rebase el monto autorizado para adjudicación directa. En todo caso, la erogación respectiva deberá estar amparada por la factura o recibo correspondiente que cumpla con los requisitos fiscales.

Artículo 12.- Los servidores públicos facultados para firmar los contratos objeto de la presente Ley serán, indistintamente: Los integrantes de la Comisión, el Oficial Mayor y el titular de la Dirección.

Artículo 13.- Corresponde a la Dirección llevar a cabo el registro de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de las adquisiciones, servicios y arrendamientos, vigilando que se realicen en sujeción a las disposiciones previstas por esta Ley y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PRESUPUESTO E INTEGRACIÓN
DE PROPUESTAS DE ADQUISICIONES

Capítulo I
Del Presupuesto

Artículo 14.- El órgano o dependencia responsable de la compra elegirá el método de adquisición que resulte procedente en términos de esta ley, y con base en los criterios establecidos en el presente ordenamiento.

Artículo 15.- Las dependencias que requieran contratar servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos, la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.

Cuando se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la dependencia o unidad administrativa, no procederá la contratación, salvo que requieran su adecuación, actualización o complemento y siempre que no se cuente con el personal

capacitado o las condiciones para su realización. El titular de la dependencia o unidad administrativa que requiera el servicio y sea responsable según su reglamentación orgánica, justificará debidamente lo anterior.

Artículo 16.- La planeación , programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones , arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos del Congreso, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones aplicables.

Artículo 17.- Los órganos y dependencias del Congreso facultados en términos de la presente Ley, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo al presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.

Capítulo II
De la Integración de Propuestas

Artículo 18.- Las dependencias del Congreso deberán:

I.- Planear y estudiar que las adquisiciones sean de acuerdo a una necesidad real y conforme a su presupuesto;
II.- Ajustarse a las bases que establezca el Oficial Mayor, para perfeccionar los sistemas y procedimientos de adquisiciones, y
III.- Verificar, en coordinación con la Dirección, que los bienes adquiridos sean registrados en el inventario correspondiente.

Artículo 19.- Las adquisiciones que realice el Congreso, inician con la solicitud que las dependencias elaboren y concluye con el pago correspondiente por la Dirección.

Las dependencias deberán observar en los procedimientos de adquisición los requisitos que establece el presente ordenamiento.

La Subdirección será responsable de presentar al Oficial Mayor, las propuestas en materia de adquisiciones que requieran las dependencias del Congreso.

Artículo 20.- Para decidir la adquisición de bienes y servicios, se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes elementos:

I.- La existencia en almacén y la estimación de consumo, la disponibilidad en el mercado y tiempo de entrega de los bienes y servicios;
II.- La necesidad y justificación de la compra de los bienes o servicios;
III.- La oportunidad de la compra, en relación con los recursos financieros disponibles y la expectativa de los precios, y
IV.- La existencia de una partida expresa señalada en el presupuesto y que se cuente con saldo disponible.

Artículo 21.- Con relación a la programación de propuestas, el Oficial Mayor ejercerá las siguientes funciones:

I.- Promover la participación de instituciones, empresas o particulares que se dediquen a la comercialización de productos que requiera el Congreso;
II.- Fijar las bases generales para las adquisiciones de bienes y servicios, buscando calidad, oportunidad y bajos costos, dándolos a conocer a las dependencias, así como programar y llevar a cabo tales adquisiciones, con el fin de proporcionar un mejor servicio;
III.- Optimizar los mecanismos de compra y entrega de las adquisiciones y de servicios;

IV.- Determinar las instancias y procedimientos que en cada caso resulten competentes y aplicables para realizar la adquisición y acordar su remisión cuando resulte procedente, y
V.- Disponer se realicen los procedimientos relativos en los casos en que corresponda a la Oficialía Mayor llevar a efecto las adquisiciones, conforme lo dispone el presente ordenamiento.

Una vez que se determine la procedencia de adquirir determinados bienes, arrendamientos o servicios se emitirá la requisición correspondiente, la cual será comunicada al proveedor que se hubiera determinado.

Artículo 22.- La requisición debe contener como mínimo los siguientes requisitos:

I.- La denominación, de conformidad con la normatividad aplicable, de la dependencia solicitante;
II.- La descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o servicios solicitados, indicando en su caso, de manera particular la marca y los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes;
III.- La partida presupuestal correspondiente para verificar la disponibilidad del presupuesto, de acuerdo a los formatos establecidos con tal propósito;
IV.- Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio, y
V.- La firma y nombre del titular de la dependencia solicitante.

Las erogaciones para el pago de adquisiciones de bienes, arrendamientos o servicios que no se encuentren contempladas en el presupuesto de egresos, solamente podrán realizarse previo acuerdo por parte de la Comisión.

Artículo 23.- Las dependencias y órganos facultados por esta Ley se abstendrán de recibir propuestas y adjudicar contrato alguno con las personas siguientes:

I.- Aquéllas en que los servidores públicos que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.
La prohibición anterior comprenderá los casos en que el interés personal, familiar o de negocios corresponda a los superiores jerárquicos de los servidores públicos que intervengan, incluyendo al titular de la dependencia, entidad o unidad administrativa, convocantes o requirentes;
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Poder Legislativo, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte;
III.- Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato en el ejercicio fiscal de que se trate o en el inmediato anterior;
IV.- Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la autoridad competente;
V.- Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;
VI.- Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando hubieren tenido acceso a información privilegiada que no se diera a conocer a los licitantes para la elaboración de sus propuestas;

VII.- Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
VIII.- Aquellos licitantes que por causas que les fueren imputables no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad o unidad administrativa convocante por un plazo que no podrá ser superior a un año; y
IX.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

Artículo 24.- Conforme lo dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las adquisiciones de bienes y servicios, así como la contratación de arrendamientos, se adjudicarán preferentemente mediante licitación pública, para asegurar al Congreso las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias de acuerdo con lo que establece la presente Ley, pudiendo además realizarse bajo los procedimientos de excepción que se señalan en el presente ordenamiento.

Artículo 25.- Cuando no resulte idóneo celebrar licitación pública, por existir condiciones de economía, celeridad y eficiencia, se optará por realizar las operaciones a que se refiere la presente Ley, bajo los siguientes procedimientos:

I.- Por adjudicación directa;
II.- Por adjudicación directa con un mínimo de tres cotizaciones, y
III.- Por invitación restringida

TÍTULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN

Capítulo I
De la Adjudicación Directa

Artículo 26.- La adjudicación directa es el procedimiento a través del cual el Congreso adjudica de manera expedita un contrato a un proveedor, arrendador o prestador de servicios previamente seleccionado por la Subdirección o las dependencias, en los casos de excepción previstos en esta Ley.

Artículo 27.- La Oficialía Mayor determinará la adquisición de forma directa, seleccionando al proveedor, arrendador o prestador de servicios que resulte idóneo y garantice las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 28.- Procederá la adquisición mediante el procedimiento de adjudicación directa y sin que resulte necesario satisfacer mayores requisitos que los señalados en el presente artículo, en los siguientes supuestos:

I.- Cuando el monto de la operación no exceda de 350 Unidades de Medida y Actualización;
II.- En los casos en que la adquisición tenga por objeto bienes perecederos y alimenticios para apoyo al trabajo legislativo;
III.- Tratándose de los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de las dependencias y el monto de la operación pueda cubrirse con recursos del fondo revolvente;
IV.- Cuando se deba realizar el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles, así como la contratación del servicio de estacionamiento;
V.- En los casos en que se realice el arrendamiento financiero de bienes, para lo cual se deberá contar con la autorización de la Comisión;

VI.- La impresión, edición, coedición de libros y diseño de medios de difusión de los trabajos legislativos que sirvan como apoyo para el trabajo del Congreso o sean apoyados por éste por considerar que coadyuvan a la difusión cultural o legislativa;
VII.- La impresión de papelería de uso de legisladores, órganos y dependencias del Congreso, incluida aquella que se solicite para eventos relacionados con actividades legislativas;
VIII.- La contratación de servicios de consultoría, asesorías y estudios en materia legislativa;
IX.- Los servicios de traducción simultánea y de documentos para apoyo al trabajo legislativo;
X.- La contratación de servicios profesionales prestados por personas físicas;
XI.- Las contrataciones con Instituciones Públicas e instituciones educativas;
XII.- Cuando se realice una licitación pública o un procedimiento de invitación restringida y fueran declarados desiertos;
XIII.- Cuando se hubiere rescindido un contrato, por causas imputables al proveedor o prestador de servicios, podrá adjudicarse al licitante u oferente que hubiere presentado la segunda mejor propuesta, siempre y cuando la diferencia en precio no sea superior al diez por ciento. En caso de que ningún participante se encuentre dentro de dicho rango, la Oficialía Mayor efectuará un análisis respecto de la conveniencia de la adjudicación al segundo lugar; mismo que someterá a consideración de la Comisión;
XIV.- Cuando ocurran circunstancias que pongan en peligro la seguridad de las personas, la seguridad de las instalaciones o la continuidad de las labores del Congreso;
XV.- Cuando se requiera contratar servicios profesionales con carácter confidencial, prestados por personas físicas o morales;
XVI.- Cuando se requieran bienes, servicios o arrendamientos destinados a cubrir prestaciones laborales,
XVII.- La contratación de hoteles, adquisición de tarjeta IAVE, boletos de avión y los servicios relacionados con éstos o de alimentación y transporte que requieran los Diputados o los servidores públicos del Congreso, por comisión oficial o para la realización de eventos nacionales o internacionales, foros o reuniones de los órganos de gobierno, comisiones legislativas y grupos parlamentarios;
XVIII.- Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos que integran el parque vehicular del Congreso y los que correspondan al trabajo legislativo y de gestión;
XIX.- La contratación de los servicios de telefonía móvil;
XX.- Cuando existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, previo acuerdo de la Comisión;
XXI.- Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, se requieran bienes o servicios o arrendamientos para atender la eventualidad de que se trate, se procederá a través de la adjudicación directa con quienes garanticen la entrega inmediata de bienes, servicios o el arrendamiento a entera satisfacción del Congreso, y
XXII.- En cualquier adquisición, arrendamiento o servicio donde conste expresamente la autorización de la Comisión.

Artículo 29.- La Subdirección elaborará un documento en el que consten las adquisiciones realizadas mediante el procedimiento de adjudicación directa, el cual quedará a disposición de la Comisión.

Artículo 30.- No serán materia de esta regulación las adquisiciones que se realicen con recursos del fondo revolvente, en cuyo caso las dependencias del Congreso deberán observar las disposiciones específicas que se emitan para el manejo de dicho fondo.

Capítulo II
De la Adjudicación Directa con Tres Cotizaciones

Artículo 31.- Los bienes, arrendamientos y servicios que requiera el Congreso, podrán realizarse mediante el procedimiento de adquisición por adjudicación directa con tres cotizaciones, cuando el monto de cada operación sea de entre 351 y hasta 2,000 Unidades de Medida y Actualización.

Corresponderá a la Oficialía Mayor con el auxilio de las dependencias que conforman el Congreso, instrumentar los procedimientos correspondientes para integrar la información que someterán a la Comisión, para que emita la resolución correspondiente.

Artículo 32.- En todo caso, antes de resolver respecto de una adquisición mediante el procedimiento por adjudicación directa con tres cotizaciones, deberá recabarse una opinión de la Dirección en que conste que existen recursos presupuestales disponibles en la partida correspondiente para llevarla a cabo; en caso contrario, para realizarla se requerirá el acuerdo de la Comisión.

Capítulo III
Del Procedimiento de Invitación Restringida

Artículo 33.- La invitación restringida es el procedimiento de excepción a la licitación pública y se aplicará por el Congreso para adjudicar contratos sin necesidad de realizar convocatoria pública, siempre que el importe de la operación se encuentre entre 2,001 a 15,000 Unidades de Medida y Actualización.

La Oficialía Mayor, con el auxilio de las dependencias del Congreso, tendrá a su cargo autorizar e instaurar los procedimientos de invitación restringida, mismos cuya resolución corresponderá a la Comisión.

Artículo 34.- Previa la determinación correspondiente de iniciarse el procedimiento, se invitará a participar en los mismos a cuando menos tres personas físicas o morales cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato a celebrarse, sin que sea requisito que se encuentren inscritos en el padrón de proveedores.

Artículo 35.- La invitación se acompañará de las bases que contengan la información que resulte pertinente en cuanto a la descripción de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos y demás condiciones para que los participantes se encuentren en posibilidad de presentar sus propuestas.

El incumplimiento por parte del ofertante de las condiciones establecidas en la invitación y la contravención a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables, será motivo de descalificación.

Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta. Dicho plazo no podrá ser inferior a tres días naturales a partir de la fecha en que se entregue la última invitación.

Artículo 36.- Se invitará a los ofertantes al acto de presentación y apertura de propuestas; sin embargo, éste podrá realizarse sin su participación. Invariablemente en dicho acto intervendrá el Oficial Mayor o la persona que éste designe para que lo represente.

Artículo 37.- Para proceder a la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;

En caso de que no se presente el mínimo de propuestas señalado en el párrafo anterior, se podrá declarar desierta la invitación restringida o bien, se optará por emitir una nueva convocatoria. Siempre que se opte por el procedimiento de adjudicación directa, la convocante valorará las propuestas aportadas y podrá adjudicar a alguno de los oferentes el contrato, si considera que reúne las condiciones requeridas.

Artículo 38.- Serán públicos los actos de recepción y apertura de la documentación legal, técnica y económica, emisión de dictamen técnico, evaluación de propuestas económicas y fallo, los cuales

se llevarán a efecto con o sin la presencia de los participantes, observando las formalidades previstas al efecto para el procedimiento de licitación pública. En su desarrollo se contará con la participación del personal del área solicitante, en su caso del área técnica y de la Subdirección; de considerarlo conveniente, el servidor público que presida los actos podrá solicitar la opinión del personal de la Dirección, así como de la Dirección Jurídica, en calidad de asesores.

Artículo 39.- En la invitación se señalará el lugar, horario y plazo en que deberán ser presentadas las propuestas, mismas que deberán ser entregadas en sobre cerrado ante la Subdirección; quién dará cuenta con las mismas el día y hora señalado para su presentación y apertura.

La Subdirección recibirá las propuestas en sobres cerrados, limitándose a una por cada uno de los participantes y se levantará acta circunstanciada de los actos de recepción y apertura de documentación legal y técnica, así como de la emisión de dictamen técnico y de evaluación de propuestas económicas, en la que se hará constar de manera detallada su desarrollo, la cual será firmada por los asistentes al acto. La falta de firma por parte de algún servidor público u ofertante, no invalidará el contenido y efectos del acta.

Se deberá contar con un mínimo de una propuesta que reúna los requisitos técnicos para llevar a cabo la evaluación de la oferta económica.

Artículo 40.- Una vez que se hubiera verificado el acto a que se refiere el artículo anterior, se turnará a la Comisión el acta circunstanciada de la diligencia, conjuntamente con el dictamen técnico y, en su caso, la opinión técnica que se recabe, para que proceda a emitir el fallo correspondiente.

Los contratos serán adjudicados al participante que reúna los requisitos solicitados en las bases, garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas y satisfaga los aspectos de oportunidad, calidad, garantía, precio y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 41.- Una vez que se haya determinado la adjudicación por la Comisión, la Oficialía Mayor dará a conocer por escrito el fallo a los participantes.

Artículo 42.- La invitación será declarada desierta en forma general o en alguna partida en los supuestos siguientes:

I.- Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de la invitación;
II.- En caso de que no se presente cuando menos una propuesta susceptibles de analizarse técnicamente;
III.- En caso de que los precios propuestos no fueren aceptables, tomando en consideración la información con que cuente la Subdirección, y
IV.- Por cualquier otra circunstancia que contravenga el contenido de la invitación o las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

Una vez declarada desierta la invitación, la Comisión podrá determinar se adquieran los bienes materia del procedimiento mediante la adjudicación directa, instruyendo a las dependencias para el debido cumplimiento de su determinación.

Artículo 43.- En lo no dispuesto en el presente artículo se estará a las demás disposiciones de esta Ley relativas a la licitación pública que resulten aplicables, siendo optativo para la convocante la realización de la junta de aclaraciones.

Capítulo IV
De la Licitación Pública

Artículo 44.- Licitación pública es el procedimiento a través del cual el Congreso elige a la persona física o moral que ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, para celebrar un contrato objeto de la presente Ley. Para ello, a través de la Subdirección, invitará a las personas interesadas, mediante convocatoria pública, para que presenten proposiciones en sobres cerrados.

Previa determinación que al efecto se emita, las proposiciones para los procedimientos de licitación podrán ser presentadas a través de medios electrónicos que resguarden la información, de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que establezca la convocante.

Artículo 45.- Los procedimientos de licitación pública serán preferentemente de carácter nacional, salvo cuando ocurra alguno de los supuestos siguientes:

I.- Previa verificación de mercado, se encuentre que no existe oferta en cantidad y calidad de bienes, arrendadores o prestadores de servicios nacionales;
II.- Resulte conveniente para el Congreso en términos de precio, financiamiento y oportunidad;
III.- Cuando los tratados internacionales así lo establezcan, y
IV.- Los demás casos en que así lo apruebe la Comisión.

Artículo 46.- En las licitaciones públicas será indispensable que previamente a la convocatoria, la dependencia solicitante realice el requerimiento por escrito a la Subdirección, proporcionando las características y especificaciones precisas de los bienes por adquirir, arrendar o de los servicios por contratar, según corresponda; indicando en su caso la vigencia de las garantías, cuando así resulte necesario.

Artículo 47.- En la realización de licitaciones públicas nacionales, la Subdirección observará los plazos siguientes:

I.- La consulta y la venta de bases se realizará durante un plazo mínimo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria;
II.- En el desarrollo de los diversos actos del procedimiento se contará con la asistencia del Oficial Mayor o de la persona que designe para que lo represente, quien presidirá las reuniones. También participará el personal del área solicitante, del área técnica y de la Subdirección, en su caso. De considerarlo conveniente, el servidor público que presida los actos podrá solicitar la opinión del personal de la Dirección, así como de la Dirección Jurídica, en calidad de asesores;
III.- El acto de la junta de aclaración de bases se podrá realizar, cuando menos dos días hábiles antes del acto de recepción y apertura de la documentación legal y técnica, así como la recepción de propuestas económicas;
IV.- En el acto de recepción y apertura de la documentación legal y técnica, así como la recepción de propuestas económicas, se abrirá el sobre que contiene la documentación legal y la propuesta técnica, procediéndose a verificar que éstas satisfagan los requisitos exigidos en la convocatoria;
V.- En el caso de que resulte posible la emisión del dictamen en el que se asiente el cumplimiento de los aspectos técnicos requeridos en la convocatoria, el análisis de las propuestas económicas se realizará en el mismo acto. Cuando la evaluación técnica requiera una mayor atención o una opinión especializada, se citará en el acto a una nueva diligencia que se realizará en un plazo mínimo de dos días hábiles;
VI.- Una vez que se emita el dictamen técnico serán valoradas las propuestas económicas, exclusivamente de aquellos licitantes que hubieran acreditado cumplir con los aspectos técnicos de la convocatoria; procediendo a emitir el fallo correspondiente, el cual deberá elaborarse en un término de quince días por los participantes en el procedimiento y aprobarse por la Comisión, y
VII.- Una vez emitido el fallo, se procederá a la firma del contrato, lo que deberá realizarse en un plazo mínimo de cuatro y máximo de quince días hábiles, contados a partir del día en que se notifique el fallo a quien hubiera presentado la propuesta ganadora, siempre y cuando no se decrete la suspensión del procedimiento correspondiente o se amplíe el plazo conforme a este artículo.

El servidor público que presida los actos de la licitación pública, tomando en cuenta las fechas de los mismos, podrá diferir la celebración de cualquiera de éstos, con el propósito de llevar a cabo análisis técnicos y evaluaciones que le permitan la mejor toma de decisiones para el Congreso, situación que informará a los licitantes.

Artículo 48.- Cuando se lleve a cabo una licitación pública internacional, se observarán por lo menos los plazos establecidos para licitación pública nacional, de conformidad con el artículo que antecede.

Artículo 49.- Con la publicación de la convocatoria se dará inicio al procedimiento de licitación pública; y en su elaboración, la Subdirección deberá prever cuando menos los aspectos siguientes:

I.- La indicación sobre la forma o formas en que los licitantes deberán de presentar sus propuestas;
II.- Estar redactadas en idioma español;
III.- Contener la indicación de que es el Congreso el que convoca;
IV.- El señalamiento de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán consultar y adquirir las bases; el costo y la forma de pago de las mismas, el cual será requisito indispensable para participar en la licitación; igualmente la indicación de que dichas bases podrán ser consultadas y adquiridas por los medios de difusión electrónica, cuando así se establezca;
V.- La descripción general, cantidad, calidad y unidad de medida de los bienes o servicios cuya adquisición, arrendamiento o prestación se requiere; en el caso de arrendamiento de bienes, la indicación de si éste es con opción a compra.
VI.- Lugar y plazo de entrega e instalación; en su caso, de los bienes, sitio y vigencia del arrendamiento o prestación de los servicios;
VII.- Las condiciones de pago y la indicación de si se otorgará anticipo más el impuesto al valor agregado de éste, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo;
VIII.- La indicación de la fecha, hora y lugar en que se celebrará la junta de aclaraciones; de la apertura de la documentación legal, técnica y económica y de emisión del fallo;
IX.- La indicación que ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser modificada, y
X.- La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren impedías en los términos de la presente Ley.

Las convocatorias deberán estar firmadas por el Oficial Mayor y la Dirección, debiendo publicarse en el Periódico Oficial del Estado, así como en la página Web del Congreso, pudiendo determinarse además su inserción en un periódico de los de mayor circulación en el Estado.

Artículo 50.- Cuando en una convocatoria o en las bases de licitación se solicite acreditar la capacidad técnica de un proveedor o prestador de servicios, ésta se podrá demostrar a través de alguno de los siguientes medios:

I.- Una relación de las principales ventas o prestación de servicios de los últimos doce meses que incluya un informe técnico de los mismos, pudiendo adjuntar las constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del proveedor o prestador de servicios;
II.- Una descripción de las instalaciones, maquinaria, equipo y demás elementos técnicos de los que dispone el proveedor o prestador de servicios;
III.- Los datos de los títulos de estudios profesionales y/o técnicos de los responsables de la producción de los bienes o de la prestación de los servicios;
IV.- La entrega de muestras, fotografías o descripciones de bienes o servicios, que estarán sujetos a comprobación; y
V.- La información complementaria que a juicio de la dependencia solicitante, sea necesaria para acreditar la capacidad técnica.

Lo anterior sin perjuicio de que la Dirección o, en su caso, la dependencia solicitante, requiera otros medios de comprobación para procedimientos particulares.

Artículo 51.- Los servidores públicos de la Dirección, las dependencias solicitantes y las áreas de apoyo técnico, tienen prohibido proporcionar a terceros información concerniente a las licitaciones públicas, hasta que se publique la convocatoria correspondiente. Sin embargo, se podrá obtener información de terceros con el propósito de determinar el contenido de las convocatorias y las bases para las licitaciones públicas.

Artículo 52.- Las bases son las condiciones, cláusulas o estipulaciones específicas necesarias de tipo administrativo, jurídico, técnico y económico que se establecen para regular tanto el procedimiento de licitación pública como el contrato de adjudicación correspondiente. Con las especificaciones detalladas de los bienes o servicios requeridos, proporcionadas por la dependencia solicitante y con su apoyo, la Dirección, con la colaboración del área técnica respectiva, elaborará las bases para la licitación las cuales contendrán, en lo aplicable, como mínimo lo siguiente:

I.- Nombre de la convocante;
II.- La forma o formas en que los licitantes podrán presentar sus propuestas;
III.- Forma en que deberá acreditarse la existencia y personalidad jurídica de los licitantes;
IV.- Fecha, hora**,** lugar de la visita al sitio en donde se celebrará la junta de aclaración de bases, siendo optativa la asistencia a esta reunión; fecha, hora y lugar de celebración de los actos de recepción y apertura de la documentación legal, técnica y económica; acto de emisión de dictamen técnico y análisis de propuestas económicas; del fallo, y de la firma del contrato;
V.- Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación que afecte la solvencia económica y técnica de las propuestas, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como objeto obtener ventaja sobre los demás licitantes;
VI.- Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo, considerando que el pago que se realice en territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha que se haga dicho pago;
VII.- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser modificadas, salvo las que resulten de la junta de aclaración de bases;
VIII.- Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos;
IX.- Descripción completa y clara de los bienes, arrendamientos y servicios solicitados; así como información específica sobre el mantenimiento, asistencia técnica, capacitación y refacciones que deberán cotizarse, cuando estas últimas sean parte integrante del contrato, así como las características de las muestras que se presentarán y las pruebas que se realizarán;
X.- Plazos y condiciones de entrega, indicando el lugar donde se proporcionarán los bienes, arrendamientos o se prestarán los servicios, según el caso;
XI.- Las condiciones de precio;
XII.- Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán limitar la libre participación de los interesados;
XIII.- Manifestación de los licitantes, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
XIV.- Manifestación de las personas morales licitantes, bajo protesta de decir verdad, de que no se han declarado en estado de quiebra o están sujetas a concurso de acreedores, proveniente de declaración judicial por quiebra técnica;
XV.- La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren impedidas en los términos de este ordenamiento, para lo cual deberán presentar carta, bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesten no encontrarse en alguno de los supuestos de impedimento citados en el presente artículo;
XVI.- Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;
XVII.- Datos de las garantías de los bienes, arrendamientos o servicios que otorgará;
XVIII.- La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará;

XIX.- La indicación de si la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación será adjudicada a un sólo proveedor, prestador de servicio o arrendador o bien si se adjudicará por partidas o especialidades o, en su caso, si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial de precio que se considerará;
XX.- La indicación de la sanción a que se hará acreedor el licitante a quien le haya favorecido el fallo, cuando no firme el contrato dentro del periodo previamente determinado, por causas imputables al mismo;
XXI.- Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes adquiridos o arrendados y en la prestación de los servicios; y
XXII.- Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en la presente Ley.

La Dirección podrá establecer en las bases y en los contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, arrendador, prestador de servicios o contratista, respecto a las partidas o conceptos que integran al contrato. En estos casos establecerá el límite de incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de la presente Ley.

La Dirección podrá incorporar en las bases las modalidades de la contratación que tiendan a garantizar las mejores condiciones para el Congreso, a petición expresa de la dependencia solicitante.

Artículo 53.- Las bases se pondrán a disposición de cualquier interesado para su consulta y revisión, proporcionándose la misma información sin favorecer a algún participante.

En caso de que las bases impliquen un costo, éste se fijará considerando los gastos que se generarán por el procedimiento y los interesados, previamente a su inscripción, deberán depositar su importe en la cuenta bancaria del Congreso que se establezca para tal fin; este importe en ningún caso será reembolsable.

Para tener derecho a presentar propuesta, los interesados deberán adquirir las bases, de conformidad con lo establecido en la convocatoria correspondiente. Cuando así se establezca en la convocatoria, se podrán obtener las bases por medios remotos de comunicación electrónica. En ningún caso se podrá transferir o ceder los derechos adquiridos con la compra de las bases, inclusive a personas morales que sean parte del mismo grupo empresarial.

Artículo 54.- La junta de aclaración de bases deberá celebrarse con la anticipación mínima que señala el artículo 47 de la presente Ley, antes del acto de recepción y apertura de la documentación legal, técnica y económica, a fin de que quienes hayan adquirido oportunamente las bases soliciten aclaraciones a dudas o cuestiones sobre las bases de licitación y sus anexos.

Las dudas y cuestionamientos de quienes hayan adquirido las bases deberán formularse por escrito; en la junta de aclaración de bases se dará respuesta a las dudas que llegaren a surgir a los licitantes que hayan demostrado haber adquirido las bases, respecto del procedimiento licitatorio.

La dependencia solicitante, si fuera necesario y con el apoyo del área técnica correspondiente, aclarará las dudas de carácter técnico; los cuestionamientos normativos o jurídicos, contables y los de carácter procedimental, los aclarará el servidor público que presida los eventos del procedimiento licitatorio; asimismo, se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los aspectos que se trataron en la misma y se entregará copia a cada uno de los licitantes presentes al término del evento, dejándose a disposición de quienes no hubieren asistido la copia que les corresponda.

Las aclaraciones que se formulen y los acuerdos que se tomen en dicha junta serán obligatorios para todos los licitantes y pasarán a formar parte integral de las bases; por lo tanto, todos los licitantes estarán obligados a cumplir con los acuerdos y las aclaraciones que se hayan plasmado en el acta proveniente de la junta de aclaración de bases, aun cuando no hayan asistido a la misma, por lo que será responsabilidad del licitante recoger copia del acta, la cual se les entregará hasta el día hábil anterior a la presentación de propuestas.

Cuando por cualquier causa no se hayan respondido en un solo acto las dudas y cuestionamientos formulados, se continuará la junta de aclaración de bases en la fecha y hora que determine quien presida la misma; en este caso, los actos subsecuentes del procedimiento licitatorio se podrán reprogramar, a fin de observar los tiempos establecidos en la presente Ley.

Artículo 55.- La propuesta técnica de los participantes deberá incluir los elementos siguientes:

I.- La descripción detallada y ordenada de los bienes que se pretendan adquirir o arrendar o de los servicios requeridos;
II.- La información técnica que adicionalmente se requiera de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados, de acuerdo a la complejidad y especialización que revistan los mismos;
III.- Las garantías de los bienes y refacciones o servicios prestados, aclarando si serán cambiados por nuevos o reparados;
IV.- Carta dirigida al Congreso, firmada por el representante legal, en que acepta los términos incluidos en las bases y en el acta de aclaración de bases; y
V.- Los demás requisitos establecidos en las bases de licitación y, en su caso, en la junta de aclaración de bases.

Artículo 56.- En la propuesta económica que presenten los participantes deberán contemplarse los aspectos siguientes:

I.- El precio de la propuesta será preferentemente en moneda nacional incluyendo los descuentos que en su caso se otorguen, desglosando el monto del impuesto al valor agregado, para el caso de licitaciones nacionales. Para las internacionales, invariablemente deberá indicarse en qué divisa extranjera se cotiza.
En las licitaciones nacionales o internacionales, cuando los precios sean ofertados en divisa extranjera, éstos serán pagaderos siempre en moneda nacional al tipo de cambio vigente que publique el Banco de México a la fecha en que deba efectuarse el pago;
II.- Tratándose de varias partidas o conceptos, éstos deberán desglosarse coincidiendo el total de la propuesta con la suma del importe total de las partidas;
III.- El tiempo de vigencia de la propuesta no será menor al de los plazos que se hayan establecido en las bases y se deberá manifestar la aceptación de la forma de pago estipulada en las mismas;
IV.- Para adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, el tiempo, lugar y condiciones de entrega; y
V.- Los demás requisitos establecidos en las bases de licitación y, en su caso, en la junta de aclaración de las bases.

Artículo 57.- La entrega de las propuestas por los licitantes inscritos en la licitación correspondiente se efectuará en la forma y términos establecidos en la convocatoria, en el acto de recepción y apertura de la documentación legal y técnica, así como en el análisis de propuestas económicas.

La documentación legal y administrativa se presentará fuera de la propuesta del licitante, en forma independiente, para efectos de su revisión y cotejo.

Las propuestas técnica y económica se presentarán en un sobre cerrado y deberán constar por escrito, en original, en papel membretado del licitante, rubricadas en todas sus hojas y firmada en su última hoja por el representante legal, sin tachaduras ni enmendaduras y preferentemente foliadas. El no presentar la propuesta foliada no será motivo de desechamiento de la propuesta.

Cuando así se establezca en las bases, los licitantes que estén inscritos en el padrón podrán enviar por los medios remotos de comunicación electrónica, sus propuestas técnicas y económicas, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan, las cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Los sistemas para la identificación electrónica que utilicen los licitantes serán operados y administrados por la Dirección, la cual será responsable de ejercer el control de estos medios y de salvaguardar la confidencialidad de la información que se remita por este conducto.

Artículo 58.- Los actos de recepción y apertura de la documentación legal, administrativa, técnica y económica; emisión de dictamen técnico y apertura de propuestas económicas, así como del fallo, se realizarán en sesión pública que presidirá el Oficial Mayor o el servidor público que éste designe, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

Se contará con la participación del personal de la dependencia solicitante y, en su caso, del área técnica, la cual participará en el ámbito de su competencia, conforme a lo siguiente:

I.- En principio, se procederá al análisis de la documentación legal y administrativa que se requiera en las bases, descalificándose a los que no presenten la totalidad de los documentos solicitados y asentando en el acta respectiva las razones de desechamiento de las propuestas;
II.- El acto de apertura comprenderá dos etapas, pudiendo celebrarse en un solo evento o en varios, cuando la naturaleza y complejidad de la licitación así lo amerite;
III.- En la primera etapa se procederá a evaluar la propuesta técnica exclusivamente, procediéndose a su revisión cuantitativa, sin entrar en análisis detallado de su contenido, debiendo desechar en el acto las propuestas que incumplan con la presentación de alguno de los documentos y/o requisitos establecidos en las bases. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y dos servidores públicos del Congreso presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas.
IV.- La dependencia solicitante, con apoyo del área técnica que corresponda, hará el análisis de las propuestas técnicas, haciéndolo constar en un dictamen, en el que se asentará la evaluación de las propuestas presentadas, plasmando claramente cuáles cumplen con los requerimientos establecidos en las bases de la licitación, así como el fundamento y la motivación para desecharlas y descalificar a los licitantes**;**
V.- En la segunda etapa se dará a conocer a los licitantes el resultado del análisis técnico y se procederá a la evaluación de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubiesen sido desechadas.
Se descalificará a los licitantes cuyas propuestas no cumplan con lo establecido en las bases; por lo menos un licitante, si asistiere alguno y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas.
VI.- Las propuestas técnicas y económicas enviadas electrónicamente serán resguardadas por la Dirección en los medios de seguridad electrónica que al efecto se establezca;
VII.- La Dirección levantará acta circunstanciada de los actos de recepción y apertura de la documentación legal y técnica, así como la recepción de propuestas; emisión de dictamen técnico y evaluación de propuestas económicas; así como del fallo, en las que se hará constar de manera detallada su desarrollo, la cual será firmada por los asistentes a los actos. La falta de firma por parte de algún servidor público o licitante, no invalidará el contenido y efectos de las actas.

Artículo 59.- El incumplimiento por parte del licitante de los requisitos establecidos en las bases de la licitación y en la junta de aclaración de bases, así como la contravención a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables, será motivo de descalificación, lo cual se hará de su conocimiento en la etapa en que ocurra, asentándose en el acta correspondiente.

Una vez que sea comunicada la descalificación de algún licitante, el mismo podrá estar presente en las etapas subsecuentes de la licitación, sin poder realizar manifestación alguna ni alterar el

orden; de lo contrario, tendrá que abandonar la sala en la que se esté desarrollando el procedimiento licitatorio.

Artículo 60.- Una vez determinada la adjudicación, se turnarán las actuaciones y la documentación relativa a la Comisión, para que emita el fallo correspondiente dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción, mismo que será notificado a los licitantes, a quienes se les entregará copia de la misma.

Para la emisión del fallo, se considerará lo siguiente:

I.- El dictamen técnico, en el que se asentará la evaluación de las propuestas presentadas, indicando aquellas que fueron desechadas por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases;
II.- Cuadro comparativo de las propuestas económicas de los licitantes que calificaron técnicamente; y
III.- Los contratos serán adjudicados al licitante que reúna los requisitos solicitados en las bases, garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas y satisfaga los aspectos de oportunidad, calidad, garantía, precio y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 61.- El servidor público que presida los actos de la licitación, declarará desierta la misma en forma general o en alguna partida o partidas, en los supuestos siguientes:

I.- En el caso en que no haya sido adquirida ninguna base de licitación;
II.- En caso de que no se registre como mínimo un participante a la licitación, o habiéndose registrado no acuda al acto de recepción y apertura de la documentación legal y técnica, así como el análisis de propuestas económicas en la fecha señalada para su realización;
III.- Cuando durante el proceso de la licitación, no prevalezca como mínimo una propuesta que cumpla con los requisitos establecidos en las bases; y
IV.- En caso de que los precios propuestos no fueren aceptables, tomando en consideración la información con que cuente el Congreso.

Una vez declarada desierta una licitación pública, se podrá efectuar la contratación mediante los procedimientos de invitación o adjudicación directa, según las circunstancias de cada caso. Cuando en una licitación pública se declaren desiertas una o varias partidas, se procederá en los términos del párrafo anterior.

Artículo 62.- Se podrá declarar la suspensión temporal de una licitación cuando exista caso fortuito o de fuerza mayor, así como razones técnicas, económicas o administrativas debidamente fundadas y motivadas**;** o que, de continuar con el procedimiento, pudiese causar algún daño o perjuicio al Congreso. Cuando se determine la suspensión se notificará a los licitantes durante el acto de cualquier etapa del procedimiento o dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la determinación correspondiente.

Cuando desaparezca la causa que hubiese motivado la suspensión temporal de la licitación, quien presida los actos del procedimiento decretará la reanudación, dando aviso por escrito a los licitantes con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que deba de celebrarse el acto que corresponda, en el entendido de que sólo podrán continuar aquellos licitantes que no hubieran sido previamente descalificados.

Artículo 63.- Se podrá declarar la cancelación de una licitación o partidas que la integran cuando:

I.- Se tenga información de la existencia de casos de arreglo entre los licitantes para elevar los precios de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación, o de la existencia de otras irregularidades; y
II.- Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir, arrendar los bienes, contratar la prestación de

los servicios, y que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Congreso. Cuando se presente esto último, el Congreso únicamente se encontrará obligado a reembolsar, en su caso, el importe pagado por la adquisición de las bases.

La cancelación deberá ser notificada a los licitantes dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo correspondiente.

TÍTULO TERCERO
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Capítulo Único
Disposiciones Comunes

Artículo 64.- La Subdirección será la entidad responsable de integrar y operar el padrón de proveedores del Poder Legislativo. Además, clasificará a las personas inscritas en él, de acuerdo con su actividad, capacidad técnica y demás características que las identifique.

La clasificación que circunscribe este artículo, deberá ser considerada en las convocatorias y formalización de las operaciones que establece y regula el presente ordenamiento.

Las personas inscritas en el padrón de proveedores del Poder Legislativo, deberán comunicar a la Subdirección las modificaciones relativas a su naturaleza jurídica, representación legal, domicilio, actividad, capacidad técnica, económica y representación cuando tengan lugar, durante los primeros treinta días naturales posteriores al acto que corresponda.

Artículo 65.- El padrón de proveedores del Poder Legislativo, se integrará con las personas físicas y morales que deseen enajenar mercancías, materias primas y bienes muebles, o bien arrendar o prestar servicios al Congreso.

Artículo 66.- Será facultad de la Subdirección, previo acuerdo del Oficial Mayor, suspender o cancelar el registro de un proveedor integrante del padrón de proveedores, cuando incurra en alguno de los siguientes supuestos:

I.- La información que se proporcione para la inscripción resulte falsa o haya mediado dolo o mala fe en la adjudicación de un pedido o contrato, en su celebración o en su cumplimiento;
II.- No cumpla en sus términos con algún pedido o contrato por causas que le fueran imputables y perjudique con ello los intereses del Congreso;
III.- Incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o la economía del Congreso;
IV.- Se declare en quiebra;
V.- Haya aceptado pedidos o firmado contratos en contravención a lo establecido por esta Ley, por causas que le fueran imputables;
VI.- Se le declare inhábil legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por esta Ley;
VII.- Cuando el proveedor no actualice la información que le requiera la Dirección, de conformidad con los requisitos establecidos en este ordenamiento; y,
VIII.- Cuando la personalidad y/o personería del proveedor y/o su representante no estuvieren legal suficientemente acreditada.

Contra la negativa de la inscripción, o determinación de la suspensión o cancelación del registro en el padrón de proveedores, el interesado podrá interponer recurso de revisión, en los términos establecidos por la presente Ley.

Artículo 67.- La Subdirección notificará al proveedor de la cancelación o suspensión del registro, señalándole un plazo de cinco días hábiles para que manifieste ante la Oficialía Mayor lo que a su derecho convenga.

El Oficial Mayor valorará los argumentos y elementos de prueba aportados por el proveedor, procediendo a notificarle la revocación, modificación o confirmación de la resolución inicial.

TITULO CUARTO
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS

Capítulo I
De las Sanciones

Artículo 68.- A los servidores públicos que intervengan en los procedimientos de adquisiciones a que se refiere la presente Ley y con su actuación contravengan alguna disposición de este ordenamiento, les serán impuestas las siguientes sanciones:

I.- Amonestación;
II.- Suspensión en el ejercicio de su cargo, hasta por treinta días; y
III.- Multa hasta por el equivalente a 500 Unidades de Medida y Actualización.

Si el infractor no tiene el carácter de servidor público, se le impondrán las sanciones que se prevén en los ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio, en su caso, de exigir la responsabilidad civil o penal.

Capítulo II
De los Recursos

Artículo 69.- Contra actos y resoluciones dictadas en aplicación de esta Ley procederá el recurso de revisión, el cual deberá interponerse a más tardar el día siguiente de aquel en que se tenga conocimiento del acto reclamado y será resuelto de plano por la autoridad que tenga a su cargo el procedimiento de adquisición correspondiente.

Artículo 70.- Será optativo para el particular interponer el recurso a que se refiere el artículo anterior o promover directamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.

SEGUNDO.- Los procedimientos de adquisición iniciados antes de que entre en vigor la presente Ley, serán concluidos en los términos pactados y de acuerdo con la normatividad vigente en la fecha de operación.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente.

Atentamente
Colima, Colima, 30 de enero del año 2017.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

HÉCTOR MAGAÑA LARA
Diputado Presidente

JOEL PADILLA PEÑA
Diputado Secretario

J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO
Diputado Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en lo establecido por el artículos 144, fracción IV, inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general y en lo particular, el dictamen que nos ocupa, recordándoles que podrán hablar hasta 3 tres Diputados en pro y 3 tres en contra, por dos veces cada uno, debiendo solicitar a esta Presidencia, si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa, en lo general y en lo particular.
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la afirmativa.
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa en lo general y en lo particular.
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor en lo general y en lo particular.
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, a favor en lo general y en lo particular.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor en lo general y en lo particular.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, a favor en lo general y en lo particular.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Martha Sosa, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor en lo general y en lo particular.
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor.

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor en lo general y en lo particular, del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativo a reformar el artículo 14 Bis, de la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la palabra nuestra compañera Juana Andrés Rivera.

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con permiso Diputado Presidente. Compañeros y público que nos acompaña, medios de comunicación. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y

posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Juana Andrés Rivera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra la Diputada Juana Andrés Rivera, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 91 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR EL ARTÍCULO 14 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 14 Bis de la Ley de Educación del Estado de Colima; de conformidad a los siguientes:

A N T E C E D E N TE S

1.- La Diputada Juana Andrés Rivera, así como los demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los Diputados Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, todos ellos integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 23 de enero del año 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 14 Bis de la Ley de Educación del Estado de Colima.

2.- Que mediante oficio No. DPL/917/017, de fecha 23 de enero del año 2017, los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- La iniciativa presentada por la Diputada Juana Andrés Rivera, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente:

> "*El 18 de enero del presente año quedará marcado en la historia del país por la tragedia suscitada en una escuela del Estado de Nuevo León, en la cual uno de los alumnos que cursaba la educación secundaria en plena clase sacó un arma de fuego y disparó en contra de sus compañeros y de la maestra, para posteriormente quitarse la vida.*
>
> *Dicho sucedo demostró que en el tema de la educación en nuestro país aún falta mucho por hacer, sobretodo en el desarrollo psicológico y emocional de los alumnos.*
>
> *Si bien las múltiples reformas educativas realizadas en el país han contribuido a mejorar la educación en México, las mismas, en su mayoría, se han enfocado en fortalecer los aspectos meramente educativos, esto es, los contenidos de clase y en fortalecer las habilidades de los maestros; sin embargo, se le ha restado importancia el fortalecer el desarrollo psicológico y emocional de los estudiantes.*
>
> *En ese sentido, los suscritos iniciadores consideramos que no debemos permanecer inertes e ignorar lo sucedido en Nuevo León, por lo que en el ámbito de nuestras facultades y competencias debemos emprender las medidas legislativas atinentes en aras de prevenir que una tragedia como la señalada vuelva a repetirse.*
>
> *Por lo anterior de un análisis realizado a la Ley de Educación del Estado de Colima, específicamente en el tema referente al desarrollo psicológico y emocional de los estudiantes de educación básica, encontramos que los artículos 11, fracción I; 14 Bis; 18, fracción XV; y 23, establecen obligaciones para el Estado en la materia del fortalecimiento, desarrollo y protección del aspecto psicológico, moral, emocional y cívico de los alumnos.*
>
> *Sin embargo, encontramos que en el tema de referencia se puede fortalecer, mediante una reforma al artículo 14 Bis de la referida Ley, artículo que señala lo siguiente:*

ARTICULO 14 Bis.- Las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Estatal, podrán contar con un área especializada en psicología, o por lo menos con un trabajador social, con el objetivo de cuidar, atender y orientar a los educandos a fin de permitirles el pleno desarrollo de sus habilidades intelectuales, emocionales y sociales, así como el darles a conocer sus derechos y deberes.

De igual manera el área especializada en psicología ofrecerá asesoría y apoyo a maestros y padres de familia para la oportuna y acertada atención a /os alumnos, de una manera colegiada e integral. El trabajador social buscará la solución colectiva e integral a problemas personales de /os alumnos, sean éstos de ámbitos económico, familiar y social.

Por lo que del artículo trasunto podemos desprender que en el Sistema Educativo Estatal, las instituciones educativas de la educación básica podrán contar con un área especializada en psicología, esto es, es una disposición normativa optativa, que señala que las escuelas según lo consideren pertinente o ro, podrán incorporar a su estructura un área de psicología, situación que para los suscritos debería de establecerse como una obligación para las instituciones educativas, y no dejar a su libre albedrío cumplirla o no.

Asimismo, establece que las instituciones educativas de educación básica en el Estado por lo menos deberán de tener en su estructura un área de trabajo social, en ese orden de ideas, los suscritos proponemos que sea obligación para dichas instituciones el tener en su estructura tanto un área especializada en psicología, como un área de trabajo social, las cuales de manera coordinada se encargarán de fortalecer y desarrollar el aspecto emocional, psicológico, moral y cívico de los alumnos.

En esa tónica, se establece que el área especializada en psicología ofrecerá asesoría y apoyo a maestros, padres de familia, y además, a quienes ejerzan la patria potestad de los menores para la oportuna y acertada atención a los alumnos de una manera colegiada e integral.

Además, se establece como una obligación para las escuelas de educación básica el establecer un programa coordinado por sus áreas de psicología y trabajo social, destinado a la inculcación y fortalecimiento de los valores cívicos y morales de los alumnos. Esto es, un programa que coordine e integre los ámbitos escolar, familiar y social que rodea a los estudiantes, en aras de fortalecer y desarrollar el aspecto emocional, psicológico, moral y cívico de los alumnos. Estableciendo que dicho programa deberá de ser diseñado y estructurado de manera coordinada entre la Secretaría de Educación Pública del Estado y cada institución educativa de educación básica.

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/072/017 lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Gral. Francisco J. Mugica"*, a efecto de realizar el proyecto de

dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos:

Teniendo como antecedentes varios eventos similares a los presentados recientemente en Nuevo León, esta comisión determino que la iniciativa en estudio, es una propuesta viable para que se considere la atención psicológica y de trabajo social en las escuelas del nivel básico, ya que actualmente se da de forma opcional, ello mediante la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, ante los diversos factores que inciden en el entorno de los alumnos, es posible considerar la existencia de estos especialistas en los centros escolares de la entidad, a efecto de coadyuvar a una sana convivencia, en la que impere el respeto y la dignidad humana, incidiendo de cierta manera en la disminución de problemas de inseguridad y violencia, que se traducen en fenómenos de agresividad, hostigamiento, bullying y discriminación, que ofenden la dignidad humana, y limitan el derecho educativo de niñas, niños y jóvenes.

De igual manera, resulta oportuna la propuesta de los iniciadores relativa a implementar un programa de coordinación entre alumnos, familia y sociedad, con el objeto de fortalecer los valores cívicos y familiares de los educandos, e incidir en una mejor formación de éstos.

Por lo anteriormente expuesto, es que coincidimos que es necesario fortalecer la capacidad institucional de las escuelas, con la finalidad de dotarles de herramientas que les permitan construir un ambiente libre de violencia en los planteles educativos, e indirectamente en los propios hogares, circunstancias que provocan la participación activa de profesionales en psicología y trabajo social.

TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente:

En nuestro Estado se han tomado algunas medidas contra la violencia en las escuelas y la sana convivencia, ello mediante Decreto expedido por el Poder

Ejecutivo del Estado mediante el cual se expide el Marco de Convivencia Escolar del Estado de Colima, que menciona en su Sección III los derechos y deberes de las alumnas y alumnos, señalando específicamente el artículo 10, en el apartado 10, lo siguiente:

> *Artículo 10. Son derechos y deberes de las alumnas y alumnos que cursen cualquier nivel o modalidad de la educación básica en escuelas públicas o privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios de la entidad, los siguientes:*
>
> > *10. Recibir la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, fisiológica, psicológica y social, así como la información necesaria para el autocuidado.*

Además, existe el Protocolo de Actuación para una Escuela Libre de Violencia, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual menciona que el derecho a la educación de calidad está garantizado en los artículos 3° y 4° constitucionales y en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990. Estos instrumentos jurídicos **obligan a preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, basada en la comprensión, la paz, la tolerancia, la equidad de género y la fraternidad.**

Finalmente, cabe señalar que es necesario implementar la obligatoriedad en las instituciones, buscando con ello combatir y contribuir la problemática social actual que vive la niñez en sus entornos tanto personales, como sociales, sumando mediante terapias constantes que les permita expresar su sentir y sus pensamientos para así identificar, prevenir y dar seguimiento a problemas emocionales de los niños y jóvenes en nuestro Estado.

Visto lo anterior, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las facultades previstas en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para hacer algunas precisiones en la redacción de la propuesta de la iniciadora.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO.- Se reforma el artículo 14 bis de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14 BIS.- Las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Estatal, **deberán** contar con un área especializada en psicología **y de trabajo** social, con el objetivo de cuidar, atender y orientar a los educandos a fin de permitirles el pleno desarrollo de sus habilidades intelectuales, emocionales y sociales, así como darles a conocer sus derechos y deberes.

El área especializada en psicología ofrecerá asesoría y apoyo a maestros, padres de familia **y a quienes ejerzan la patria potestad de los menores** para la oportuna y acertada atención a los alumnos, de una manera colegiada e integral. El trabajador social buscará la solución colectiva e integral a problemas personales de los alumnos, sean éstos de ámbitos económico, familiar y social. **Asimismo, ambas áreas buscarán la inculcación y fortalecimiento de los valores cívicos y éticos de los alumnos, a través de la implementación de un programa de coordinación entre las escuelas, la familia y la sociedad.**

Dicho programa deberá de ser diseñado y estructurado de manera coordinada por la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con la opinión de las instituciones de educación básica y de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M E N T E
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo Secretario

Dip. Joel Padilla Peña Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la

presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla.

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si muy buenas tardes compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, creo que estamos a punto de aprobar una iniciativa que es importante para el sector educativo del Estado de Colima, sobre todo pues se puedan estar tratando a los niños con temas psicológicos, que bueno, hemos visto lo que ha estado sucediendo en otros estados del país, y creo que es muy importante, pero haciendo la revisión, yo creo que lo que estamos analizando el día de hoy, debió de haber pasado en primer lugar, haberse pedido una consulta a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, yo me puse a revisar, los dictámenes que vamos a aprobar el día de hoy y cosa curiosa, los que tienen que ver con temas de presupuesto, pues no le piden a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que nos pueda dar su, pues sus comentarios, su criterio técnico, respecto a la iniciativa que se está presentando y más que el día de hoy, bueno, tener una unidad que esté atendiendo a los niños y jóvenes pues va a tener un costo, como se va a asumir si ya hay un presupuesto, de igual manera, vemos que en algunos, tampoco pasó por la Comisión de Mejora Regulatoria de este Congreso, que creo que estamos haciendo un caso omiso a esa Comisión que nosotros mismos aprobamos, es una Comisión que está ahí, que puede estar trabajando y aportando cosas buenas, entonces, aprobamos leyes, aprobamos iniciativas que se presentan, que al final de cuenta, pues se traducen en letra muerta, porque no va a ver un presupuesto para estar atendiendo y me voy a

adelantar un poquito también, en el tema de una iniciativa que esta por ahí para que los niños, las escuelas puedan impartir, sean bilingües, también se van a tener que contratar maestros que hablen inglés, y no esta tampoco en ese dictamen, tampoco se menciona ni se hace referencia a la Comisión de Mejora Regulatoria que es por parte de este Congreso, ni siquiera tampoco piden opinión técnica a la Secretaría de Finanzas, entonces, estamos ahí aprobando cosas que no van a ser viables, que se van a quedar ahí nada mas en el tintero, como una ley muy bonita y podemos decir que Colima, es pionero en estos dos temas, pero sin un presupuesto para que se pueda aterrizar y sea a favor de la educación colimense, que tanta falta hace que se actualice. Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada Gaby Sevilla, Gaby de la Paz Sevilla Blanco ¿algún compañero desea hacer uso de la voz? Nuestra compañera Diputada Juana Andrés Rivera.

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Sin duda alguna, como ya lo mencionó la Diputada, yo alabo que comenten pues que es una iniciativa excelente para la situación que actualmente están viviendo nuestros educandos en todos los ámbitos educativos, mas sin embargo, dentro del mismo, creo que tenemos que empezar a dar un paso muy importante, y la solicitud de esta iniciativa, como ya lo menciona el mismo, pues estamos diciendo que empezaríamos con un programa educativo en las escuelas, también estamos mencionando que dentro del mismo documento, dice que estará sujeto al tema de presupuesto si es que lo hay, si no lo hay, es importante que iniciemos con este programa, a través de las escuelas de trabajo social, a través de las escuelas de psicología que es un programa que se implementaría y que sabemos que si se tiene excelente respuesta que es la intención, estamos por iniciar para el próximo año, dentro del presupuesto que lo pudiéramos en este año, se pudiera ser sujeto a valoración que sabemos que es lo que queremos todos, y que bueno tenemos que empezar por algo, y a mí me da mucho gusto que empecemos este año, con este programa, obviamente, como lo comento que sabemos que es un programa que va a ser y a tener excelentes resultados. Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias compañera Diputada ¿alguien más, en el uso de la palabra sobre el dictamen que

esa a discusión?, si no hubiera más comentarios, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados, en votación nominal si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa.
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor.
DIPUTADA ADRIANA MESINA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que se emitió una abstención de voto del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto para reformar las fracciones XVI y XVII y se adiciona una fracción XVIII al artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de Colima. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Diputada Norma Padilla.

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Buenas tardes, con el permiso de todas las personas que nos acompañan, de mis compañeros Diputados de la Directiva. Con el permiso Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Norma Padilla Velasco. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra a la Diputada Norma Padilla Velasco, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 94 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR LAS FRACCIONES XVI Y XVII Y ADICIONAR UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTICULO 429 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones XVI y XVII y adicionar una fracción XVIII al artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Los Diputados Norma Padilla Velasco, Luis Humberto Ladino Ochoa y Joel Padilla Peña, presidenta y secretarios de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, actualmente integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 23 de enero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita anteriormente.

2.- Que mediante oficio número DPL/917/017, de fecha 23 de enero de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron la iniciativa en materia, a la Comisión de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N A L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- Los Diputados Norma Padilla Velasco, Luis Humberto Ladino Ochoa y Joel Padilla Peña, en su exposición de motivos, señalan textualmente que:

> *"La patria potestad Constituye una relación paterno-filial que consiste en un régimen de protección de los menores no emancipados, donde se encomienda la protección de éstos a sus padres. La patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiares independientemente de que estas nazcan dentro del matrimonio o fuera de él.*
>
> *La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos tienen iguales derechos para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria potestad.*
>
> *El artículo 444 del Código Civil para el Estado de Colima, contempla que la patria potestad solo se puede perder por resolución judicial en los siguientes casos:*
>
> > *I.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho;*
> >
> > *II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;*
> >
> > *lll.- Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal;*
> >
> > *IV.- Por la exposición que el padre o la madre hicieren de sus hijos, o porque los dejen abandonados por más de seis meses.*
> >
> > *V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor;*
> >
> > *Vl.- Cuando el que la ejerza sea condenado por delito grave;*
> >
> > *Vll.- Ante el lncumplimiento de la obligación alimentaria por más de noventa días sin causa justificada.*
> >
> > *Vlll.- Cuando los menores hayan presenciado conductas recurrentes de violencia intrafamiliar, que les hayan provocado o puedan provocar un daño en su desarrollo integral.*

En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991;y 3,4, 6y7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: ,'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña.

Actualmente nuestra legislación procesal civil, contempla que todos los asuntos que se tramiten relacionados con la perdida de la patria potestad, deben de ceñirse al procedimiento ordinario, lo cual representa un juicio tardío que en muchas de las ocasiones provoca una falta de protección al interese superior del menor, haciendo necesario que dichos procedimientos sean más agiles, motivo por el cual y como primer paso para dar cumplimiento al exhorto realizado por la Cámara de Senadores a esta Soberanía es que los diputados que integramos la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos, Mayores y Discapacidad, proponemos la presente iniciativa que tiene como finalidad que los juicios que versen sobre la perdida de la patria potestad se llevan a cabo mediante un procedimiento más cortos y ágil privilegiando en este caso el principio de celeridad, como es el procedimiento sumario que contempla nuestra legislación civil.

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, ello mediante oficio DJ/278/017 lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

III.- Leída y analizada las iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 13 de febrero de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Francisco J. Mugica"*, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer y estudiar el presente proyecto de decreto, de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su estudio bajo los siguientes términos:

La institución de la patria potestad se origina en el derecho romano, el mismo nombre enuncia su origen y su carácter que ha venido variando a lo largo del tiempo y del cual subsiste exclusivamente el nombre. Consistía en una efectiva potestad o poder sobre los hijos y sus descendientes, ejercido solo por el ascendiente varón de más edad.

Se equiparaba a la potestad marital que se tenía con respecto a la mujer y era equivalente, en menor grado, a la potestad sobre los esclavos. Se establecía en beneficio del jefe de familia, quien podría rechazarla si así le convenía; sus facultades abarcaban la persona y los bienes de los hijos, a tal grado que podía venderlos como esclavos si lo hacía fuera de roma, e incluso condenarlos a muerte. El páter era dueño de todos los bienes que el hijo adquiría con un poder absoluto y dictatorial. Estas características fueron suavizándose a través del tiempo especialmente con el advenimiento del cristianismo.

En este mismo orden ideas, como es de apreciarse anteriormente, la patria potestad ha de ejercerse siempre a los hijos, entre los deberes actuales de los padres se encuentra la obligación de estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes, en caso de incumplir con los deberes, existe la manera de juzgar ante la autoridad competente para hacer valer el derecho que corresponde a uno de los progenitores de exigir la designación individual de ejercerla, pero también podemos observar en la Legislación Civil las causas de extinción cuando se produce alguno de los siguientes supuestos: "*la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga y la mayor edad del hijo"*; asimismo se puede perder el derecho de ejercer la patria potestad por los supuestos que encontramos en el artículo 444 del Código Civil para el Estado de Colima.

Por lo tanto, esta comisión dictaminadora, coincide con los razonamientos lógicos jurídicos de los iniciadores, ya que actualmente la pérdida de la patria potestad mediante un litigio tramitado por la vía civil ordinaria, sus etapas procesales suelen tardar demasiado tiempo, por lo que entendemos que es recomendable alternarlo a la vía civil sumaria, y así también, de la misma forma proteger a los menores, ya que esta tramitación es más rápida y así a la vez, cumpliría con lo fundado en el párrafo noveno del artículo 4 de nuestra Carta Magna Federal, que textualmente señala que*: "En todas las decisiones y actuaciones del* ***Estado*** *se velará y cumplirá con el* ***principio del interés superior de la niñez****, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez".*

Podemos deducir que este principio se entiende como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como

las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Ahora bien esta comisión dictaminadora deduce que es conveniente reformar la Legislación Procesal Civil, con el fin de acatar el principio constitucional de economía procesal, fundado en el parrado segundo del artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente concreta: "*toda persona tiene derecho a que se le* ***administre justicia por tribunales*** *que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,* ***emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.*** *Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".* Así pues, definimos lo anterior con el objeto de aplicar un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional, para poder ejercer el derecho fundamental y no el convencional, pues los integrantes de esta comisión dictaminadora estamos a favor de los principios que anteriormente se invocaron, con el objetivo de no contraponer nuestra ley suprema y así razonar por el bienestar de la sociedad que exige sus Derechos Constitucionales.

TERCERO.- Finalmente, los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, estamos seguros que con la aprobación del presente proyecto de dictamen, se dará un paso más, ya que en el presente, se propone establecer que todos los asuntos que se tramiten y sean relacionados con la perdida de la patria potestad, se excluyan del procedimiento ordinario, lo cual representa un juicio tardío que en muchas de las ocasiones provoca una falta de protección al interés superior del menor. Como finalidad determinamos que los juicios que versen, se llevan a cabo mediante un procedimiento más cortos y ágil privilegiando en este caso el principio de celeridad, como es el procedimiento sumario que contempla nuestra Legislación Procesal Civil.

Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos dimos a la tarea de modificar únicamente el resolutivo de la redacción de la iniciativa.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones XVI y XVII y se adiciona una fracción XVIII al artículo 429 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Articulo 429. . . .

I a XV. . . .

XVI.- Las acciones relativas a las servidumbres legales o que consten en títulos públicos;

XVII.- Los juicios que tengan que ver con la patria potestad, salvo la hipótesis contemplada en la fracción V del artículo 937 de este Código; y

XVIII.- En general, las cuestiones que por su naturaleza requieran celeridad o lo determine la ley.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M EN T E
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo
Secretario

Dip. Joel Padilla Peña
Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith, Velázquez, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. Mesina Reyes, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 24 veinticuatro votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar, diversas disposiciones de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima. Tiene el uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano.

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, Compañeras y compañeros Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de los medios de comunicación que se encuentran presentes. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión

y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por nuestro compañero Diputado Federico Rangel Lozano. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 89 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS COSNTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY QUE PREVIENE, COMBATE Y ELIMINA LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 3°; el párrafo primero del artículo 4°; la fracción V del artículo 10 y la fracción I del artículo 12; asimismo adicionar un párrafo tercero al artículo 4°, todos de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; de conformidad a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- El Diputado Federico Rangel Lozano, así como lo demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados Únicos de los Partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, todos ellos actualmente integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 23 de noviembre de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Colima y a la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar.

2.- Que mediante oficio número DPL/830/016, de fecha 23 de noviembre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente:

> *“El último párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de no discriminación, principio que desde sus orígenes prevé a la edad como un posible factor de discriminación. El texto actual de dicho artículo, en la parte conducente, establece lo siguiente.*
>
> > *"**Queda prohibida toda discriminación motivada por** origen étnico o nacional, el género, **la edad**, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".*

En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de noviembre de 2014, al dictar sentencia en los autos del expediente 99212014, estableció lo siguiente:

1) *La vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y el principio de autonomía de la voluntad.*

Es importante recordar que al reconocer la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, puede ocasionar una colisión entre el derecho fundamental y el derecho de la autonomía de la voluntad.

Así pues, el derecho a la no discriminación debe ser respetado tanto por las autoridades como por los particulares. Por ende, a pesar de la libertad de la que goza el empleador para contratar, éste debe abstenerse de discriminar al seleccionar al personal, distribuir el tiempo de trabajo, e instaurar normas de conducta y disciplina en el lugar de trabajo.

2) *La edad como factor de discriminación en el mercado de trabajo*

La discriminación se suele apoyar en estereotipos o estigmas asociados a la edad, para los jóvenes: inexperiencia o la poca destreza o falta de pericia; para los mayores: la menor productividad, la falta de adaptación a los cambios, la dificultad de ajustarse a decisiones flexibles o menor capacidad de reacción.

En ese sentido, los Ministros expresaron que, el prejuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado con una concepción de rentabilidad económica, si el patrón presume que el trabajador maduro es menos apto que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, piensa que su empresa, antes o después, sufrirá pérdidas económicas por su contratación. Y en similar sentido, si parte de la premisa de que las ausencias al trabajo de las personas maduras alcanzan un mayor índice por entender que éstas son quienes asumen las responsabilidades familiares, pensará que le generarán costes, que no existirían si contratara a trabajadores jóvenes.

3) *Juicio de razonabilidad en los casos de discriminación por razón de edad*

Estableciendo que la discriminación por edad, es el trato diferencial hecho a una persona por motivos de su edad sin considerar de antemano sus capacidades y aptitudes. En materia laboral se producen casos de discriminación por edad positiva o negativa, es decir, discriminación por edad a jóvenes y adultos respectivamente. En este tenor, cuando respecto a la edad no se tienen en cuenta las características profesionales del trabajador ni el rendimiento, la dedicación o la aptitud por él desarrollada, sino únicamente el factor cronológico aislado del tiempo vivido, supone un actuar arbitrario que actualiza la prohibición constitucional y legal de no discriminar.

En otras palabras, exigir una edad, ésta debe encontrar un vínculo justificable con las funciones a realizarse, de lo contrario, tal requisito sería ajeno a la exigencia de razonabilidad, puesto que el requisito de edad debe constituir un aspecto esencial y determinante acorde a las labores a realizarse.

Derivado de todo lo anterior, podemos advertir que estas malas prácticas por parte de los empresarios en los que sus anuncios de ofertas laborales engloban en su gran mayoría rangos de edad, los cuales resultan a todas luces violatorias de derechos humanos, ya que un rango de 18 a 25 años o de 25 a 35 años implica efectividad y conocimiento, pues no existe una razón suficiente para considerar que solamente las personas de determinado rango de edad pueden llevar a cabo ciertas funciones bajo altos parámetros de eficiencia, ya que la edad pudiera ser un sinónimo de experiencia y a mayor edad mayor experiencia.

En ese tenor, pudiera ser un estereotipo sexista el solicitar por ejemplo en una convocatoria de empleo ser joven, de cierta edad, alegre o con buenas presentaciones, estas características específicas atentan contra la dignidad de la persona, ya que cada uno tiene una personalidad distinta y los diferentes tipos de personalidad no entrañan directamente en mayor o menor efectividad laboral.

Por lo tanto, los iniciadores pretendemos con la presente iniciativa tutelar y garantizar los derechos fundamentales a la no discriminación y al trabajo de los ciudadanos colimenses, para que todos cuenten con las mismas posibilidades de acceder a un trabajo digno. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía.

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las fracciones que anteceden, ello mediante oficio DJ/065/017 lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 13 de febrero de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Gral. Francisco J. Mugica"*, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente documento, los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos su viabilidad en los siguientes términos:
El tema de la discriminación por edad no es un tema nuevo o de nueva controversia, si no que es algo que se vive en el día a día en las empresas y en las contrataciones, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de Nación resolvió que establecer un rango de edad para ocupar un puesto de trabajo es discriminatorio, por lo que si un postulante o una persona mayor, enfrenta un caso de este tipo, deberá ampararse y conservar como pruebas el anuncio de la vacante y documentos que comprueben sus capacidades profesionales.

Es por ello que esta Comisión considera indispensable tomarlo en consideración en la promoción de las condiciones conferidas al estado y a los poderes públicos tanto estatales como municipales eliminando los obstáculos Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima.

TERCERO.- Es aplicable y sirve como base jurídica, sustentar el presente documento, mediante el siguiente texto:

Además de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen diversos tratados y convenios en los que los Estados parte, deben adoptar medidas necesarias y adecuaciones en su legislación para prever dichos actos discriminatorios, incluidos los concernientes a la discriminación laboral por la edad, uno de ellos es el siguiente:

El artículo 1° del Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, resaltando su último párrafo:

> Artículo 1.- El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
>
> Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.
>
> Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

Es por ello que los integrantes de esta Comisión, consideramos oportuno adecuar la legislación estatal, en este caso, la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima y adicionar lo concerniente a las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, así como que ninguna persona realice actos discriminatorios en las ofertas laborales.

Lo anterior es así, ya que, como bien lo argumentan los iniciadores, resulta discriminatorio establecer límites o topes de edad para acceder a un determinado empleo, ya que la edad no es garantía de que la persona cuente con las capacidades que requiere el empleo; motivo por el cual coincidimos en que lo que se debe ponderar en este caso es la experiencia adquirida para acceder al empleo que se oferta, ya que a través de ello se podrá elegir a las personas de una forma más objetiva, sin estereotipos de edad, sino bajo criterios de capacidad y experiencia.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con Proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO. Se **reforma** el artículo 3°; párrafo primero del artículo 4°; la fracción V del artículo 10 y la fracción I del artículo 12, asimismo, se **adiciona** un párrafo tercero al artículo 4°, todos de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 3°.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos Estatales y Municipales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, **laboral,** cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades en la eliminación de dichos obstáculos.

Articulo 4°.- Toda autoridad, órgano público estatal o municipal y servidor público que actúe o se desempeñe en el Estado, con independencia de la esfera pública a

que pertenezca, deberá abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias por acción u omisión y deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, **laboral,** cultural y social del país.

. . . .

Ninguna persona física o moral podrá establecer actos discriminatorios como estereotipos sexistas o rangos de edad, en las convocatorias de ofertas laborales.

Artículo 10. . . .

I a la IV. . . .

V. Restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el empleo, especialmente por razón de género, edad, estado civil **o por estereotipos sexistas**;

VI a la XIX. . . .

Artículo 12. . . .

I.- Impedir el acceso al empleo **con base en rangos de edad o estereotipos sexistas, así como** la permanencia en el mismo, en igualdad de condiciones, salvo en los casos expresamente determinados por la ley;

II. a la VII. . . .

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M E N T E
Colima, Colima; 13 de febrero de 2017

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo Dip. Joel Padilla Peña
Secretario Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por la afirmativa.

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith, Velázquez, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. Mesina Reyes, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 21 veintiún votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a cinco iniciativas con proyecto de decreto relativa a reformar u adicionar, diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene el uso de la palabra la Diputada Martha Meza, nuestro compañero Héctor Magaña Lara.

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Dictamen numero 87 elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales……. Con el permiso Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra el Diputado Héctor Magaña Lara, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputado.…….DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 87 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A CINCO INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO

DE DECRETO, RELATIVAS A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, cinco iniciativas de ley con proyecto de decreto, relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima; de conformidad a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Que la Diputada Juana Andrés Rivera y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 17 de octubre de 2016, presentaron ante esta asamblea legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar la denominación del Capítulo IV, del Título Segundo y Adicionar el artículo 152 Bis del Código Penal para el Estado de Colima.

Que mediante oficio número DPL/769/016, de fecha 17de octubre 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2.- Que el Diputado Octavio Tintos Trujillo, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 10 de noviembre de 2016, presentaron ante esta asamblea legislativa, la Iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar las fracciones III y IV del artículo 134; y adicionar las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 134; y el artículo 135 Bis, todos del Código Penal para el Estado de Colima.

Que mediante oficio número DPL/805/016, de fecha 10 de noviembre 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Que la Diputada Juana Andrés Rivera y demás Diputados integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 23 de enero de 2017, presentaron ante esta asamblea legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 216 del Código Penal para el Estado de Colima.

Que mediante oficio número DPL/899/017, de fecha 23de enero 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4.- Que la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista de México, con fecha 23 de enero de 2017, presentó ante esta asamblea legislativa, la Iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a adicionar un Capítulo V, denominado “Perturbación del Orden Pública” al Título Primero de la Sección Cuarta de Delitos Contra el Estado y el artículo 266 Bis al Código Penal para el Estado de Colima.

Que mediante oficio número DPL/917/017, de fecha 23 de enero 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5.- Que el Diputado Héctor Magaña Lara, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de los Partidos Únicos del Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, presentaron ante esta asamblea legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el artículo 183 en sus fracciones I, II, III, IV, V Y VI; 185 incisos a) y b), 186 párrafo primero, 187 párrafo primero, 188 párrafo primero y 188 bis párrafo primero, todos del Código Penal para el Estado de Colima.

Que mediante oficio número DPL/955/017, de fecha 23 de enero 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que suscribe, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A S I N I C I A T I V A S

I.- La iniciativa, presentada por la Diputada Juana Andrés Rivera, en la exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que:

> *“Es por ello, que este Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera inconcebible que el mobbing o acoso laboral no se encuentre regulado de manera específica en ningún ordenamiento normativo, puesto que dicha omisión legislativa ocasiona que las personas que se encuentran en estas situaciones o sus familiares sean incapaces de encontrar una solución a su problemática, puesto que no saben ante qué autoridad acudir para su protección. Máxime que dicho fenómeno se*

encuentra prohibido en diversos instrumentos internacionales, tales como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, y el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), de la Organización internacional del Trabajo (OIT)".

II.- La iniciativa, presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, en la exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que:

"Así pues, la presente iniciativa propone que el delito de lesiones y homicidio sean calificados:

- *Cuando exista retribución, entendiéndose por ésta cuando el agente comete el hecho por pago o prestación prometida o entregada;*
- *Cuando se cometa dolosamente en contra de miembros de las fuerzas armadas, servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública, procuración o administración de justicia, al ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas;*
- *Cuando dolosamente se cometan en perjuicio de periodistas o de empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo o en ejercicio de su actividad periodística;*
- *Cuando se cometa dolosamente y el sujeto pasivo haya sido periodista, miembro de las fuerzas armadas, servidor público integrante de las instituciones de Seguridad Pública, de procuración o administración de justicia, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del delito y éste se haya cometido con motivo de sus funciones;*
- *Cuando en el momento de la privación de la vida, o posterior a ello, se realice la decapitación, mutilación, quemaduras, descuartizamiento o se utilicen mensajes intimidatorios dirigidos a la población, autoridades o cualquier persona. O se deje uno o más mensajes que atenten contra la dignidad humana, por la exhibición de la causa de la muerte; y*
- *Cuando se cometa dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años de edad."*

III.- La iniciativa, presentada por la Diputada Juana Andrés Rivera, en la exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que:

"El objeto de la iniciativa es crear un tipo penal especial que sancione a aquel familiar que tenga la obligación de prestar cuidados y alimentos a un adulto en plenitud y, que sin sobrevenir ninguna causa de excepción, omita cumplir con su obligación y ello ponga en peligro la vida, salud o integridad del adulto en plenitud".

IV.- La iniciativa, presentada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en la exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que:

"Propone adicionar un Capítulo V, denominado "Perturbación del orden Público" al Título Primero de la Sección Cuarta de Delitos Contra el Estado, y se adiciona el artículo 266 bis al Código Penal para el Estado de Colima".

V.- La iniciativa, presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, en la exposición de motivos que la sustenta, señala esencialmente que:

"Esta iniciativa, tendiente a endurecer las penas que están establecidas en el Código Penal para el Estado de Colima para el delito de robo, a efecto de reducir la criminalidad

en nuestro estado, requerimos no solo de endurecimiento de penas, sino también de acciones comprometidas, planes institucionales de prevención del delito, entre otras muchas actividades que nos corresponden a todos, sin embargo, debemos buscar desalentar al ladrón, con penas acordes a la afectación que producen a quien le despojan de su patrimonio".

VI.- Los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que preceden, ello mediante oficios DJ/051/017, DJ/069/016, DJ/078/017, DJ/060/017, DJ/076/017 de fechas 7 y 9 de febrero de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

El Director de Consultoría y Normatividad de la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio técnico mediante oficio DSN/16/2016 con fecha de recibido 29 de noviembre de 2016, en el cual refiere que las iniciativas sujetas a análisis no involucran costo alguno para su implementación, y que las mismas si muestran congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en su eje transversal denominado Colima competitiva, en su objetivo de generar los apoyos a los trabajadores que les brinden mayor seguridad en sus empleos, les facilite la movilidad y les brinden oportunidades de crecimiento y en su línea de acción de avanzar la armonización de leyes y ordenamientos que velen por el bienestar y seguridad de los trabajadores.

Así mismo se solicito al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la emisión del criterio técnico jurídico respecto de las iniciativas señaladas en los antecedentes del presente proyecto, ello mediante oficios DJ/070/017, DJ/068/017, DJ/079/17, DJ/061/017 y DJ/077/017.

VII.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 13 de febrero de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Gral. Francisco J. Múgica"*, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que con fundamento a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer respecto a la expedición o reformas que se refieran al Código Penal. En tal virtud, la presente

propuesta de reforma, es materia de estudio de esta Comisión que dictamina.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las iniciativas descritas en los antecedentes del presente dictamen, esta Comisión acuerda dictaminarlas en un mismo documento, puesto que las mismas son concurrentes al proponer reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

a).- En lo que respecta a la iniciativa presentada por la **Diputada Juana Andrés Rivera**:

Tiene como propósito regular en el Código Penal para el Estado de Colima, lo relativo a incluir en el delito de Hostigamiento Sexual el Acoso Laboral.

Que una vez realizado el estudio y análisis respectivo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto antes mencionada, esta Comisión dictaminadora considera su procedencia bajo los siguientes argumentos:
Como antecedente es de importancia mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la tesis Aislada 1a. CCL/2014 (10a.), de la Decima Época, emitida por la primera Sala por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 8, Tomo I, Página: 138, de fecha Julio de 2014, publicada el viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación, en materia Constitucional, cuyo rubro y texto son:
ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE. *La persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta denigrante. Al respecto, se parte de la base de que la verificación de ese tipo de comportamiento genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee una serie de soluciones o alternativas legales para demandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en diferentes acciones que la ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo a que se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley General de Víctimas, según lo que el afectado pretenda obtener. Así, por ejemplo, si pretende la rescisión del contrato por causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral (mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía laboral; si, por otro lado, sufre una agresión que pueda considerarse como delito, tendrá la penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso,*

sancione a sus agresores; asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la civil, si demanda una indemnización por los daños sufridos por esa conducta; de ahí que cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá sujetarse una vez que opte por alguna de ellas.

Bajo esta premisa, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, determina la vialidad de la iniciativa en estudio, en razón de que estos lineamientos los estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de resolver un acoso laboral, en el que la víctima no acredito en la vía ordinaria civil las conductas que configuran el acoso laboral y ante la insuficiencia probatoria para acreditar dicha conducta, considerando necesario su tipificación puesto que dicho tema no se encuentra normalizado en ningún ordenamiento legal de esta entidad, y con su regulación se estará protegiendo a las personas víctimas de este delito.

Finalmente con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión considera necesario armonizar la denominación del delito de Hostigamiento Sexual y Acoso Laboral, en el artículo 119, por técnica legislativa y por certeza jurídica.

b).- En lo que respecta a la iniciativa presentada por el **Diputado Octavio Tintos Trujillo**:

Tiene como propósito, establecer en el Código Penal del Estado, nuevos supuestos de agravantes para encuadrar el delito de homicidio y lesiones calificadas incrementando las penas impuestas, lo anterior en función de los últimos acontecimientos ilícitos que se han suscitado en los últimos años en la entidad.

Que concluido el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes argumentos.

En este contexto, la iniciativa en estudio busca que el delito de lesiones y homicidio sean calificados, en los siguientes casos:

a) Cuando exista retribución, entendiéndose por ésta cuando el agente comete el hecho por pago o prestación prometida o entregada;
b) Cuando se cometa dolosamente en contra de miembros de las fuerzas armadas, servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública, procuración o administración de justicia, al ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas;
c) Cuando dolosamente se cometan en perjuicio de periodistas o de empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo o en ejercicio de su actividad periodística;

d) Cuando se cometa dolosamente y el sujeto pasivo haya sido periodista, miembro de las fuerzas armadas, servidor público integrante de las instituciones de Seguridad Pública, de procuración o administración de justicia, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del delito y éste se haya cometido con motivo de sus funciones;
e) Cuando en el momento de la privación de la vida, o posterior a ello, se realice la decapitación, mutilación, quemaduras, descuartizamiento o se utilicen mensajes intimidatorios dirigidos a la población, autoridades o cualquier persona. O se deje uno o más mensajes que atenten contra la dignidad humana, por la exhibición de la causa de la muerte; y
f) Cuando se cometa dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años de edad."

Así mismo se incorpore un artículo que haga frente a la actual situación en cómo se están perpetrando los delitos de homicidio en el Estado, es decir cuando los delitos de homicidio o lesiones se cometan en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y que pudieren resultar heridas o muertas, se aumentarán las sanciones correspondientes hasta en cinco años la prisión y la multa hasta en cien unidades de medida y actualización.

En comienzo, para quienes integramos esta comisión dictaminadora, sabemos la problemática que nos aqueja en el tema de seguridad pública en los últimos años, como antecedente según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Colima durante el mes de noviembre del año 2016 repuntó el número de homicidios dolosos en esta entidad, que por décimo mes consecutivo se mantiene en el primer lugar nacional en la tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes. Conforme el reporte dado a conocer, en el penúltimo mes del año se registraron 55 homicidios en la entidad, cantidad similar a la de marzo, sólo superada por la de abril, cuando ocurrieron 74, mientras que en octubre habían sido 44 casos.

En suma, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 se contabilizaron 533 actos de privación de la vida en Colima, la cifra más alta en el registro disponible de las dos últimas décadas, casi el doble de los 287 perpetrados en 2012, que hasta entonces era considerado el año más violento. En los primeros 11 meses de 2016, Colima registra una tasa de 72.4 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, casi cinco veces más que el promedio nacional, que es de 15.4.

En este contexto, esta Comisión dictaminador, coincide con los argumentos vertidos por los iniciadores en el sentido de legislar buscando frenar el delito de homicidio e inhibir las prácticas brutales, denigrantes y de miedo que actualmente utilizan los delincuentes para perpetrar dicho delito; que se lucre con el homicidio de personas; así como proteger a los miembros de nuestras instituciones de seguridad, a nuestros niños y a los periodistas en el estado.

En este sentido, los integrantes de esta Comisión, estima conveniente establecer en el Código Penal del Estado, nuevos supuestos de agravantes para encuadrar el delito de homicidio y lesiones calificadas, lo anterior a partir de los hechos delictivos que han estado suscitándose actualmente en la Entidad. Supuestos que van encaminados a hacer frente a la delincuencia en el estado, específicamente en lo que respecta a los homicidios, incrementando las penas impuestas a los delincuentes que cometan dicho ilícito y que encuadren en los nuevos supuestos de agravantes.

Finalmente creemos que con la aprobación del presente proyecto de dictamen es primordial accionar, legislando para hacer frente a los problemas de delincuencia actuales en la entidad, en específico para combatir la inseguridad con la que se vive a diario, y es en función de lo anterior que esta Comisión dictaminadora determina la viabilidad de la propuesta en todos sus términos.

c).- En lo que respecta a la iniciativa presentada por la **Diputada Juana Andrés Rivera**:

Tiene como propósito adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 216 del Código Penal, a efecto de regular en el delito de omisión de auxilio, el supuesto de que al familiar que omita auxiliar a un adulto en plenitud estando obligado legalmente de prestarle cuidados y alimentos, y que con motivo de ello ponga en peligro su vida, salud o integridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa por un importe equivalente de cien a trescientos días de salario mínimo, así mismo si se sobreviene la muerte de dicho adulto en plenitud, se impondrá al familiar la pena de prisión y la multa antes citada.

Que concluido el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes argumentos.

Como bien lo señala el iniciador, la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado, en su Capitulo “De los Deberes de la Familia” dispone que la familia del adulto en plenitud deberá cumplir su función social de manera constante y permanente, debiendo velar por ellos, responsabilizándose de proporcionarle lo necesario para su atención.

Por otro lado nuestra ley sustantiva civil vigente en el Capítulo II, denominado “De los alimentos”, señala:

“ART. 304.- *Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado.*

ART. 308.- *Los alimentos comprenden:*

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, incluyendo la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II.- Respecto de los menores y mayores de 18 hasta los 25 años de edad, los alimentos comprenderán además, los gastos para su educación y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;

III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo, y

IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.
ART. 309.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos.
ART. 310.- El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir los alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro, y cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación".

De lo anterior se desprende que las disposiciones civiles ya regulan el derecho de los adultos en plenitud a percibir alimentos, los cuales se garantizarán en los términos previstos en el Código Civil vigente en el Estado, esto es, así como existe la obligación de los padres para con los hijos de proporcionar alimentos, también existe de los hijos para con los padres, máxime si se encuentran en una situación vulnerable, sin ingresos o bienes que les permitan darse una vida digna.

Por otra parte se resalta que artículo 216 de la ley sustantiva, tipifica la omisión de auxilio a una persona cuya vida, salud, integridad y libertad sexual se encuentre en peligro o al que no estando en condiciones de llevarlo a cabo, no dé aviso de inmediato a la autoridad, pudiera considerarse ya incluidas a los adultos en plenitud, no lo es así, ya que el mismo artículo dispone que el auxilio debe ser dentro de lo posible y razonable, circunstancia que no es acorde con los adultos en plenitud, ya que como se dijo en párrafos anteriores, es un obligación de la familia de éstos prestarles los deberes de cuidado y alimentos, en términos de las leyes de la materia, no incluyendo a los adultos en plenitud, de ahí se desprende a necesidad de regular el delito de omisión de auxilio en específico a los adultos mayores.

Finalmente con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión dictaminadora por técnica legislativa considera necesario realizar las adecuaciones necesarias para otorgar certeza jurídica a dicho precepto, determinando su procedencia por los argumentos antes vertidos.

d).- En lo que respecta a la iniciativa presentada por la **Diputada Martha Alicia Meza Oregón,** tiene como objeto:

Adicionar un Capitulo V, denominado "Perturbación del Orden Público", al Título Primero de la Sección Cuarta de Delitos contra el Estado, y se adiciona el artículo 266 Bis al Código Penal.

Que concluido el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes argumentos.

La perturbación del orden público, tiene los siguientes ejes:
I.Con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; y
II. A quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido.

Como se desprende de los argumentos vertidos por los iniciadores, en tiempos recientes se ha apreciado la necesidad de sancionar a quienes perturban el orden público, a través de afirmaciones falsas referentes a la existencia de situaciones como la colocación de una bomba o explosivo, la realización de ataques con armas de fuego u otras similares, mismas que causan alarma, desasosiego, pánico y movilizaciones de personas de manera descontrolada, en virtud del tenor de que puedan ser víctimas de un atentado violento que ponga en peligro sus vidas o su integridad física.

Es ineludible responder jurídicamente ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos que pretenden deliberadamente perturbar el orden público mediante la emisión de afirmaciones falsas por diversos canales, incluyendo los medios de comunicación, que prestan un importante servicio de difusión y un invaluable medio de información e intercambio de puntos de vista entre miles de personas, pero como cualquier instrumento o avance tecnológico, son susceptibles de ser empleados de manera mal intencional con el fin de causar un daño.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, estamos convencido de regular el delito denominado perturbación del orden público, puesto que no basta con demostrar la falsedad de la afirmación realizada y la intención de causar una afectación al orden público, si no que se requiere evitar la perturbación ocurrida en los hechos, con lo cual queda claro que no se sanciona la expresión realizada, si no el efectivo daño causado. Es obvio que se trata de un delito de daño y no solamente de peligro, con lo que se elimina cualquier riesgo de que se sancione a alguien por el solo hecho de expresarse, dado que será necesario para que se consume el delito, que realmente suceda la perturbación del orden que se trata de provocar.

e).- En lo que respecta a la iniciativa presentada por el **Diputado Héctor Magaña Lara,** tiene por objeto:

Aumentar las penas que están establecidas en el Código Penal para el Estado de Colima en lo concerniente en el delito de robo, en razón de constantes quejas de la ciudadanía que se ha visto afectado en su patrimonio.

Como antecedente cabe mencionar que según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cerraron con 996 robos de todo el año 2016 por cada cien mil habitantes, cifras que nos coloca en el lamentable sexto lugar nacional de incidencia de este delito, solo debajo de los estados de Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Morelos y Tabasco.

Es en ese sentido, este Poder Legislativo debe actuar de manera eficiente en la búsqueda de reformas a las disposiciones que aumenten las penas por el delito de robo, buscando desalentar al imputado con penas acordes a la afectación que producen a quien despojan de su patrimonio.

Que concluido el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad por los argumentos antes vertidos.

CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO.- Se **reforman** los artículos 119; las fracciones lll y lV del 134; la denominación del Capítulo IV del Título Segundo que comprende el 183 en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI; 185 incisos A) y B) párrafo primero; 187 párrafo primero, 188 párrafo primero y 188 bis párrafo primero. Se **adicionan** los artículos 134 fracciones V, Vl, Vll, Vlll, lX y X; 135 Bis; 152 Bis; los párrafos tercero y cuarto del 216; 236 Bis; el Capítulo V denominado “Perturbación del Orden Público” al Titulo Primero de la Sección Cuarta de Delitos Contra el Estado, que comprende el 266 bis al Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 119. . . .

Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, los siguientes; lesiones tipificado en las fracciones I, II y III del artículo 126, inducción o ayuda al suicidio tipificado en el artículo 143, estupro tipificado en el artículo 148, **hostigamiento sexual y acoso laboral tipificados en los**

artículos 152 y 152 BIS, rapto tipificado en el artículo 162, robo tipificado en los artículos 183, 184, 185 apartado a fracción III, 189, abigeato tipificado en el artículo 192 en los supuestos del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, despojo tipificado en el artículo 205, daños tipificado en el artículo 207, peligro de contagio tipificado en el artículo 212, ataque peligroso tipificado en el artículo 214, amenazas y coacción tipificado en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada tipificado en el artículo 220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221, calumnia tipificado en el artículo 222, discriminación tipificado en el artículo 223, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en los artículos 229, 230, 231, violación de correspondencia tipificado en el artículo 252, y en los que así lo prevea este Código.

ARTÍCULO 134. . . .

I. y II. ...

III. Con ventaja, cuando el sujeto activo no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado por el ofendido;

IV. Con traición, consistente en violar la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o la tácita que ésta debía esperar en razón del parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra circunstancia que inspire confianza;

V. Cuando exista retribución, entendiéndose por ésta cuando el agente comete el hecho por pago o prestación prometida o entregada;

VI. Cuando se cometa dolosamente en contra de miembros de las fuerzas armadas, servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública, procuración o administración de justicia, al ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas;

VII. Cuando dolosamente se cometan en perjuicio de periodistas o de empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo o en ejercicio de su actividad periodística;

VIII. Cuando se cometa dolosamente y el sujeto pasivo haya sido periodista, miembro de las fuerzas armadas, servidor público integrante de las instituciones de Seguridad Pública, de procuración o administración de justicia, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del delito y éste se haya cometido con motivo de sus funciones;

IX. Cuando en el momento de la privación de la vida, o posterior a ello, se realice la decapitación, mutilación, quemaduras, descuartizamiento o se

utilicen mensajes intimidatorios dirigidos a la población, autoridades o cualquier persona. O se deje uno o más mensajes que atenten contra la dignidad humana, por la exhibición de la causa de la muerte; o

X. Cuando se cometa dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años de edad.

Artículo 135 BIS.- Cuando los delitos de homicidio o lesiones se cometan en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y que pudieren resultar heridas o muertas, se aumentarán las sanciones correspondientes hasta en cinco años la pena de prisión, y la multa hasta en cien unidades de medida y actualización.

CAPÍTULO IV
HOSTIGAMIENTO SEXUAL **Y ACOSO LABORAL**

ARTÍCULO 152 BIS. **Se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización, al que dentro del espacio u ámbito laboral de forma persistente infunda miedo, intimidación o angustia a un trabajador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, causando perjuicio laboral, o induzca a la renuncia del mismo u ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral de la víctima.**

Sin ser una enumeración restrictiva, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

I. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del trabajador;

II. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre;

III. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad del trabajador;

IV. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia, mediante la descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario y cualquier otra forma de producir desmotivación laboral, y

V. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador, como la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

En caso de que el hostigador sea un servidor público además de la pena mencionada se le destituirá de su cargo, y se le inhabilitará para ocupar otro de carácter público.

ARTÍCULO 183. . . .

….

….

….

I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta unidades de medida y actualización, se impondrán de **uno a dos años** de prisión y multa de treinta a sesenta unidades de medida y actualización;

II. Cuando el valor de lo robado exceda de treinta pero no de noventa unidades de medida y actualización, se impondrán de **dos a cuatro** años de prisión y multa de cuarenta a cien unidades de medida y actualización;

III. Cuando el valor de lo robado exceda de noventa pero no de cuatrocientas unidades de medida y actualización, se impondrán de **tres a cinco** años de prisión y multa de noventa a cuatrocientas unidades de medida y actualización;

IV. Cuando el valor de lo robado exceda de cuatrocientas pero no de dos mil unidades de medida y actualización, se impondrán de **tres a siete** años de prisión y multa de cuatrocientas a mil quinientas unidades de medida y actualización;

V. Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil unidades de medida y actualización, se impondrán de **tres a nueve** años de prisión y multa de mil quinientas unidades de medida y actualización; y

VI. Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de **dos a seis** años de prisión y multa de cincuenta a ciento veinticinco unidades de medida y actualización.

ARTÍCULO 185. . . .

A) Se impondrán de **tres a diez** años de prisión y multa de uno a tres veces el valor de lo robado:
   I a la V. . . .
B) Se impondrán de **seis a quince** años de prisión y multa de uno a tres veces el valor de lo robado:
   I a la IX. . . .

ARTÍCULO 186. Al que se apodere de un vehículo de motor, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá de **seis a veinte** años de prisión y multa por un importe equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y actualización.

. . . .

ARTÍCULO 187. Se equipara al delito de robo y se impondrá de **seis a veinte** años de prisión y multa por un importe al equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y actualización, al que teniendo conocimiento y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

I a la IX. . . .

. . . .

ARTÍCULO 188 BIS.- Al que se apodere ilegalmente de implementos agropecuarios, maquinaria y equipo agrícolas, productos o subproductos de las actividades agropecuarias, o algún otro bien material del sector productivo del medio rural, o de la industria rural; se le impondrá de **seis a quince** años de prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a ciento cincuenta unidades de medida y actualización.

. . . .

ARTÍCULO 216. . . .

. . . .

Asimismo, al familiar que omita auxiliar a un adulto en plenitud estando obligado legalmente de prestarle cuidados y alimentos, y que con motivo de ello ponga en peligro su vida, salud o integridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa por un importe equivalente de cien a trescientos días de salario mínimo.

Si con motivo de la omisión de auxilio dispuesta en el párrafo anterior, sobreviene la muerte del adulto en plenitud, se impondrá al familiar la pena de prisión y la multa señalada en el párrafo tercero del presente artículo.

236 Bis.- Se equipara al abuso de autoridad y se sancionará con 5 días hasta 3 años de prisión, y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar condicione la inscripción, acceso a la escuela, aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad de trato a los alumnos, al pago de contraprestación o cuota alguna.

CAPITULO V
PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

ARTÍCUIO 266 bis.- Comete el delito de perturbación del orden público y se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y una multa por un importe equivalente de cien a trescientas unidades de medida y actualización, a:

I. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; y

II. Quién con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producido.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M E N T E
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo
Secretario

Dip. Joel Padilla Peña
Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevlla, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith, Velázquez, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. Mesina Reyes, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 22 veintidós votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar, diversas disposiciones a la Ley de Fomento y a la Lectura del Libro. Tiene la palabra nuestro compañero Diputado Adrián Orozco Neri.

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados, con el permiso de las personas que todavía nos acompañan. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado José Adrián Orozco Neri. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra a nuestro compañero Diputado José Adrián Orozco Neri, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado Presidente. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 24 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Y AL LIBRO.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro; de conformidad a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- El Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, actualmente integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 31 de enero del año 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro.

2.- Que mediante oficio No. DPL/956/017, de fecha 31 de enero del año 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron la iniciativa en materia, a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente:

"Mediante decreto 406 esta Soberanía expidió la Ley Estatal para el Fomento a Ia Lectura y al Libro, la cual fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" P.O.42, 02 septiembre 2006.

Dicha Ley en su momento se acordó que tuviera como objeto organizar los esfuerzos del Gobierno Estatal, para fomentar la lectura entre los colimenses y dotar al gobierno de los instrumentos normativos necesarios, para aprovechar las políticas federales en la materia y alentar la participación de los Gobiernos Municipales.

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de Ios seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos, frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que, por lo general, comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo.

Leer es un hábito que se ha fomentado desde hace muchos siglos, y a pesar de que los tiempos han evolucionado y la tecnología es parte del diario vivir, no se puede permitir que esta costumbre o hábito llegue a desaparecer. El hombre, como ser social, busca información constantemente sobre los aconteceres del mundo y los avances tecnológicos sobre cada sistema, y para que esta actividad se desarrolle sin problemas, hay que fomentar la lectura, para brindar seguridad y permitirle estar preparado y poder conocer sobre lo que acontece en su localidad o fuera de ella.

A nivel mundial la lectura se relaciona con la cultura. La lndia es el país que más horas ocupa para leer, estando en un promedio de 40 minutos a 10 horas aproximadamente en la semana, Tailandia, China y Filipinas son países que dedican un aproximado de 8 horas semanales al hábito de la lectura, y finalmente, Egipto está entre los cinco países más lectores del mundo, en el que sus habitantes dedican de 6 a 7 horas a la semana a la lectura. En lo referente a América Latina se mencionan a países como Argentina, que está ubicado en el país número 17 y México en el número 24, que dedican la mitad del tiempo de la lndia a leer.

Es bien conocido que en nuestro país los índices de lectura están muy por debajo de lo registrado por otras naciones. El promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros por año, mientras que en países como España, esa cifra llega a 7.5 libros' los alemanes leen en promedio 12 libros anualmente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizó un índice de lectura, en el cual de una lista de 108 naciones, México ocupaba el penúltimo lugar.

Bajo esas proyecciones y en el entendido de que la lectura es considerada desde la antigüedad como fuente de información y comprensión, esta práctica ha conducido al desarrollo de las culturas permitiendo evolucionar de manera circunstancial hacia un futuro mejor, tanto en lo económico, político y social.

Es por ello que los suscritos iniciadores consideramos un imperativo sustancial que el Estado mejore sus políticas públicas en relación al fomento a la lectura y al libro, ya que el ordenamiento vigente sobre la materia data de 2006 y a la fecha han pasado 11 años sin que dicho ordenamiento sea objeto de reforma alguna.

Así, el objeto de la presente iniciativa es fortalecer la política en materia de fomento a la lectura y al libro en la entidad, con un enfoque a la política nacional para efectos de generar condiciones de coordinación en la implementación de políticas nacionales en el Estado. Motivo por el cual se fortalecen las facultades del Gobierno del Estado en la materia y serían las Secretarías de Educación y de Cultura las responsables de abanderar las políticas estatales en materia de fomento a lectura y al libro; teniendo como única finalidad que se mejoren los hábitos de la lectura y el libro en la entidad y se fortalezca la cultura de los colimenses."

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/074/017 lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

III.- Leída y analizada las iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Gral. Francisco J. Múgica"*, con fecha 13 de febrero de 2017 a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis del documento que nos ocupa, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos de Acuerdo, consideramos su viabilidad en los siguientes términos:

Tendríamos que analizar primeramente lo que se entiende como fomento de la lectura, ya que es una tarea distinta de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela, y que necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros. Por ello, esta tarea apoya la labor de padres, profesores y bibliotecarios, así como la coordinación de las distintas autoridades para así apoyar políticas y programas que permitan el aumento de interés por parte de los colimenses hacia con la lectura.

Por lo que coincidimos cabalmente con los iniciadores, es en que la propuesta de ley debe ser de interés social y de cumplimiento en todo el territorio del Estado,

para así dar auxilio, propiciar, formular y ejecutar diversos programas y planes de fomento a la lectura y al libro.

Asimismo, se pretende estimular a los escritores locales por medio de las dependencias del Gobierno del Estado, alentando a dicha producción, capacitación y formación de profesionales en el tema de la escritura y la lectura para con dichas reformas a la Ley, también se impulse no solo la lectura si no también el libro, como ya se menciono con estrategias estatales y solicitud de apoyo federal.

Es por ello que en esta Comisión dictaminadora creemos que es de suma importancia el crecimiento de conocimientos e información por parte de los colimenses y sabemos que se requiere aun más apoyo para los diversos actores de la cadena del libro y con ello situar a la lectura y al libro como elementos fundamentales para el desarrollo de la población, su educación, su acercamiento a las expresiones de la cultura y el desarrollo de una razón crítica, diseñando programas y estrategias para la formación de lectores, y de vinculación de la educación formal con el fomento a la lectura. Asimismo, instruye reforzar el papel de las bibliotecas públicas como centros de lectura, y ampliar el alcance de la capacitación bibliotecaria en fomento a la lectura.

TERCERO.- Es aplicable y sirve como base jurídica, para sustentar el presente documento, citar lo siguiente.

En la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, menciona en sus artículos 7°, 8° y 9°, que las autoridades deberán impulsar y promover los temas relativos al fomento a la lectura y el libro, que a la letra mencionan:

> ***Artículo 7.-*** *Las autoridades responsables emplearán tiempos oficiales y públicos que corresponden al Estado en los medios de comunicación para fomentar el libro y la lectura.*
>
> ***Artículo 8.-*** *Las autoridades responsables, de manera concurrente o separada, deberán impulsar la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación del libro mexicano y de las coediciones mexicanas, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad, asegurando su presencia nacional e internacional.*
>
> ***Artículo 9.-*** *Es obligación de las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley, de manera concurrente o separada, promover programas de capacitación y desarrollo profesional dirigidos a los encargados de instrumentar las acciones de fomento a la lectura y a la cultura escrita.*

Es por lo anterior que se debe fortalecer el impulso a la lectura y el libro en nuestro Estado, y poner al alcance de las colimenses infraestructuras y acercamientos hacia el fomento a la Educación y a los valores.

Finalmente con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión estima necesario realizar diversas adecuaciones por técnica legislativa y certeza jurídica.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO.- Se reforman los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°; 7°; el párrafo primero del artículo 11; el párrafo primero del artículo 12; la fracción I del artículo 17; y el párrafo primero del artículo 18. Asimismo, se adiciona un párrafo segundo, y las fracciones I, II, III y IV del artículo 1°; se adiciona las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artículo 3°; el artículo 3° Bis, todos a la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- La Ley **es de orden público, de interés social, de observancia en todo el territorio del Estado, y** tiene por objeto organizar los esfuerzos del Gobierno Estatal, para fomentar la lectura entre los colimenses y dotar al gobierno de los instrumentos normativos necesarios, para aprovechar las políticas federales en la materia y alentar la participación de los Gobiernos Municipales.

Igualmente, tiene como objetivos específicos, los siguientes:

I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura;
II. Formular y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas;
III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro; y
IV. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio estatal, para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector.

Artículo 2°.- El fomento a la lectura y el libro se establece en esta Ley en el marco de las garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro en toda la población; ya que esta última es un elemento fundamental para el progreso individual y colectivo' y que el grado de desarrollo de una sociedad, puede medirse por el número y calidad de sus lectores, así como por la infraestructura que sostiene a la lectura.

Artículo 3°.- El Gobierno Estatal, **a través de sus dependencias**, mediante las disposiciones de esta Ley, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Fomentar el hábito de la lectura entre los colimenses;
II. Buscar elevar los niveles de lectura de libros;
III. Alentar la producción local de libros con especial dedicación a las obras de autores locales;
IV. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro y promotores de la lectura;

V. Impulsar la creación de un Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, y poner en práctica las políticas y estrategias contenidas en éste;
VI. Fomentar el acceso al libro y la lectura, promoviendo que se formen lectores cuya comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursan, en coordinación con las autoridades educativas locales;
VII. Garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como de los acervos para bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos indispensables en la formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal, en coordinación con las autoridades educativas locales;
VIII. Diseñar políticas para incorporar, en la formación inicial y permanente de maestros, directivos, bibliotecarios y equipos técnicos, contenidos relativos al fomento a la lectura y la adquisición de competencias comunicativas que coadyuven a la formación de lectores, en colaboración con las autoridades educativas locales;
IX. Considerar la opinión de las autoridades educativas locales, de los maestros y de los diversos sectores sociales para el diseño de políticas de fomento a la lectura y el libro;
X. Promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas públicas, en colaboración con las autoridades educativas locales, las instituciones de educación superior e investigación, la iniciativa privada y otros actores interesados;
XI. Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la edición, la producción, promoción y difusión del libro y la lectura, en colaboración con autoridades educativas, instituciones de educación media superior y superior y la iniciativa privada;
XII. Promover, conjuntamente con la iniciativa privada, acciones que estimulen la formación de lectores;
XIII. Estimular y facilitar la participación de la sociedad civil en e! desarrollo de acciones que promuevan la formación de lectores entre la población abierta; y
XIV. Facilitar a la población interesada el acceso a los libros, participando activamente en las políticas federales relativas a su distribución y circulación.

Artículo 3° BIS.- Las Secretarías de Cultura y de Educación, son las instancias responsables de incentivar y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, con base en los objetivos, estrategias y prioridades de la política estatal de fomento a la lectura y el libro.

Artículo 5°.- El Gobierno Estatal intervendrá activamente, de acuerdo a su ámbito de responsabilidad, en las políticas destinadas al fomento a la lectura **y el libro**, diseñadas y aplicadas por el Gobierno Federal.

Artículo 6°.- El Gobierno Estatal promoverá la activa participación de los Gobiernos Municipales en las tareas establecidas por esta Ley. De igual forma,

estimulará en ellos la creación de comisiones municipales de fomento a la lectura **y al libro**, involucrándolas en el diseño y aplicación de estrategias estatales.

Artículo 7°.- El Gobierno Estatal promoverá la participación de las escuelas públicas de todos los niveles establecidas en la entidad, así como de los colegios e instituciones educativas privadas, en la celebración de actividades relacionadas con el fomento a la lectura **y al libro.**

Artículo 11.- La Comisión estará integrada por el Gobernador del Estado, en calidad de Presidente, por los Secretarios de Cultura, en su calidad de Vicepresidente; de Educación y de Planeación **y Finanzas**, en su calidad de vocales, y por un Secretario Técnico designado por el Gobernador del Estado.
….
….
….

Artículo 12.- La Comisión estará obligada a sesionar por lo menos dos veces al año. Una de esas sesiones será para dar a conocer las actividades previstas para el año en curso, de acuerdo al **Programa de Fomento para la Lectura y el Libro**, y la otra para analizar las actividades realizadas.
….
….
Artículo 17.-…
l. Elaborar el **Programa de Fomento para la Lectura y el Libro;**
ll a la XXll. ...

Artículo 18.- El Gobierno del Estado, con la asesoría y participación de la Comisión, así como de las Secretarías de Cultura, de Educación y de Planeación **y Finanzas**, estimulará, de acuerdo a la disponibilidad que le permitan sus finanzas, las iniciativas individuales o colectivas de creación, edición, publicación y distribución de libros. Los estímulos podrán consistir en los siguientes:
I a VIII. . . .

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, 13 DE FEBRERO DE 2017
COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIP. JOEL PADILLA PEÑA
PRESIDENTE

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO
SECRETARIO

DIP. JOSE ADRIÁN OROZCO NERI
SECRETARIO

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la negativa.

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. Andrés Rivera, a favor.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 22 veintidós votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos negativos al documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa con proyecto

de decreto relativa a reformar y adicionar, diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima, y a la Ley para la Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar, Tiene la palabra el Diputado Eusebio Mesina.

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputado con el permiso de los compañeros Diputados, medios de comunicación y demás que nos acompañan. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por nuestro compañero Diputado Eusebio Mesina Reyes. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra a nuestro compañero Diputado Eusebio Mesina Reyes, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputado. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 92 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR EL ARTÍCULO 260; ADICIONAR LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 444, AMBOS

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XI, CON EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 8; UN PÁRRAFO TERCERO, CON EL CORRIMIENTO DEL SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 12; EL INCISO F) AL ARTÍCULO 20; UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 25; EL INCISO I) AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 25; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28; TODOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 260; adicionar la fracción lX al artículo 444, ambos del Código Civil para el Estado de Colima; y se adicionan la fracción XI, con el corrimiento de las subsecuentes, al artículo 8; un párrafo tercero, con el corrimiento del subsecuente al artículo 12; el inciso f) al artículo 20; un párrafo segundo a la fracción I del artículo 25; el inciso I) al párrafo segundo del artículo 25; un párrafo segundo al artículo 28; todos de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar; de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- El Diputado Federico Rangel Lozano, así como lo demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados Únicos de los Partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, todos ellos actualmente integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 23 de noviembre de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Colima y a la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar.

2.- Que mediante oficio número DPL/830/016, de fecha 23 de noviembre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N A L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- El Diputado Federico Rangel Lozano, en su exposición de motivos, señala textualmente que:

“Actualmente la desintegración de la familia ha traído nuevas enfermedades psicológicas, como el síndrome de alienación parental (SAP), que causa graves daños en el normal desarrollo y estructura de la personalidad de las niñas y niños.

El SAP, precisa, es un proceso familiar que surge en casos de divorcio conflictivo o incluso dentro del matrimonio, siendo una forma grave de maltrato o abuso infantil de tipo emocional, surgiendo un daño psicológico permanente que afecta el vínculo con el progenitor alienado.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) se produce en los hijos, cuando uno de los progenitores, mediante diversos factores, transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.

Esto es, la alienación parental es la manipulación por parte uno de los progenitores, para que el hijo o hija rechace al otro y destruir los vínculos que puedan tener, aunque también puede darse por parte de tíos, abuelos, una nueva pareja o personas que tengan relación con el núcleo familiar que tengan a su cuidado al menor.

Dicho síndrome produce trastornos psicológicos y sociológicos en el menor, que de acuerdo al grado de alienación, pueden manifestarse de diversa forma: Ansiedad, trastornos del sueño (el niño no puede dormir o duerme mucho) y de alimentación (puede comer poco o mucho), depresión crónica, problemas para relacionarse en ambientes psicológicos y sociales, trastornos de identidad e imagen, desesperación, sentimientos de culpa, sentimientos de aislamiento, comportamiento hostil y falta de organización, entre otras consecuencias que puede producir esta alienación.

Asimismo, el que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los oriente en contra del otro padre es un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, acontece en muchas separaciones o divorcios y constituye un medio de violencia hacia los menores, altera la percepción que los niños deben tener de sus padres y se vulnera su derecho de convivir con los mismos.

Por ello, lo iniciadores consideramos que es menester proteger la estabilidad emocional y el pleno desarrollo de la salud mental de las y los menores, con medidas de prevención de esa alteración y sus efectos, los cuales suelen ser irreversibles.

Se debe procurar que los menores no sufran en el conflicto que se crea por el proceso de separación de sus padres, ni mucho menos cuando uno de éstos, prácticamente, los obliga a posicionarse de su lado, manipulándolos en contra del otro, al grado de hacer que los hijos odien y rompan el vínculo filial, con el riesgo de causarles serias complicaciones para su vida futura.

En consecuencia, con el afán de salvaguardar el bienestar de los menores, a fin de que nuestra sociedad sea cada vez mejor, es menester educarlos, cuidarlos y protegerlos tanto en lo físico como en lo mental, ya que es un hecho que el futuro es de los niños, y debemos procurar que ellos lo hagan mejor, Los iniciadores consideramos necesario que esta conducta sea equiparada y reconocida explícitamente como una forma de violencia familiar en la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y en el Código Civil para el Estado de Colima pues vulnera notoriamente la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes y los expone a una ruptura injustificada de los lazos familiares provocada por la premeditación de uno de los padres.

Puesto que, tanto los órganos legislativos, como las autoridades judiciales, conciliatorias y de protección a la familia deben reconocer este problema y procurar porque no se vulnere el interés superior del menor en ninguna de sus actuaciones.

En virtud de que, la ausencia en los textos legales de este grave comportamiento, sólo genera impunidad y procedimientos familiares viciados, pero sobretodo, una violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Así pues, en la presente iniciativa se propone establecer en el Código Civil para el Estado de Colima que la realización de la alienación parental por uno de los cónyuges en contra del otro sea motivo de la pérdida de la patria potestad y de la custodia del menor.

Asimismo, se propone establecer en la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, medidas claras y contundentes para la prevención, sanción y erradicación de la alienación parental:

- *Se establece como una de las facultades y obligaciones del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia y sus Organismos Municipales el difundir las causas y efectos nocivos del síndrome de alienación parental en las niñas, niños y adolescentes; así como implementar las medidas necesarias para su detección y tratamiento;*

- *Se establece el deber de las autoridades de priorizar en todos los casos el ¡interés superior del menor en sus actuaciones, promoviendo e instrumentando protocolos de actuación en los casos en los que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres;*

- *Se establece que se comete violencia familiar el elemento de la familia que transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores; y*

- *Se señala que la alienación parental es cuando alguno de los padres transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.*

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las fracciones que anteceden, ello mediante oficio DJ/063/017 lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Asimismo, se solicito al Supremo Tribunal de justicia del estado, la emisión del criterio técnico jurídico respecto a la iniciativa señalada en las fracciones que anteceden, ello mediante oficio DJ/064/017.

III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 13 de febrero de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"General Francisco J. Mugica"*, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer y estudiar el presente Proyecto de Decreto, de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad bajo los siguientes términos.

Como lo discuten los iniciadores, en el estado de Colima, contamos con diversas normas que deben renovarse y avalar nuestras garantías humanas, fundamentándolas a nuestra justicia convencional; es así, que la comisión dictaminadora coincide con el iniciador en el fondo de su ocurso.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una expresión que fue acuñado por el profesor de psiquiatría Richard Gardner en 1985 para describir como un desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no exclusivamente, el padre y se niega a tener contacto con él.

Apoyado en las investigaciones de Gardner, el Perito psicólogo español José Manuel Aguilar define el Síndrome de Alienación Parental, como “un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.

Ahora bien esta comisión dictaminadora coincide a todas luces con el iniciador y en opinión propia sujetamos que: el ser humano es una unidad de sistemas auto-organizadores en su interdependencia, un agregado de emanaciones o compuesto de campos conectados a la conciencia, energía y materia de sistematización. Este conglomerado de campos de energía, se puede percibir en estados muy acrecentados de conciencia.

En este mismo orden de ideas, como es de saberse si aplicamos a nuestros niños manipulación en contra de uno de los progenitores, como efecto obtendrían el trastorno SAP, que consecuente implica enfermedades psicológicas aplicadas a su conciencia, mediante el cual daña gravemente el desarrollo y la estructura de la personalidad de los niños.

Por otro lado, esta comisión hace hincapié en considerar que el SAP, produce factores con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, y claramente debido a la naturaleza humana, es desquiciante que los niños crezcan con trastornos indebidos, por lo que el SAP afecta importantemente

su ansiedad, el trastorno del sueño y de alimentación en conjunto, depresión crónica, problemas para relacionarse en ambientes psicológicos y sociales, trastornos de identidad e imagen, desesperación, sentimientos de culpa, de aislamiento, comportamiento hostil y falta de organización, etc., pues los niños deben crecer con la madre y padre de manera normal, si en su defecto no los tuviere o estuvieren separados, estos deben educarlos de manera exacta sin trastornarlos, ni afectarles su conciencia, ya que el deber del progenitor es educarlos, cuidarlos y protegerlos tanto en lo físico como en lo mental, ya que es lógico que el futuro es de los niños, por lo que debemos procurar que ellos hagan mejor nuestra sociedad y nuestro estado.

TERCERO.- Finalmente, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, estamos seguros que con la aprobación del presente proyecto de dictamen, se dará un paso más, ya que la presente iniciativa propone establecer en el Código Civil para el Estado de Colima, la regulación de la alienación parental por uno de los cónyuges en contra del otro, que sea por motivo de la pérdida de la patria potestad y de la custodia del menor. También, se propone establecer en la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, medidas claras y contundentes para la prevención, sanción y erradicación de la alienación parental.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 260; se adiciona la fracción IX al artículo 444, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Art. 260.- El Juez en todo tiempo, podrá modificar la determinación a que se refiere el artículo anterior, atento a las nuevas circunstancias y lo dispuesto en los artículos 422, 423 y 444, fracciones lll y **IX.**

Artículo 444. . . .

I de la Vlll. . . .

IX.- Cuando se genere alienación parental por uno de los cónyuges en contra del otro.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan la fracción XI, con el corrimiento de las subsecuentes, al artículo 8; un párrafo tercero, con el corrimiento del subsecuente al artículo 12; el inciso f) al artículo 20; un párrafo segundo a la fracción I del artículo 25; el inciso i) al párrafo segundo del artículo 25; un párrafo segundo al

artículo 28; todos de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, para quedar como sigue:

Artículo 8. . . .

I a la X...

XI. Difundir las causas y efectos nocivos del síndrome de alienación parental en las niñas, niños y adolescentes; así como implementar las medidas necesarias para su detección y tratamiento;

XII a la XXII. . . .

Artículo 12. . . .

. . . .

En todos los casos deberá de priorizar el interés superior del menor en sus actuaciones, promoviendo e instrumentando protocolos de actuación en los casos en los que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres.

Artículo 20. . . .

. . . .

a) al e). . . .

f) Difundir las causas y efectos nocivos del síndrome de alienación parental en las niñas, niños y adolescentes; así como implementar las medidas necesarias para su detección y tratamiento.

Artículo 25. . . .

I. . . .

. . . .

También comete violencia familiar el elemento de la familia que transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

A) a la H). . . .

l) Alienación Parental: Es cuando alguno de los padres transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.

Artículo 28. . . .

Asimismo, deberán priorizar el interés superior del menor en sus actuaciones, promoviendo e instrumentando protocolos de actuación en los casos en los que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M EN T E
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo
Secretario

Dip. Joel Padilla Peña
Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Eusebio Mesina, a favor.
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 22 veintidós votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y Vivienda, correspondiente a dos iniciativas correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra nuestro compañero Diputado Octavio Tintos Trujillo.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, Integrantes de la Mesa Directiva, amigas, amigos Diputados, público que nos

acompaña, medios de comunicación. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por nuestro compañero Diputado Octavio Tintos Trujillo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra a nuestro compañero Diputado Octavio Tintos Trujillo, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 4 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A DOS INICIATIVAS, LA PRIMERA RELATIVA A REFORMAR LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, Y LA SEGUNDA, RELATIVA A REFORMAR LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente, dos Iniciativas con Proyecto de Decreto, la primera relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y la segunda, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; de conformidad a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Mediante oficio no. DPL/778/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a reformar la fracción ll del artículo 21 y el párrafo primero del artículo 131, de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

2.- Mediante oficio número DPL/831/016, de fecha 23 de noviembre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, relativa a reformar el inciso c), de la fracción ll, del artículo 45, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

3.- Es por ello que los integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A S I N I C I A T I V A S

I.- La iniciativa, presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que:

> *La Constitución Local, en su calidad de norma suprema en la entidad, sobre la materia, dispone en su artículo 87, inciso d), de la fracción V, lo siguiente:*
>
> *V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:*
>
> *d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;*
>
> *La referida disposición constitucional es clara al señalar que son los municipios quienes tienen la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, facultades que deben estar normadas por las leyes federales y estatales en la materia, como lo son la*

Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado y la propia Ley del Municipio Libre del Estado.

Continuando sobre esa misma línea de ideas, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado es el ordenamiento que regula la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población, así como los principios conforme a los cuales el Estado y los municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, y fijar las normas a que se sujetará la autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del suelo.

Asimismo, la Ley del Municipio Libre del Estado, en su artículo 45, fracción II, inciso c), dispone que es facultad del Ayuntamiento "Aprobar la zonificación y el plan de desarrollo municipal;" acciones que ha de llevar a cabo de conformidad a lo que le disponga la ley de materia, que en este caso es la Ley de Asentamientos Humanos.

Así, la regulación del suelo en el Estado ha de llevarse de manera coordinada entre los municipios y el Estado de conformidad a lo que dispone la citada Ley de Asentamientos Humanos, la cual dispone, entre otras cosas, que a través del programa de desarrollo urbano respectivo, se ordenará y regulará la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; así como para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, con objeto de mejorar la estructura urbana, proteger al ambiente, regular la propiedad en los centros de población y fijar las bases para ejecutar acciones, obras y servicios de infraestructura y equipamiento urbano.

Teniendo los municipios la facultad constitucional de regular los usos y destinos de las áreas y predios integrados en el programa de desarrollo urbano respectivo, definiendo en éstos las distintas zonificaciones en que se integre, como pueden ser, habitacional, industrial, de servicios, institucional, ecológica, entre otras.

Definidas las zonificaciones en cada programa de desarrollo urbano, los municipios tienen plenitud de atribuciones para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, otorgar licencias y permisos para construcciones en términos del uso autorizado del suelo en cada programa.

Vistas las facultades constitucionales y legales de los ayuntamientos para definir los usos y destinos de su suelo urbano o urbanizable, es del conocimiento de la gran mayoría de la población que éste ha venido cambiando de manera significativa, en atención al crecimiento de los centros de población, mutando de usos habitacionales a comerciales o de servicios, existiendo usos de suelo mixtos en una misma manzana o zona, rompiendo con el orden de éstos.

Un claro ejemplo que ha venido sucediendo es la autorización de vocación de uso de suelo para la instalación de casinos o de cualquier otra denominación similar, ya que dentro de los centros de población se han cambiado los usos de suelo habitacional para convertirlos en comercial o de servicios.

Sin embargo, el objetivo de la presente iniciativa va más allá de buscar un adecuado ordenamiento del suelo urbano, sino de prohibir determinados usos de suelo en nuestro Estado a través de la Ley de Asentamientos Humanos, que es el ordenamiento rector en la materia.

El objetivo de prohibir la autorización de dictámenes de vocación de uso de suelo para casinos o de cualquier otra denominación similar, es con el objetivo de evitar en nuestro Estado la instalación de comercios que no detonan el desarrollo económico y

comercial de la entidad, sino que afecta gravemente a la sociedad colimense, ya que es del dominio público que dichos giros generan el despilfarro de dinero de los ciudadanos lo que ocasiona que no cuenten con el recurso económico suficiente para gastar y/o invertir en los negocios de la zona. En virtud de que la naturaleza de dichos establecimientos es estéril por ser una actividad diseñada para extraer recursos de la economía a través de las apuestas y no para producir bienes y servicios.

En ese orden de ideas, los casinos o cualquiera que sea su denominación, son giros que generan otro problema social denominado jugadores problema, que llegan a convertirse en jugadores compulsivos, con una obsesión por el juego como parte de su vida diaria.

Los jugadores compulsivos presentan una incontrolable preocupación y urgencia por el juego, puede decirse que son adictos al juego; esto les genera graves problemas financieros debido a que ocurren a créditos que luego no pueden pagar y se declaran en bancarrota, lo que los lleva muchas veces a cometer ilícitos como robo, el fraude y la falsificación.

Así, los jugadores compulsivos generan un problema de salud pública para el Estado, puesto que desarrollan el padecimiento conocido como ludopatía, padecimiento que en muchos países es un problema epidemiológico; enfermedad entendida como todo aquel fracaso crónico y progresivo que tiene un sujeto para resistir los impulsos a jugar y en la aparición de una conducta de juego que compromete, rompe o lesiona los objetivos personales, familiares o profesionales del jugador.

Precisado lo anterior, resulta claro que existen elementos para reformar la Ley de Asentamientos Humanos del Estado y establecer en ésta la prohibición de usos y destinos de suelo para casinos o cualquiera que sea su denominación, siendo que son muchos los elementos negativos que su funcionamiento genera, como son afectaciones sociales, económicas, de seguridad y de salud pública.

Resulta importante mencionar que a través de la presente iniciativa en ningún momento se contraviene la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ya que lo que se está regulando no es la licencia o permiso de funcionamiento como casino o cualquier otra denominación similar que otorga la Secretaría de Gobernación con base en dicha Ley y su Reglamento, sino que se busca regular el uso y destino del suelo, así como lo dispone la Constitución Local, lo cual ya se ha precisado, éste debe definirse en la forma y términos que le señales las leyes.

II.- La iniciativa, presentada por el Diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, en la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que:

El pasado 25 de octubre del presente año el Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, presentaron en esta Tribuna una reforma por la cual solicitan se reforme la fracción ll del artículo 21, y el párrafo primero del artículo 131, ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Donde se expone que de conformidad con la Constitución Federal y la particular del Estado, los Municipios estarán facultados en los términos que las Leyes Federales y Estatales determinen, entre otras cosas, para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, otorgar licencias y permisos para construcciones en términos del uso autorizado del suelo.

Así, en el caso de la Constitución Local, los incisos d) y f) de la fracción V, del artículo 87 de ésta, disponen lo siguiente:

V. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

La iniciativa propuesta pretende reformar en su artículo 21 fracción segunda y 131 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima donde se exponen las atribuciones a los Ayuntamientos y que en la situación en comento se adiciona que la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su jurisdicción; que quede prohibidos para casinos o cualquiera que sea su denominación, para juegos con apuestas y sorteos;

Por ello y buscando la técnica legislativa como la armonización de la legislación propongo a esta Soberanía hacer lo propio en el la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, ya que comparto que los efectos sociales y económicos que genera la existencia de un giro comercial de este tipo es de dominio público y da pauta para que la delincuencia organizada se sirve de diversos medios para obtener recursos disfrazados de licitud, mediante el establecimiento, funcionamiento y operación de estos establecimientos que les proveen dinero "limpio", mismo que es utilizado para seguir con sus actividades ilícitas.

Dicha práctica se le conoce con el término de lavado de dinero proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo).

El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Así pues, los casinos, casas de apuestas, juegos de sorteos y similares, cualquiera que sea su denominación, son giros que usualmente son utilizados por la delincuencia organizada para realizar la práctica del lavado de dinero, en virtud de que por un lado los inversionistas podrían instalar y operar estos centros de apuestas con dinero de procedencia ilícita; y por otro lado, los jugadores podrían manejar dinero en efectivo en cuantiosas transacciones, que sería difícil de detectar por parte de las autoridades financieras del país.

Circunstancias que motivan al suscrito legislador para promover la presente iniciativa, e impulsar que en nuestro Estado no se permitan los usos de suelo para la instalación de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o cualquiera que sea su denominación, para lo cual es necesario reformar la Ley de Asentamientos Humanos del Estado y la Ley del Municipio Libre del Estado, a efecto de establecer en éstas, la prohibición de autorizar usos y destinos para la instalación de éstos establecimientos.

A mayor abundamiento, conscientes de que a la fecha existen en nuestro Estado diversos casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o cualquiera que sea su denominación, con la entrada en vigor de la presente reforma no se verían afectados, atendiendo al principio de la no retroactividad de la ley previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal.

Ello se propone así, porque los casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o cualquiera que sea su denominación, que existen en la actualidad, se entiende que han cumplido con todo lo que la ley les exigió y debemos garantizar esos derechos; sin embargo, una vez que por cualquier circunstancia pierdan o dejen de ser vigentes sus licencias de operación otorgadas por la autoridad federal competente, las autoridades municipales se ajustarán a lo que dispone esta iniciativa.

III.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que preceden, ello mediante los oficios DJ-022/017 de fecha 13 de enero de 2017 y DJ-337/2016 de fecha 15 de noviembre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en los oficios S.P. y F./063/2017 con fecha de recibido 24 de enero de 2017 y S.P. y F./1116/2016 con fecha de recibido 29 de noviembre de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen.

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, con fecha 13 de febrero de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Gral. Francisco J. Mugica"*, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - Que esta Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda es competente, en términos de lo dispuesto por el artículo 59, fracciones III y VII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para conocer y resolver de las dos iniciativas contenidas en el presente dictamen, ya que ambas tratan sobre reformas o adecuaciones al marco jurídico en materia de planeación del desarrollo urbano, así como en la materia de asentamientos humanos.

SEGUNDO. - Que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión consideramos su viabilidad en los siguientes términos:

Es una realidad que nuestra entidad ha venido representando un crecimiento de los asentamientos humanos de manera significativa, tanto en el plano habitacional como en el comercial, de servicios e industrial.

Ello ha provocado que se vayan modificando los planes de desarrollo urbano de cada uno de los centros de población en la entidad, clasificando el uso de suelo de acuerdo a las características geográficas y al crecimiento poblacional, permitiendo la instalación y funcionamiento de casinos, casas de apuestas o similares.

Las iniciativas, objeto del presente dictamen, buscan que en la entidad no se permita la instalación de casinos, casa de apuesta o similares; las cuales se sustentan en un análisis social, de salud y de seguridad respecto al funcionamiento de este tipo de giros comerciales y de servicios.

En cuanto al contexto de salud, ambas iniciativas coinciden en que la existencia de casinos, casas de apuesta o similares puede ocasionar ludopatía, la cual consiste en un trastorno en el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar y apostar, de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional.

En lo relativo al tema social, buscan evitar en nuestro Estado la instalación de comercios que no detonan el desarrollo económico y comercial de la entidad, sino que afecta gravemente a la sociedad colimense, ya que es del dominio público que dichos giros generan el despilfarro de dinero de los ciudadanos lo que ocasiona que no cuenten con el recurso económico suficiente para gastar y/o invertir en los negocios de la zona. En virtud de que la naturaleza de dichos establecimientos es estéril por ser una actividad diseñada para extraer recursos de la economía a través de las apuestas y no para producir bienes y servicios.

En el aspecto de la seguridad, se mencionada en las iniciativas que este tipo de comercios genera condiciones para que la delincuencia organizada acceda a mecanismos de lavado de dinero, y convertir sus recursos en dinero lícito que se sigue utilizando para financiar sus actividades ilícitas; además, de que es complejo identificar por las autoridades hacendarias los ingresos reales por este tipo de negocios, lo cual genera un pago discriminado de impuestos.

Las anteriores circunstancias constituyen una justificación social para determinar su viabilidad, ya que como lo argumentan los iniciadores, estos establecimientos comerciales generan más efectos negativos que positivos a la sociedad y no contribuyen al desarrollo económico de las comunidades; por lo cual, se justifica la posibilidad de que se puedan establecer restricciones a la zonificación y a los usos de suelo en los programas de desarrollo urbano de los diversos centros de población.

TERCERO.- Una vez analizado el aspecto social de las iniciativas materia del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión consideramos que jurídicamente es viable establecer restricciones en la zonificación y en los

planes de desarrollo urbano, ya que tanto la Constitución Federal como la Constitución Local reconocen en sus artículos 115, fracción V, inciso a), d) y f), y 87, fracción V, inciso a) , d) y f), respectivamente, reconocen que los municipios tendrán facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, controlar y vigilar la utilización del suelo, y otorgar licencias y permisos para construcción, en términos de las leyes federales y estatales respectivas.

Así, desde la Constitución se indica que la materia de desarrollo urbano es de competencia concurrente en los tres órdenes de gobierno, y que serán las leyes tanto federales como estatales las que fijarán las condiciones en que los municipios materializarán las facultades antes mencionadas.

Por lo que este Poder Legislativo se encuentra investido de facultades constitucionales para decidir sobre la reforma planteada por los iniciadores, misma que de conformidad al análisis constitucional resulta procedente.

Refuerzan lo anterior, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época
Registro: 2006100
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXXXI/2014 (10a.)
Página: 866

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO. LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS EN ESTAS MATERIAS DEBEN DESARROLLARSE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 94/2009, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 15/2011 y P./J. 16/2011, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, páginas 886 y 888, de rubros: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL." y "ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA." respectivamente, estableció que si bien las materias de desarrollo urbano y asentamientos humanos son concurrentes, existen dos vías para analizar sus ámbitos de competencia que son paralelas y complementarias: 1) la vía normativa, que es la que establece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que deriva la validez de diversas disposiciones emitidas por los distintos niveles de gobierno; y, 2) la de los planes, programas y acciones relacionados con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de forma distinta a la validez, con criterios de congruencia, coordinación y ajuste. De ahí que aun cuando sean materias concurrentes en las que intervienen los tres niveles de gobierno, los municipios no cuentan con una facultad normativa exclusiva en dichas materias, por lo tanto al ejercer sus atribuciones, lo deberán

hacer como lo establece el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enumera las facultades que tienen en materia de asentamientos humanos y que indica que siempre se desarrollarán en los términos de las leyes federales y estatales relativas.

Controversia constitucional 65/2013. Municipio de Chapala, Estado de Jalisco. 7 de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2000949
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. XLIV/2012 (10a.)
Página: 601

ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS PARA AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO PARA OTORGAR LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONSTRUCCIONES DENTRO DE SU TERRITORIO NO ES IRRESTRICTO.

La fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un régimen de concurrencia que otorga al Congreso de la Unión un título competencial sustantivo, por medio del cual la Federación ejerce un poder de dirección que le habilita para definir e imponer a las entidades federativas y a los Municipios la normatividad dentro de la cual participan en materia de asentamientos humanos, para cumplir con los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional. Así, la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales la Federación, los Estados y los Municipios participan en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población, con el principal objetivo de garantizar el cumplimiento de los planes y programas nacionales, estatales y municipales de desarrollo urbano, respectivamente. En este sentido, si bien es cierto que la Norma Fundamental prevé en los incisos d) y f) de la fracción V de su artículo 115 que los Municipios están facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, así como para otorgar licencias y permisos para construcciones, respectivamente, constituyéndose un régimen a favor del fortalecimiento de la autonomía municipal, también lo es que a partir de la naturaleza constitucional concurrente de la materia, debe interpretarse que el ejercicio de tales atribuciones por los Municipios no es irrestricto, pues se encuentra indefectiblemente sujeto a los lineamientos y a las formalidades señaladas en las leyes federales y estatales, de ahí que no pueda considerarse como un ámbito exclusivo y aislado de aquéllos sin posibilidad de intervención por parte de los otros dos niveles de gobierno.

Controversia constitucional 62/2011. Municipio de Xaltocan, Estado de Tlaxcala. 11 de abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

Número de Registro: 161384
ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.

Localización: [J] ; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 886. P./J. 15/2011 .

Número de Registro: 161383
ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS MUNICIPIOS GOZAN DE UNA INTERVENCIÓN REAL Y EFECTIVA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL CONCURRENTE DE LA MATERIA.

Localización: [J] ; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 887. P./J. 17/2011 .

Número de Registro: 161382

ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA.

Localización: [J] ; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 888. P./J. 16/2011 .

Con los anteriores criterios, queda claro que la formulación, aprobación y administración de los planes de desarrollo urbano no son una facultad exclusiva de los municipios, sino que estarán sujetas a las leyes federales y estatales en la materia, de ahí que no puede considerarse como un ámbito exclusivo y aislado de los municipios sin posibilidad de intervención por parte de los otros dos órdenes de gobierno.

En consecuencia, es procedente que se establezcan en las leyes de nuestro Estado restricciones en cuanto a considerar zonas y usos de suelo destinados para casinos, casas de apuestas y similares, ya que de ninguna manera se viola la autonomía municipal, mucho menos inmobiliaria.

A mayor abundamiento, y en atención a las restricciones en la zonificación y usos de suelo que se buscan establecer, resulta importante mencionar que restringir el uso de suelo para el establecimiento de casinos, casas de apuestas o similares, es independiente de la licencia de operación de este tipo de establecimientos pueda otorgarle la autoridad federal.

Es importante subrayar que las facultades del Municipio en materia de planes de desarrollo urbano y asentamientos humanos, son independientes y, desde luego distintas, a la facultad que corresponde a la Federación para expedir permisos en términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; es decir, las facultades del Municipio en materia de uso de suelo tienen su fundamento en la fracción V del artículo 115 constitucional, y como ya se apuntó, ésta consiste

entre otras, en la formulación de planes de desarrollo urbano; a diferencia de la facultad que la Federación tiene para la expedición de permisos en materia de juegos y sorteos. Distinción que es importante tener en cuenta, porque lo que se pretende es evitar que operen establecimientos en los que se practiquen juegos y sorteos regulados por esa Ley Federal, circunstancia que puede limitar en los planes de desarrollo urbano y en las disposiciones relativas al uso de suelo, pues con base en la Constitución Federal y Local, una de las atribuciones que se otorgó a los Municipios fue precisamente la de administrar su uso de suelo, en los términos de las leyes federales y estatales.

Así, la aprobación del presente dictamen, traerá como consecuencia que se establezcan restricciones en la elaboración de los programas de desarrollo urbano, mismas que impactarán particularmente en la clasificación de las zonas y usos de suelo contenidos en éstos; no permitiéndose más la instalación de casinos, casas o centros de apuestas, sorteos o similares en el Estado de Colima.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de:

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción II del artículo 21, y el párrafo primero del artículo 131, ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 21.- …

I. …

II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su jurisdicción; **usos y destinos que quedan prohibidos para casinos o cualquiera que sea su denominación, para juegos con apuestas y sorteos**;

III. a la XL.- …

ARTICULO 131.- Los Ayuntamientos a través de sus Dependencias Municipales, **de conformidad con sus planes o programas de desarrollo urbano,** expedirán los dictámenes de vocación del suelo, respecto de todas las acciones de aprovechamiento urbano del suelo, como las obras, acciones, inversiones y servicios que en materia de desarrollo urbano se pretendan realizar en sus jurisdicciones.

…

…

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el inciso c), de la fracción ll, del artículo 45, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 45.- …

I. ...

ll. …

a) y b) …

c) Aprobar la zonificación y el plan de desarrollo urbano municipal, **en el cual se deberá establecer la prohibición de usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o cualquiera que sea su denominación;**

d) al l) …

lll. a la Vll. ...

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Los usos y destinos para el establecimiento e instalación de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o cualquiera que sea su denominación, que se hubieran aprobado por la instancia municipal y estatal correspondiente y se encuentren vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán así hasta en tanto sean vigentes sus licencias de funcionamiento otorgadas por la Secretaría de Gobernación.

TERCERO. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la entidad, en sus respectivas competencias, deberán homologar el presente Decreto con las disposiciones reglamentarias correspondientes, en un término no mayor a noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de éste.

CUARTO. Los Ayuntamientos de la entidad contarán con un plazo no mayor a noventa días naturales para dejar de establecer en sus respectivos programas de desarrollo urbano, usos y destinos de suelo que permitan la construcción o instalación de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o cualquiera que sea su denominación.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M E N T E
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Dip. Eusebio Mesina Reyes
Presidente

Dip. Luis Ayala Campos
Secretario

Dip. Joel Padilla Peña
Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un muy breve receso…….RECESO……. siendo las 18:53 dieciocho horas con cincuenta y tres minutos se reanudó la sesión ……. El Diputado Javier Ceballos, solicito el uso de la voz.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Si, con el permiso Diputado Presidente. Solicitaría que en este tema que se está viendo se pueda turnar el dictamen que se acaba de presentar a la Comisión correspondiente, para

volverlo a revisar, debido a que estuvimos ahorita trabajándolo y no llegamos a un acuerdo justo para ver, en Comisión de que manera pudiéramos sacarlo de nuevo este dictamen. Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien, en atención a la petición que nos hace nuestro compañero Javier Ceballos Galindo, de que el dictamen en comento se regrese a la Comisión, para que se revise y analicen todas las aristas de la que de él se desprenden, se pone a la consideración de la Asamblea, dicha propuesta, quienes estemos por la afirmativa favor de manifestarlo levantado la mano.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría la propuesta.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones del primer párrafo del artículo 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. En el uso de la tribuna nuestra compañera Diputada Leticia Zepeda Mesina.

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, con el permiso de esta H. Asamblea. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Leticia Zepeda Mesina. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 74 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR LAS FRACCIONES III, IV, V Y VI, Y ADICIONAR LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 79 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones III, IV, V Y VI, y adicionar la fracción VII del artículo 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

A N T E C E D E N T E S

1.- Que la Diputada Única Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano e integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 25 de octubre de 2016, presentó ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones III, IV, V Y VI, y adicionar la fracción VII del artículo 79 Bis de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

2.- Que mediante oficio número DPL/774/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N A L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Única Leticia Zepeda Mesina, perteneciente al Partido Movimiento Ciudadano e integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición de motivos, señala que:

> *"En nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 79 Bis, se contempla la realización de las sesiones solemnes con el objetivo de recibir a distinguidas personas del Estado, otorgar condecoraciones o conmemorar algún suceso significativo, mismo artículo establece el orden que deberán llevar dichas sesiones solemnes, comenzando con la Lista de asistencia y terminando con la convocatoria a la próxima sesión ordinaria, para seguir con la clausura.*
>
> *Es importante resaltar que dentro del orden del día que se menciona en dicho artículo, no se contempla la realización de los Honores a la Bandera, cuyo desarrollo simboliza el compromiso de los mexicanos hacia nuestra Patria; representando la lucha que tenemos para transformar al país en un México ético, en un México ciudadano, y en un México justo para todos.*
>
> *Por lo anterior, se propone a esta Honorable Asamblea, reformar las fracciones lll, IV, V, Vl y se adiciona la fracción Vll del el artículo 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para que se establezca la obligatoriedad de rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio en cada una de las sesiones solemnes que este Poder Legislativo realice."*

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, ello mediante oficio DJ-359/016 de fecha 23 de noviembre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Así mismo, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1131/2016, recibido con fecha 29 de noviembre de 2016, en el cual se estima no emitir pronunciamiento alguno respectivo, toda vez que su contenido es exclusivo del Honorable Congreso del Estado, mismo que se anexa al presente dictamen.

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 28 de noviembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Francisco J. Mujica"*, a

efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer lo referido a la proposición de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; de conformidad a lo establecido en la fracción IV del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos:
Nuestra bandera simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional y se venera con el esfuerzo diario de todos los mexicanos, impulsándonos a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia, producto de las luchas que ha sostenido nuestro país, con el fin de alcanzar un pleno desarrollo como país.

Cada color de nuestra bandera tiene un significado distinto: el verde simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza, el blanco representa la pureza de los ideales del pueblo y el rojo simboliza la sangre que derramaron los héroes por la patria. Hemos crecido con ellos y han estado siempre presentes en nuestra vida cotidiana, aunado a ello, el ser parte de las sesiones solemnes nos da el compromiso de enaltecer nuestros valores cívicos, y que mejor que rindiendo honores a la bandera al recibir a distinguidas personas del Estado, otorgar condecoraciones o conmemorar algún suceso significativo, entre otras.

Esta Comisión dictaminadora considera importante reconocer nuestros símbolos patrios como son, el Escudo Nacional, la Bandera y el Himno Nacional al celebrar los actos cívicos. El reconocerlos es afirmar la fuerza de nuestra historia y enaltecer los esfuerzos y logros de las generaciones que nos antecedieron.

En nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 79, se contempla la realización de las sesiones solemnes con el objetivo de rendir protesta a los ciudadanos representantes de los tres poderes, recibir a distinguidas personas del Estado, otorgar condecoraciones o conmemorar algún suceso significativo, mismo artículo establece el orden que deberán llevar dichas sesiones solemnes, comenzando con la Lista de asistencia y terminando con la convocatoria a la próxima sesión ordinaria, para seguir con la clausura.

Finalmente, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, considera viable esta iniciativa con Proyecto de Decreto, puesto que deben rendirse los honores a la bandera en sesiones solemnes, toda vez que este

acontecimiento simbólico enaltece los actos cívicos propios de este H. Congreso de Estado de Colima, fomentando así los valores cívicos.

TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente:

La Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en sus artículos 9° y 11, señalan textualmente lo siguiente:

Artículo 9°.- En festividades cívicas o ceremonias oficiales en que esté presente la Bandera Nacional, deberán rendírsele los honores que le corresponden en los términos previstos en esta Ley y los Reglamentos aplicables; honores que, cuando menos, consistirán en el saludo civil simultáneo de todos los presentes, de acuerdo con el Artículo 14 de esta misma Ley.

Artículo 11.- En las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios se rendirán honores a la Bandera Nacional en los términos de esta Ley y con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año, independientemente del izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del artículo 18, acto que podrá hacerse sin honores.
Las instituciones públicas y agrupaciones legalmente constituidas, podrán rendir honores a la Bandera Nacional, observándose la solemnidad y el ritual que se describen en esta Ley. En estas ceremonias se deberá interpretar, además, el Himno Nacional.

De los anteriores ordenamientos se desprende que en las ceremonias oficiales deben rendirse los honores a la bandera correspondientes, en nuestro caso serian las sesiones solemnes, conforme a los dispuesto por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, ésta misma ley desprende que las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios se rendirán honores a la Bandera Nacional.

Por ello se considera que en las sesiones solemnes enlistadas en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, deben efectuarse los Honores a la Bandera dentro del orden del día comprendido en el artículo 79 Bis de la misma Ley, no se contempla la realización de los Honores a la Bandera, cuyo desarrollo simboliza el compromiso de los mexicanos hacia nuestra Patria; representando la lucha que tenemos para transformar al país en un México ético, en un México ciudadano, y en un México justo para todos.

Por lo anterior, se propone a esta Honorable Asamblea, reformar las fracciones lll, lV, V, Vl y se adiciona la fracción Vll del el artículo 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para que se establezca la obligatoriedad de rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio en cada una de las sesiones solemnes que este Poder Legislativo realice.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:

D E C R E T O

ÚNICO.- Se reforman las fracciones lll, lV, V y Vl y se adiciona la fracción Vll del artículo 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, quedando de la siguiente manera.

Artículo 79 Bis. . . .

I a ll. . . .

lll.- Honores a la Bandera;

IV.- Elección de la Mesa Directiva Únicamente en los casos señalados en el artículo 107 de esta Ley;

V.- Desarrollo del asunto que dio origen la sesión;

VI.- Convocatoria a sesión ordinaria**; y**

Vll.- Clausura.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M EN T E
Colima, Colima, 28 de Noviembre de 2016

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo **Dip. Joel Padilla Peña**

Secretario Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRTARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por la negativa.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa.

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Conteras, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 24 veinticuatro votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos el

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa de Ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar, diversas disposiciones de la Ley de Promoción e impulso al Joven Emprendedor y a la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima. Tiene la palabra nuestra compañera Diputada Adriana Lucía Mesina Tena.

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra a nuestra compañera Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Gracias Diputado. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 33 ELABORADO POR LAS COMISIÓNES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE PLANEACION, FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE COLIMA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.

A N T E C E D E N T E S

1.- Que la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 14 de octubre de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.

2.-Que mediante oficio número DPL/751/016 de fecha 14 de octubre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminadoras procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, en la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que:

> *"El presente documento contiene una iniciativa diseñada con la finalidad de contribuir a resolver uno de los problemas públicos de mayor magnitud en el estado de Colima, como lo es la falta de oportunidades laborales para la juventud; por lo que se propone estimular mediante incentivos fiscales y apoyos de gobierno, a las empresas que otorgan su primer empleo y/o contratan a jóvenes.*
> *En la actualidad, las y los jóvenes son el grupo poblacional más grande del país, al representar un tercio del total de los habitantes y más del 40% de la fuerza económicamente activa. Esas proporciones son similares al hablar del estado de Colima,*

en donde de cada 10 colimenses que se encuentran en etapa productiva, 4 son jóvenes. Sin embargo, también es la población con menos perspectivas laborales, de hecho, las probabilidades de que un joven esté en desempleo en la entidad, son dos veces más altas que en el caso de un adulto.

Asimismo, no podemos negar que gran número de jóvenes no cuentan con las oportunidades de desarrollo suficiente, con pocas oportunidades de empleo y, en ocasiones, obstaculizado el acceso a servicios como la salud y la seguridad social.

Lo anterior, sumado a la realidad del país, generada por la falta de capacidad gubernamental para crear las condiciones mínimas de vida digna, sumada a la precariedad de la economía, la cual se deteriora cada vez más no sólo por las características propias del mercado, sino también por la constante alza en los precios de bienes y servicios; ha creado el fenómeno conocido como las y los "jóvenes nini", que son aquellos que ni estudian, ni trabajan.

Fenómeno que de acuerdo a datos de 2014, informados por la Secretaría de la Juventud, habría casi 5 mil jóvenes colimenses en esta situación.

Por lo anterior, y al darnos cuenta que existen jóvenes que no se encuentran produciendo, lo cual provoca que sus habilidades y capacidades se estén desperdiciando.

Desafortunadamente, las y los jóvenes que sí tienen empleo no siguen una suerte mejor. Trabajan largas jornadas laborales, carecen de prestaciones y de seguridad social, sus contratos son por tiempo definido y para periodos cortos, así como su ingreso es bajo. Se trata de un grupo poblacional en desventaja, que se enfrenta a un sinfín de restricciones, tanto para conseguir su primer empleo como para ascender en su carrera profesional. Algunas de éstas son prejuicios que los califican faltos de competencias laborales y actitudes inmaduras, con lo que se les niega el acceso a alguna oportunidad.

Entre las causas de la falta de empleabilidad de las y los jóvenes colimenses se encuentra que las empresas no cuentan con incentivos para contratar a personal que deben capacitar, que no tiene experiencia en el ramo a que se dedica o para el puesto vacante, y que ante la ausencia de un historial de trabajo, no hay garantía de qué tan preparados pueden estar. Así, la mayoría de las empresas de la entidad no están preparadas para dar entrada a las y los jóvenes, desconocen los beneficios de tenerlos en su planta laboral y no se les ofrecen apoyos adicionales por emplearlos.

Con esto se advierte que los esfuerzos y las políticas emprendidas hasta el momento para favorecer en los ámbitos económico y laboral a las y los jóvenes, no han sido suficientes. Se requiere de un impulso especial, en una medida legislativa que lleve a convertir el bienestar de la juventud en un objetivo estratégico y transversal de las instituciones. Esa es la intención de la suscrita Diputada ***ADRIANA LUCÍA MESINA TENA****, así como de sus compañeros de Grupo Parlamentario, de contribuir, desde el ámbito de competencia legislativo, al desarrollo de las y los jóvenes colimenses, al fomentar la creación de nuevas oportunidades laborales mediante la implementación de un marco legal que genere incentivos fiscales y en especie a las empresas que incentiven y generen espacios de trabajos para las y los jóvenes.*

Lo anterior en virtud de que para el derecho y para la política lo importante debe ser la definición de esquemas que permitan la solución de la variada problemática que en la vida diaria enfrentan las y los jóvenes. Establecer las bases jurídicas para la atención puntual del poder público y del sector privado de esa problemática, es tarea de nosotros, las y los legisladores representantes de la población.

Es de destacar que si bien la Ley de la Juventud del Estado de Colima reconoce en su contenido los derechos económicos de las y los jóvenes y la necesidad de promover acciones que fomenten su desarrollo económico y laboral, carece de los mecanismos que hagan esto realidad. En diferente situación se encuentra la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, la cual ha significado un gran avance y beneficio para este grupo poblacional, al otorgar financiamiento con el que las y los jóvenes inicien sus propias empresas y se fomente su espíritu emprendedor.

Hasta la fecha, la legislación estatal es omisa en alinear los beneficios fiscales y en especie que las empresas colimenses pueden obtener por parte del Gobierno del Estado, con crear espacios de trabajo que potencialmente y en la práctica desempeñen las y los

jóvenes. A falta de ello, las empresas han continuado con sus políticas laborales de siempre, utilizando los criterios de contratación laboral a que están acostumbradas, y negando el acceso a las personas jóvenes.

Por tales motivos, esta iniciativa de Decreto aborda puntos esenciales para fomentar que las empresas otorguen su primero empleo y contraten a las y los jóvenes colimenses, siendo éstos los siguientes:

- *La adición como uno de los objetivos de la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima, el de incentivar la creación de empleos para jóvenes de 18 a 30 años de edad, por ser este rango de edad donde más difícil les es conseguir empleo.*
- *La consideración de las empresas que cuenten con una política de contratación en puestos específicamente destinados a jóvenes de 18 a 30 años de edad, para que sean beneficiarias de los incentivos fiscales y los apoyos gubernamentales que marca la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima.*
- *La incorporación del Titular de la Secretaría de la Juventud como integrante del Consejo Estatal para el Fomento Económico, que es el encargado de definir programas, proyectos y estrategias de fomento a la economía del estado, y a la consolidación y permanencia de las empresas.*

Medidas como las propuestas han sido instrumentadas con éxito en otras entidades federativas, estimulando a las empresas a conocer cómo pueden beneficiarse de emplear a personas con gran disposición de trabajo, a reducir su carga fiscal por contar con nuevo personal recién egresado de las universidades, y al obtener más apoyo gubernamental por tener una política permanente de contratación de personal joven.

Así las cosas, la nula y/o escasa generación de empleos para las y los jóvenes, significan una pérdida cuantiosa para nuestra sociedad. En la actualidad, tanto las y los jóvenes profesionales experimentados, como los recién egresados, constituyen una inversión valiosa y única, desaprovechada, al carecer de oportunidades claras y equitativas de desarrollo laboral. Es momento de atender y responder a las demandas de este sector, posicionándolo como el motor principal del crecimiento y del desarrollo de este país y del estado de Colima".

II.- Que los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que precede, ello mediante oficio DJ-308/2016 de fecha 07 de noviembre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Así mismo, en cuanto al impacto presupuestario, el Director de Consultoría y Normatividad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio D.C.N./13/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, el cual refiere que la iniciativa en estudio si muestra congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en los temas específicos de mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para atraer más inversiones, generar más empleos y mejorar los salarios en el estado, los cuales se encuentran vinculados al eje transversal I, Colima Competitivo, aunque de lo anterior también se señala que no se dispone de la suficiencia presupuestaria para dar viabilidad a la implementación de la iniciativa sujeta a análisis en virtud de que dichos recursos están comprometidos en los programas y proyectos aprobados por el Congreso del Estado, mismo que se anexa al presente dictamen.

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 12 de diciembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Francisco J. Mujica"*, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que esta Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, son competentes para conocer respecto a los Códigos Civil, Penal, de Procedimiento Civil y Penal, leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos de la Constitución, de conformidad a la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en este mismo orden de ideas, de conformidad a la fracción V del artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, consideramos su viabilidad en los siguientes términos.

En la actualidad la realidad económica del país y del Estado de Colima, va en detrimento, la situación de los jóvenes en los mercados laborales. Una cantidad sin precedentes de jóvenes en todo el país no trabaja, no estudia, y no participa en algún programa de capacitación. Muchos se sienten desanimados debido a la falta de oportunidades y no siguen buscando empleo, esto no es una situación ajena a nuestro Estado

En este mismo orden de ideas estas Comisiones Legislativas comparten la idea de la iniciadora y advierten que existe una enorme brecha entre el número de jóvenes que ingresa a la fuerza laboral y los trabajos disponibles, De este modo, la actual crisis del empleo de los jóvenes le resta credibilidad a la norma de que cada generación sucesiva verá mejorar sus perspectivas económicas y de empleo. Es también una amenaza para el principio de la igualdad de oportunidades entre las generaciones. Además, una disminución de las perspectivas económicas y de empleo.

Ahora bien, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las principales causas de desempleo en los jóvenes profesionistas son la falta de experiencia, la busca de un sueldo digno que muchos empleadores no quieren pagar, la falta de dominio en su área o disciplina y la ineficiencia en la capacitación.

Es por los argumentos antes vertidos es que estas comisiones dictaminadoras coinciden con la iniciadora en buscar formas de incentivar a las empresa para que adopten dentro de sus políticas, generar condiciones y a su vez las oportunidades que los jóvenes de ahora y del mañana que tanto necesitan para hacerle frente a las vicisitudes que puedan enfrentar a lo largo de su vida y que sea una camión que los lleve por el buen sendero de ser una persona de bien y de trabajo, la cual dignifique su vida día a día.

TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123 primer párrafo refiere que: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, y su fracción VII que cobra aplicación al señalar: Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO.- Se **reforma** la fracción XXIV del artículo 5º; el inciso G) de la fracción IX del artículo 6º; el artículo 6º bis; la fracción XI del artículo 11; la fracción III y su inciso A), del artículo 19; y la fracción XVII del artículo 23; el artículo 34; último párrafo del artículo 41; artículo 46; y se **adicionan** las fracciones XXII y XXIII del artículo 34, todos de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5º. . . .

I a XXIII. . . .

XXIV.- Incentivar la generación de empleos para **jóvenes de 18 a 30 años de edad, así como para** personas mayores de 45 años de edad; y

XXV. . . .
ARTÍCULO 6º. . . .

I a VIII. . . .

IX. . . .

a) a f). . . .

g) Empresas que cuenten con una política de contratación que contemple puestos específicamente destinados **a jóvenes de 18 a 30 años de edad, así como a** personas mayores de 45 años de edad.

ARTÍCULO 6º Bis.- Las empresas a que se refiere el inciso g) de la fracción IX del artículo anterior, para ser sujetas a los incentivos y apoyos del Gobierno del Estado, deberán brindar a los empleados **de 18 a 30 años y** mayores de 45 años, las mismas prestaciones de ley que al resto de sus trabajadores, y contratos a término indefinido.

ARTICULO 11. . . .

I a X. . . .
XI.- Inclusión de trabajadores **de 18 a 30 años y** mayores a 45 años de edad, y
XII. . . .
. . . .
ARTÍCULO 19. . . .

I a II. . . .

III.- **Catorce** vocales que serán:

a).- Los Secretarios de Planeación **y Finanzas**, de Administración **y Gestión Pública**, de Turismo, **de Infraestructura y** Desarrollo Urbano, de Desarrollo Rural**, de la Juventud y de Desarrollo Social**;

b) a c). . . .

. . . . .
ARTÍCULO 23. . . .
I a XVI. . . .
XVII.- Promover el empleo de personas **de 18 a 30 años de edad y** mayores de 45 años de edad en las empresas colimenses;
XVIII . . . .
XIX. . . .
ARTÍCULO 34. . . .
I. . . . .

II. Secretaría de Planeación **y Finanzas** del Gobierno del Estado;
III. Secretaría **de Infraestructura y** Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado;
IV. Secretaría de Administración **y Gestión Pública** del Gobierno del Estado;
V.- Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado;
VI.- Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado;
VII.- Secretaría de Desarrollo Social;
VIII. Contraloría General del Gobierno del Estado;
IX. Banco Nacional de Comercio Exterior;
X. Nacional Financiera;
XI. Secretaría de Economía;
XII. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

XIII. Comisión Federal de Electricidad;
XIV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XV. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XVI. Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima;
XVII. Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
XVIII. Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
XIX. Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado;
XX. Los representantes de las cámaras del sector empresarial;
XXI. Los representantes de asociaciones ganaderas, y de agricultores del Estado;
XXII. Los H. Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad que en cada caso resulten interesados;
XXIII. Las demás Instituciones y Dependencias que por sus funciones puedan coadyuvar al logro de los objetivos de esta ley.

. . . .

ARTÍCULO 41. . . .

I.- Hasta con 1,000 unidades de medida y actualización **vigente en el Estado**, en los casos previstos en las fracciones I, III, IV y VI;

II.- Hasta con 500 unidades de medida y actualización **vigente en el Estado**, en los casos previstos en la fracción II; y

III.- Hasta con 250 unidades de medida y actualización **vigente en el Estado**, en el caso de lo previsto en la fracción V.

. . . .
. . . .
Asimismo, el infractor que hubiere gozado de los beneficios de la fracción I del artículo 7 de la presente Ley, deberá pagar a la **Secretaría de Planeación y Finanzas**, las contribuciones que hubiere dejado de pagar, adicionando los recargos, actualizaciones y multas, con base en las leyes fiscales aplicables, tomando en cuenta para calcularlos, las fechas en que deberían haberse pagado, de no haberse resuelto favorablemente su solicitud de incentivo.

ARTÍCULO 46.- La Secretaría fundará y motivará su resolución, debiendo comunicarla a la **Secretaría de Planeación y Finanzas** del Gobierno del Estado para que proceda al cobro de la misma, mediante el procedimiento económico coactivo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 12 de diciembre de 2016

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. Joel Padilla Peña
Secretario

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo
Secretario

COMISIÓN DE PLANEACION, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Dip. Graciela Larios Rivas
Presidenta

Dip. Eusebio Mesina Reyes
Secretario

Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco
Secretaria

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se

proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa.

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, si,
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 veinticinco votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que emitieron cero votos negativos al documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 veinticinco votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Y de Planeación Fomento Económico y Turismo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el

Estado de Colima. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Diputado Joel Padilla Peña. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez.

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 93 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROMOCIÓN E IMPULSO AL JOVEN EMPRENDEDOR, Y A LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO AMBOS PARA EL ESTADO DE COLIMA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima, y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Que el Diputado Federico Rangel Lozano, y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos ellos de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 12 de enero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima, y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.

2.- Que mediante oficio número DPL/894/017, de fecha 12 de enero de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa en estudio, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N A L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- El Diputado Federico Rangel Lozano, en su exposición de motivos, señala que:

"Con fecha 30 de julio de 2013, fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima, la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima, la cual dispone que tendrá como objetivo impulsar el crecimiento económico del Estado mediante el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa productiva de la juventud, propiciando su incorporación al mercado y economía regional, como actores fundamentales que garanticen el desarrollo presente y futuro de la Entidad, entre otras cuestiones.

Esta Ley sirve especialmente para motivar a esos jóvenes que con inquietud o no, desean desarrollar una idea de negocio con la asesoría de las instancias gubernamentales participantes en esta Ley.

La población joven tiene un gran espíritu emprendedor e ideas importantes que pueden traducirse en grandes negocios que permitan el autoempleo y la generación de los mismos para la población laboralmente activa.

Por ello es importante generarles las condiciones necesarias para su desarrollo, mediante las cuales la población joven se sienta apoyada y respaldada en la consecución de sus ideas de negocio.

Sabemos que no todos los jóvenes logran una profesión, pero eso no los limita a aprender algún arte, técnica u oficio que le permita desarrollarse laboralmente. Artes, técnicas u oficios es variada su existencia, sin embargo, un plus importante es que quienes los desarrollan o quieren aprenderlos puedan contar con un documento que así lo acredite.

Por ello, hoy presentamos esta iniciativa, para dotar al Estado de esas facultades y pueda impulsar programas de certificación para artes, técnicas u oficios que coadyuven al desarrollo de las ideas o proyectos de la población joven del Estado.

Así, se busca que el Estado no sólo apoye y asista en las ideas de negocio que genera la población joven, sino que adicionalmente busque capacitarlos o certificarlos en algunas artes, técnicas u oficios que les permitan incursionar de manera formal en la vida económica del Estado y sean fuentes importantes generadoras de empleos para la demás población.

Los legisladores que hoy presentamos esta iniciativa lo hacemos con el ánimo y firme convicción de que la población joven es la que tiene el poder de cambiar y mejorar el rumbo del Estado y del país mismo. Ya que su frescura de ideas y dinamismo para emprender son un activo importante para fortalecer la vida económica de los colimenses.

Para estos programas de certificación es importante la participación de las Secretarías de Fomento Económico, Educación, Trabajo y Previsión Social, así como de la Juventud, las cuales en su conjunto habrán de definir qué artes, técnicas u oficios se destacan en el Estado y sería importante que se certificaran para hacerlas más competitivas en los distintos mercados que participen, ya que una certificación siempre le da un plus o un valor agregado a cualquier bien o servicio.

Dichos programas de certificación, se busca que vayan subsidiados por el Estado, dentro de su capacidad presupuestal, con el objeto de resulte más atractivo para la población objetivo, bajo el entendido de que quienes no pudieron concluir una profesión y se han interesado por un arte, técnica u oficio, generalmente no disponen de los recursos suficientes para continuar estudiando o preparándose profesionalmente.

A mayor abundamiento, resulta oportuno mencionar que en esta iniciativa también se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima

y participe directamente en el fomento y creación de los programas de certificación para la población joven que quiera emprender en algún arte, técnica u oficio.

Así, la iniciativa que hoy presentamos busca empoderar a la población joven e impulsar su participación activa en el desarrollo económico del Estado, a través de las distintas áreas de oportunidad en las cuales deseen participar."

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señaladas en las fracciones que anteceden, ello mediante oficio DJ/062/017 lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 13 de febrero de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Gral. Francisco J. Múgica"*, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer lo referido a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima, de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos:

Como lo argumenta el iniciador, no todos los jóvenes logran una profesión, pero eso no los limita a aprender algún arte, técnica u oficio que les permita desarrollarse laboralmente, es variada su existencia; sin embargo, un plus importante es quienes lo desarrollan o quieran aprenderlos, puedan contar con documento que así lo acredite.

Ahora bien, en ese mismo orden de ideas debemos entender que el emprendimiento es una filosofía de vida para los jóvenes que les permite vencer retos y tener éxito en la meta que se propongan. Un joven emprendedor es una persona positiva, creativa, proactiva y productiva, que no se puede coartar las capacidades tanto físicas como intelectuales por razón de no haber tenido una

oportunidad de terminar sus estudios ya que eso no indica una falta de capacidad, sino una falta de oportunidad para salir adelante en las metas propuestas.

Aunado a lo anterior, es de gran importancia que el estado se preocupe por generar las condiciones necesarias para aquellos jóvenes que por una u otra razón no pudieron terminar una formación académica, y que con el paso del tiempo han aprendido un oficio o arte con el cual pueden hacerle frente a las diferentes circunstancias de vida que enfrentan día a día, encontrando un modo honesto y digno para ganarse la vida.

Es por ello que esta Comisión dictaminadora determina viable dotar al estado con las facultades de impulsar programas de certificación para artes, técnicas u oficios que coadyuven al desarrollo de las ideas o proyectos de la población joven del estado.

TERCERO.- Los integrantes de la Comisión que dictaminamos el presente documento, determinamos jurídicamente su viabilidad con fundamento en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere: *ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.*

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

A mayor abundamiento, esta Comisión dictaminadora estima importante el apoyo e impulso a los jóvenes en sus distintas áreas de acción, ya que su creatividad y dinamismo deben ser siempre apoyados para que desarrollen sus ideas y éstas puedan repercutir en el desarrollo de la sociedad colimense, contando cada día con jóvenes más emprendedores, siendo referente en la materia.

Finalmente, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión estima necesario realizar algunas modificaciones en cuanto a técnica legislativa y certeza jurídica del presente documento.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente Dictamen con Proyecto de:

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO.- Se **reforman** los artículos 1° fracción lV; 4° fracciones Vl y Vll; 5° fracción Xl; 6° fracciones V y Vl; 9° fracción lV; 10 fracciones ll y lll; y 19 fracciones Vl y Vll. Asimismo, se **adicionan** la fracción V, pasando la actual fracción V a ser Vl, al artículo 1°; la fracción Vlll, haciéndose el corrimiento subsecuente de las fracciones Vlll y lX, al artículo 2°; la fracción Vlll al artículo 4°; la fracción Xll, haciéndose el corrimiento subsecuente de la fracción Xll, al artículo 5°; la fracción Vll al artículo 6°; la fracción V al artículo 9°, las fracciones lV y V al artículo 10; y la fracción Vlll al artículo 19, todos de la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 1°. . . .

I a la lll. . . .

IV. Promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal de emprendimiento, incorporando sus temas y contenidos en las

actividades extracurriculares de los niveles educativos básico, medio superior y superior, en los sectores público y privado, de las diferentes modalidades que se imparten en el Estado**;**

V. Promover programas de certificación en áreas de la técnica, artes u oficios, para fortalecer el autoempleo y la cultura emprendedora; y

VI. Promover la inserción de los jóvenes al sector empresarial.

Artículo 2°. . . .

I a la VII. . . .

VIII. Programa de Certificación. A la capacitación y adiestramiento promovidas por el Gobierno del Estado, en las diferentes actividades relacionadas con las artes, técnicas u oficios, dirigida a la población joven, el cual deberá contar con la validez oficial de la Secretaría de Educación;

IX. Proyecto incubado de negocios. Es un documento escrito elaborado por un Joven Emprendedor o Empresario, que define claramente los objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. Es una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de un proyecto con un sistema de planeación tendiente a alcanzar metas determinadas**; y**

X. SEFIDEC. Organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Colima, el cual estará a cargo del otorgamiento de los beneficios y apoyos señalados en esta Ley, a los proyectos emprendedores que de acuerdo al proceso de selección llevado a cabo por la Comisión Dictaminadora, resulten acreedores a los mismos**.**

Artículo 4°. . . .

I a la V. . . .

VI. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, ambiental, así como regional**;**

VII. Difusión de los procedimientos, normas, reglas, programas, apoyos e incentivos en los diferentes niveles de gobierno**; y**

VIII. Impulso de programas de certificación para las artes, técnicas u oficios y hacer más competitivo éstas áreas de emprendedurismo.

Artículo 5°. . . .

I a la X. . . .

XI. Promover en los distintos medios de comunicación los apoyos a los jóvenes emprendedores;

XII. Crear programas de certificación relacionados con las artes, técnicas u oficios propios del estado para la población emprendedora, con lo cual se fortalezcan las micro, pequeñas y medianas empresas para que sean más competitivos en los distintos mercados; y

XIII. Las que determine el Gobernador del Estado mediante mandato o delegación expresa**.**

Artículo 7°. . . .

I a la IV. . . .

V. Establecer un programa estatal de mentoría a la iniciativa joven por medio de las incubadoras ya existentes en el Estado, además de asesoramientos y estudios de factibilidad desarrollados dentro de las mismas**;**

VI. Dar el seguimiento para articular los esfuerzos que en materia regulatoria, estímulos y coinversiones se lleven a cabo para el cumplimiento de lo propuesto en la presente Ley**; y**

VII. Establecer un programa estatal de mentoría a la iniciativa joven por medio de las incubadoras ya existentes en el Estado, además de asesoramientos y estudios de factibilidad desarrollados dentro de las mismas; Dar el seguimiento para articular los esfuerzos que en materia regulatoria, estímulos y coinversiones se lleven a cabo para el cumplimiento de lo propuesto en la presente Ley; Establecer la coordinación con la Secretaría de Educación para el impulso y creación de programas de certificación enfocados a las artes, técnicas u oficios que contribuyan al desarrollo local, regional y estatal, y que con ello se mejore la competencia comercial y laboral.

Artículo 9°. . . .

I a la III. . . .

IV. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las instituciones educativas a instituciones que impulsan y desarrollan programas educativos profesionales que acercan al estudiante a entender el sistema de economía de mercado con contenido social**; y**

V. Apoyar la creación e impulso de programas de certificación en coordinación con las demás autoridades encargadas de la observancia de la presente Ley, enfocados en las artes, técnicas u oficios que se destaquen en el Estado y se potencialice el desarrollo local, regional y estatal de las micro, pequeñas y medianas empresas colimenses.

Artículo 10. . . .

I. . . .

II. Dar seguimiento y facilitar el proceso de incubación, en cualquiera de las incubadoras existentes en el Estado de Colima, de las ideas de negocio, proyectos productivos y propuestas de nuevas empresas de jóvenes colimenses**;**

III. Convocar a la integración y funcionamiento de la Comisión Dictaminadora del Fondo para el Joven Emprendedor; **y**

IV. Participar en la creación, impulso y difusión de los programas de certificación enfocados a las distintas artes, técnicas u oficios que se destaquen en el Estado; y

V. Coadyuvar con el emprendedor en campañas de comercialización o colocación de bienes o servicios que ofrezca éste a los distintos mercados.

Artículo 19. . . .

I a la V. . . .

VI. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia**;**

VII. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos productivos**; y**

VIII. Fomento a las artes, técnicas u oficios que mejoren la competitividad económica y laboral en el Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se **reforma** la fracción XXIV del artículo 5°; y la fracción XVlll del artículo 23. Asimismo, se **adiciona** la fracción XXV y se hace el corrimiento de la actual fracción XXV al artículo 5°; y la fracción XlX haciéndose el corrimiento de la actual fracción XlX al artículo 23, todos de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 5°. . . .

I a la XXlll. . . .

XXIV.- incentivar la generación de empleos para personas mayores de 45 años de edad**;**

XXV.- Promover, en coordinación con las autoridades competentes, programas de certificación enfocados a las artes, técnicas u oficios, con el objetivo de impulsar la competitividad y el desarrollo de éstas actividades impulsadas por micro, pequeños o medianos empresarios; y

XXV.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines propuestos en la presente Ley**.**

Artículo 23. . . .

I a la XVll. . . . .

XVlll.- Expedir su reglamento interior**;**

XlX.- Opinar respecto a las artes, técnicas u oficios respecto de los cuales se considere necesario promoverse programas de certificación para hacer más competitivos esos mercados; y

XX.- Las demás que se deriven de esta Ley**.**

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M EN T E
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Héctor Magaña Lara
Presidente

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo **Dip. Joel Padilla Peña**

Secretario Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría ……. perdón, perdón, perdón. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla en el uso de la tribuna.

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso Diputado Presidente. Creo que estamos aprobando una iniciativa, incluso, la iniciativa que estamos presentando el día de hoy, para impulsar el joven emprendedor del Estado de Colima, y de la Ley de Fomento Económico, creo que fue turnada, no fue turnada a la Comisión, nada más fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, no la turnaron a la de Planeación, no, nada mas a una, bueno, yo creo que hubiera sido importante que se hubiera turnado a la Comisión de Planeación, porque es la comisión que tiene que ver con el desarrollo del Estado de Colima, y bueno, en ese sentido, había comentado que tenía que haberla enviado a esa,…….. perdón, estaba viendo el 17, si se turno a la Comisión de Fomento Económico y turismo, yo nada más si pedirles a las comisiones, pues que nos inviten a todos los Diputados, yo pertenezco a esa comisión y en ningún momento me hicieron una invitación para poder estar participando sobre todo en este tema tan importante. Entonces nada más era el

comentario en ese sentido pues que si nos hagan saber para ir, por ahí recibimos una, se publicó que iban a reunirse la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, como no pertenezco no participé, pero nunca se nos dijo que se iba a ver un tema que estaba en esa comisión.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada, queda registrada su comentario en el diario de los debates. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la negativa.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, abstención.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, abstención
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, abstención.
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, abstención.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, abstención.

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, abstención.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, abstención.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 14 catorce votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que emitieron 10 diez abstenciones de voto al documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 14 catorce votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 89 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña.

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores, público en general que nos acompaña y medios de comunicación que cubren puntualmente lo que ocurren en estas sesiones de esta Legislatura. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente

dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Joel Padilla Peña. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra a nuestro compañero Joel Padilla Peña, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 21 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A ADICIONAR LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, A FIN DE PROMOVER LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN PARTICULAR EL IDIOMA INGLÉS, EN EL NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a promover la enseñanza de una lengua extranjera en particular el idioma inglés, en el nivel básico de educación; de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- El Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 14 de diciembre de 2016, presento ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción XV del artículo 89, de la Ley de Educación del Estado de Colima.

2.- Que mediante oficio número DPL/868/016 de fecha 14 de diciembre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que los Diputados que integramos de la Comisión que dictamina, procedimos a realizar el siguiente:

A N A L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición de motivos, señala que:

"LA UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ha mencionado que todo niño, niña y adolescente, tiene derecho a una educación de calidad y que es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país.

En México se tiene un sistema de educación que estructura los principios, procedimientos y normas de como habrá de llevarse a cabo, el cual permita a las nuevas generaciones tener los conocimientos en cultura, arte, tecnologías y otras ramas, para que los niños tengan una visión de lo que es el mundo y como deben conducirse en la vida.

De ahí la importancia de que el sistema educativo en México este a la vanguardia, ya que cada ser humano aprenderá y se desenvolverá todos los días de su vida con lo que aprenda en las escuelas.

Uno de los retos de la educación en México es el fortalecimiento de la educación intercultural y bilingüe para la niñez y adolescencia, en general de todos sus habitantes, mediante el aprendizaje de una lengua extranjera en particular del idioma ingles ya que es la tercera lengua más hablada en el mundo, ésta después del idioma chino mandarín y el español; así se contribuye a una mejor interacción multicultural y de acceso a la información en todo el mundo.

Es por ello que consideramos en el Partido del Trabajo que es indispensable el uso de una lengua extranjera a nivel básico como el inglés y que este idioma se promueva para para que sea introducido en las escuelas a nivel básico, ya que en los inicios de la infancia de cualquier menor es la mejor etapa de su desarrollo para el aprendizaje y además está comprobado científicamente que es la mejor etapa para comenzar a entender otros idiomas independiente de la propia lengua materna.

Por lo anterior esta iniciativa tiene como objeto primordial dotar a los niños, niñas y adolescentes Colimenses que cursan un nivel básico escolar, estudien una lengua extranjera como lo es el idioma inglés y que la misma sea promovida en las escuelas, con ello se tendría alumnos mejor preparados que se integran a formar parte de una sociedad más avanzada, lo cual les garantiza un mejor posicionamiento a nivel educativo y cultural, pues no solo obtienen una educación de calidad sino también una preparación que los proyecta hacia un mejor futuro".

II.- Que el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y Secretario de Educación, todos del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, el primero mediante oficio 2012/2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, el segundo mediante oficio 2112/2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, y el tercero mediante oficio 2212/2016 de fecha 20 de diciembre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

En este tenor, el Director Jurídico de Legislación dependiente de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, emitió el criterio técnico jurídico, ello mediante oficio CJPE/19/2017, con fecha de recibido 10 de febrero de 2017, en el que refiere su viabilidad, mismo que se anexa a la presente.

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, sesionamos al interior de la Sala de Juntas *"Francisco J. Múgica"*, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - Que esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para conocer los asuntos relativos a la Educación Pública del Estado en todos sus niveles; de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO. - Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, determinamos su viabilidad bajo los siguientes términos.

Esta Comisión dictaminadora coincide justamente con lo redactado por el iniciador, en el sentido que la mejor época de asentar principios educativos es la etapa de la educación básica, quien recibe esta denominación porque representa la educación esencial y fundamental que sirve para adquirir cualquier otra preparación en la vida del individuo, porque representa el aprendizaje de los elementos necesarios para poder desenvolverse en la sociedad y dentro de su cultura, porque es la educación obligatoria que han de recibir todos los futuros ciudadanos.

Consideramos que en un mundo globalizado hay muchos beneficios en hablar más de un idioma como lo son el conseguir un mejor trabajo, acceder a más y mejor información o poder viajar tranquilamente y evitar los problemas de comunicación, hoy en día aprender una segunda lengua es casi imprescindible.

El aprendizaje de una segunda lengua y en algunos casos de una tercera, no es una pérdida de tiempo como antiguamente se pensaba, sino que se trata de una inversión, porque el aprendizaje de otro idioma no sólo acrecienta las posibilidades de conseguir un mejor trabajo impactando positivamente en su situación económica personal de los colimenses, sino que enriquece la vida social y cultural del individuo pues el idioma es la clave de la cultura.

Es importante hacer mención que en el nuevo modelo educativo ya se contempla la enseñanza de otra lengua donde a la letra expone lo siguiente:

La educación debe desarrollar la capacidad de la población para comunicarse, tanto en español como en otra lengua materna, así como en una lengua extranjera, trabajar en equipos, resolver problemas y usar efectivamente las tecnologías de la información. Por lo tanto, es indispensable incorporar a la Educación Básica el aprendizaje de competencias para la vida, que permitirán a las personas un mayor conocimiento de sí mismas, vivir en sociedad y aportar de forma constructiva sus saberes. De igual forma, es preciso fortalecer el desarrollo de estas competencias en la Educación Media Superior.

TERCERO. - Esta Comisión considera importante mencionar algunos de los beneficios que se adquieren al aprender otro idioma y que sirven de aplicación como base para sustentar el presente documento, siendo estos los siguientes:

- Hablar otro idioma mejora el funcionamiento de tu cerebro forzándolo a reconocer, negociar significados y comunicar en sistemas diferentes del lenguaje. Donde esta habilidad mejora la capacidad para negociar significados para resolver problemas en otros ámbitos.

- Los multilingües son hábiles para “switchear” entre dos sistemas del habla, de escritura y de estructuras. Esta habilidad malabárica les permite también un mejor desarrollo de la función ejecutiva de enfocarse mejor sin distraerse en otras cosas. También, son mejores en “multitasking”.
- Varios estudios han demostrado que los individuos que hablan dos o más idiomas tienen menos probabilidades de adquirir demencia o Alzheimer.
- Mejoría de la memoria.
- Mejores niveles de percepción. Un estudio indica que los multilingües son más observadores y enfocan más en información relevante y editan lo irrelevante.
- Mejoran las habilidades de toma de decisiones. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Chicago, los bilingües tienen a tomar decisiones más racionales, ya que pueden pensar en un segundo idioma y ver si las conclusiones iniciales permanecen.
- Los bilingües generalmente son más adaptables a diferentes situaciones. Tienen más confianza y autoestima en situaciones diferentes.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 130 de del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora estima necesario hacer las modificaciones pertinentes por técnica legislativa, al presente documento.

Finalmente, dictaminamos que aprender otro idioma ayuda a las personas a entender que el mundo no es todo igual, que existen diversidades culturales y a desarrollar confianza en sus relaciones sociales porque mejora su interacción con el entorno, preparándolas para el futuro que será cada vez más exigente. Porque como muchas veces ya se menciona: “el analfabeto del futuro será quien no maneje una computadora y no domine otro idioma”.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:

D E C R E T O

ÚNICO. - Se reforman las fracciones XIII y XIV; y se adiciona la fracción XV todas del artículo 89 de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 89.- Para alcanzar la equidad en la educación la autoridad educativa estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias llevará a cabo las acciones siguientes:

I a XII. (…)

XIII.- Establecerá, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural;

XIV. Impulsará esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria; y

XV. Promoverá la enseñanza de una lengua extranjera en particular el idioma inglés, para aumentar las habilidades de los alumnos de educación básica, apoyándose con el material humano y didáctico necesarios para tal efecto.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente.

A T E N T A M EN T E
Colima, Colima, 04 de enero de 2017
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Joel Padilla Peña
Presidente

Dip. José Adrián Orozco Neri
Secretario

Dip. Federico Rangel Lozano
Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la tribuna nuestra compañera Norma Padilla Velasco.

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con permiso Presidente. Y con el permiso de todos los aquí presentes. En el aspecto de la educación, tenemos un gran rezago, yo quiero hacer notar en este momento, pues pudiera ser una desatención por parte del Gobierno del Estado, el que se está sufriendo en las escuelas del Estado, no tenemos, pues no tenemos mucha atención por parte del Gobierno para nuestros niños porque desafortunadamente en la Secretaría de Educación Pública no le están dando la atención necesaria a todos, y quiero hablar particularmente de los grupos de padres de familia que han tratado de

conseguir una entrevista con el Secretario de Educación Pública y que desafortunadamente han sido ignorados, en la última sesión que nos visitó aquí el Secretaría de Educación, hará unos 10 días aproximadamente le pedí que nos diera, que nos concediera una entrevista para que atendiera a padres de familia de niños con discapacidad, y hasta este momento no se nos ha dado una fecha para que pueda él platicar y atender las peticiones de los padres de familia. Hay un total descontento entre todos los padres de familia que tienen hijos con alguna discapacidad, porque simplemente les dicen que no tienen el personal suficiente para que atiendan a ese tipo de personitas, no es posible que dejen en el olvido las cosas que son prioridad, la Constitución nos dice que debemos de ser atendidos todos los mexicanos para la educación en todos los aspectos, estoy de acuerdo en que se dé otro idioma más, que aprendan los mexicanos, o que aprendamos los mexicanos desde, pudiera ser desde el preescolar, en la primaria, para que no se dificulte tanto en la secundaria los conocimientos que se deben de adquirid, pero también estoy de acuerdo en que se debe de haber más atención para todos; la atención que se requiere. En el Estado de Colima, tenemos más del 6% de la población que tiene alguna discapacidad y que no está haciendo atendida debidamente. Y vengo aquí, a pedir que se, o a exhortar al Secretario de Educación Pública que reciba a estos padres de familia, lo haré posteriormente por escrito, como debo de hacerlo, pero hoy veo la oportunidad para hacer notar esto, porque el viernes yo estuve en la Secretaría de Educación Pública buscando al Secretario, o buscando a su secretaria particular y ni aun así pude conseguir una cita. No es posible que esto siga pasando, además, ya había hecho yo algunas otras llamadas telefónicas para tratar de conseguirlo. Los padres de familia quieren ser atendidos, y tienen todo el derecho en que los atiendan porque para eso están las personas que tienen algún puesto, para atender a la ciudadanía y no veo por qué tengan que negarles ese derecho que tienen sus hijos, de asistir a la escuela. Actualmente, hemos visto que la Secretaría, que la Universidad de Colima, está haciendo un proyecto para atender a estas personas, pero pues si seguimos así, entonces ¿a quién va a atender? A estos alumnos antes de llegar a la Universidad tienen que ir a la primeria, a la secundaria, al kínder, y no están siendo atendidos como deben de ser, entonces, yo creo que es muy necesario que analicemos bien esta situación. Claro que vamos a votarlo a favor, nada más si que se vea que es muy necesario que tenemos atorados muchos asuntos que son realmente importantes para la ciudadanía y que ellos se están sintiendo

rechazados, se están sintiendo amenazados por esa forma de rechazo que hay. Es cuanto Presidente. Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada Norma Padilla Velasco. En el mismo tema, nuestra compañera Diputada Martha Leticia Sosa Govea.

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. Que los niños aprendan inglés, claro que debe de ser una aspiración legítima, no solo de nosotros los Diputados, de ponerlo en la ley, sino de los padres y de los mismos niños de que sea una obligación del Estado, pero a mí me preocupa que se presenten aquí iniciativas que son dictaminadas rápidamente y que en el dictamen no se cubre con la técnica formal y legal que debemos de cubrir para todos los dictámenes. Aquí no hay ni una sola referencia al impacto presupuestario, aquí no hay ni una sola referencia a que la Comisión de Mejora Regulatoria de este Congreso, haya conocido el tema para poder haber opinado en su momento ¿Qué caso tiene entonces que adoptemos acuerdos con el Gobierno del Estado para tener una Comisión de Mejora Regulatoria si esta nunca se convoca, por la Comisión de Hacienda o por el Presidente de la Comisión de Hacienda, si esta nunca es tomada en cuenta?, en ese caso mejor borrémosla, ser integrante de una Comisión de membrete, no tiene caso, y que caso tiene que en algunas cuestiones, si el Secretario de Finanzas, danos el impacto presupuestario y en otras no ¿Por qué esa distinción?, si así vamos a trabajar, y cada que yo observe esto se los voy a ir diciendo, porque iniciativas de Acción Nacional no deben de ser rechazadas por este concepto. Claro, me da la nota la Diputada Norma, en el sentido que solamente se dice que esto se aplicará de forma paulatina y de acuerdo a la suficiencia presupuestal, pues si, ya hubiera sido mucho que no lo pusieran; pero no tenemos que hacer distinciones en los dictámenes, no tenemos porque, si yo presido la Comisión, estar aprobándome las iniciativas que yo mismo presento sin mayor pudor y sin mayor análisis de las cosas. No quiero llegar aquí a decir que es interés personal o tráfico de influencias personales, pero por favor, seamos congruentes, seamos respetuosos, entendamos pues que el fin no siempre justifica los medios, y que si bien es una preocupación que en algunas escuelas ya se hacen, de enseñarles el inglés a los niños, también es una carga que la debe reconocer el Gobierno del Estado para cumplirla, no hagamos leyes, que no se cumplan en la realidad, no engañemos a

la ciudadanía y a los padres diciéndoles si nos preocupa que tu hijo venga bien capacitado, si nos preocupa que este bien preparado para la globalización, ya le pusimos una obligación al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública para que promueva la enseñanza del inglés, tenemos que ser congruentes, el impacto presupuestario y el impacto de la mejora regulatoria, si no de otra manera pues ¿a que estamos jugando en este Congreso?, gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. En el uso de la tribuna, en el mismo tema, el Diputado Eusebio Mesina Reyes.

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputado Presidente, hago uso de la tribuna para reconocer la iniciativa que presenta nuestro compañero Joel Padilla Peña creo que es una iniciativa muy importante, si bien es cierto que ya hay algunas escuelas que tienen esta asignatura, no la tienen la totalidad del sistema básico, la educación básica, pero también quise hacer uso de la voz para reconocer también, valga la redundancia, que está haciendo el Gobierno del Estado, es cierto que hay necesidades, es cierto que hay temas pendientes, pero también hay que reconocer la calidad de educación que se está dando. Yo quiero compartirles que recientemente la Organización Mexicana, que es una organización que ha estado muy encima de los maestros, que ha estado evaluando el sistema nacional y que permanentemente esta monitoreando ha calificado al Estado de Colima, como el tercer mejor estado en el tema educativo, eso habla pues, también del compromiso primero de los maestros que hay que reconocerles su trabajo y por supuesto el compromiso que tiene el Gobierno del Estado y bueno, creo que era importante mencionarlo, porque no se puede hablar de muchas deficiencia y estar bien sitiadas, en un buen lugar, evaluados por una organización como es Mexicanos Primero. Además, quiero agregar también que el día 8, estuvo aquí el Secretario de Educación, que nosotros aprobamos un punto de acuerdo en donde hicimos el exhorto para viniera a tocar algunas temáticas importantes y aquí estuvo, lamentablemente pues solamente estuvieron dos Diputados presentes, el Diputado Joel Padilla Peña y un servidor. Es cuanto Diputado Presidente.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien. En el mismo tema el Diputado Santiago Chávez Chávez, después del Diputado Santiago

Chávez Chávez, ¿alguien más desea hacer uso de la tribuna sobre el tema? Con esta participación cerramos la discusión para pasar a la votación del tema.

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. No, simplemente aclarando, yo creo que la Comisión de Mejora Regulatoria, para dejarlo asentado, interviene cuando estamos legislando sobre trámites y servicios para la sociedad, en el caso del idioma inglés, no lo vemos como un servicio es un derecho humano que todos los niños deben de tener en la educación pertinente. Es simplemente eso, muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la negativa.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, abstención.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, “yes all right”, a favor.
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, a favor.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo Diputado Presidente que emitieron 3 tres abstenciones del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura relativo a desechar la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, relativa a incluir en toda la documentación oficial, que expida el citado Ayuntamiento durante el 2017, “año 2017, edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez”. Tiene la palabra el Diputado José Adrián Orozco Neri.

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, del público que aún amablemente nos acompaña y de los

medios de comunicación. El dictamen No. 22……..……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

DICTAMEN NÚMERO 22 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÒN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A SOLICITAR LA ANUENCIA PARA INCLUIR EN TODA LA CORRESPONDENCIA OFICIAL QUE EXPIDA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÀLVAREZ, DURANTE EL AÑO 2017, LA INSCRIPCIÓN DE LA LEYENDA SIGUIENTE: "AÑO 2017, EDICIÓN 160 DE LOS FESTEJOS CHARROTAURINOS DE VILLA DE ÁLVAREZ".

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa solicitar la anuencia para incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento, durante el año 2017, la inscripción de la leyenda siguiente: "Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez"; de conformidad a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con fecha 26 de enero de 2017, presentaron a este Honorable Congreso del Estado la solicitud relativa a la anuencia para incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento, durante el año 2017, la inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez".

2.- Que mediante oficio No. DPL/946/017, de fecha 26 de enero del año 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., turnaron la solicitud en estudio a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S D E L A I N I C I A T I V A

I.- En la solicitud, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente:

“Es de considerable relevancia las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez, por su tradición e historia; han sido sus habitantes que generación tras generación han mantenido vivo el homenaje en honor al Santo Patrono San Felipe de Jesús. Desde el año 1857 que se realizan las fiestas villalvarenses en ésta única y especial plaza: "La Petatera", majestuosa plaza de toros que se levanta año tras año para albergar las fiestas charrotaurinas que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación

Es menester realizar un reconocimiento a tantos años de tradición y por ser las únicas fiestas en su tipo. Argumentos y sustentos hay suficientes para reconocer que las festividades villalvarenses proyectan las más tradicionales costumbres, cultura y peculiaridad en cada una de sus emblemáticas y artísticas representaciones.

Para conmemorar 160 años de tradición de los máximos festejos de Villa de Álvarez que han puesto el nombre del municipio y del Estado en nivel nacional e internacional con gran prestigio, sería honroso y meritorio reconocer lo tan significativo y distinguido que son las festividades del municipio de Villa de Álvarez, que promueven la cultura y el turismo, teniendo miles y miles de visitantes cada año. Por lo que se solicita al Honorable Congreso del Estado, la anuencia para incluir en toda la correspondencia Oficial que expida el Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, durante el año 2017 ,la inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez".

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/073/017, lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos con fecha 13 de febrero de 2017, al interior de la Sala de Juntas *“Gral. Francisco J. Mugica”*, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Educación y Cultura,

determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, consideramos que no es viable en los siguientes términos:

Previamente se decretó la redacción de la Leyenda que sería utilizada en el presente año que quedó como sigue: **"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima",** a efecto de que toda la correspondencia oficial del Estado, que a partir del día primero de enero del año 2017, que expidan los Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos **y los municipios**, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contener al calce, la leyenda en cuestión.

Por lo tanto, esta Comisión considera que debe ser respetado dicho decreto, máxime el motivo del mismo, y siendo facultad de este H. Congreso del Estado el establecimiento de dicha leyenda.

TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente:

En referencia al decreto No. 180, con fecha de aprobación del 15 de noviembre de 2016, entrando en vigor el día 1° de enero de 2017 y emitido por esta Quincuagésima Octava Legislatura, en el cual sustenta la importancia del reconocimiento al centenario de nuestras constituciones Federal y Local, rindiéndole el honor a dichos acontecimientos que sin duda nos formaron como Nación y deben la mayor evocación, por lo que su supremacía no permite ser sustituida.

Finalmente esta comisión reconoce la historia y tradiciones del Municipio de Villa de Álvarez, ya que son una de las más antiguas y con mayor presencia en nuestro estado, pero tampoco podemos hacer a un lado nuestras leyes supremas, las cuales nos rigen y nos formaron a lo largo de los años como el país que somos, motivo por el cual se decretó que los Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contener al calce dicha leyenda, que ya se encuentra utilizada en los órganos referidos anteriormente.

D I C T A M E N No. 22

ÚNICO: Se desecha la iniciativa de solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, relativa a la anuencia para incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento, durante el año 2017,

la inscripción de la leyenda siguiente: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez”.

La comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.

A T E N T A M E N T E
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017

COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Dip. Joel Padilla Peña
Presidente

Dip. Federico Rangel Lozano
Secretario

Dip. José Adrian Orozco Neri
Secretario

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la negativa.

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa.
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavidez a favor.
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, si,
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa.
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 veintitrés votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra al documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, y a fin de conceder el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación, recordándoles que para el caso de quien vaya a presentar iniciativa de ley, decreto o acuerdo con base en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, deberán presentarlas por escrito y en medio electrónico, para efectos de que se turnen a la Comisión correspondiente. ……. Con fundamento en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito al Diputado José Adrián Orozco Neri, me supla en la presidencia para que el suscrito haga uso de la palabra.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés.

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados, integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña aún, amigos de los medios de comunicación. ……INICIATIVA DE DECRETO PARA CREAR COMISION LEGISLATIVA PARA, CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE EX FUNCIOARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES.

Los suscritos Diputados **Nicolás Contreras Cortés**, **Javier Ceballos Galindo y Luís Ayala Campos** integrantes del Grupo Parlamentario **"Nuestro Compromiso por Colima"**, con fundamento en la fracción I, del artículo 22; la fracción I del artículo 83 y la fracción III del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con **Proyecto de Decreto para crear una comisión legislativa especial de seguimiento a la denuncia penal presentada en contra de exfuncionarios del Gobierno del Estado de Colima,** lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un tema de permanente vigencia en el contexto local ha cobrado renovada relevancia durante la última semana con motivo de la presencia pública del Licenciado Mario Anguiano Moreno, quien fuera Gobernador del Estado de Colima en la pasada administración de gobierno. Diversos actores se dieron a la tarea de condenar su participación en un acto público, considerado un festejo tradicional de los colimenses; otros más aprovecharon la ocasión para denostar a las instituciones y a quienes se encuentran al frente de las mismas.

El 1º de octubre de 2015, en la primer sesión ordinaria de esta Legislatura el suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés señalé que una de las prioridades del Congreso debería ser la de atender el clamor social que exige se investiguen las causas del desfalco financiero del Estado, se transparenten los resultados, se reparen los daños y se sancione a los responsables del saqueo a las arcas estatales, este pronunciamiento ha determinado la posición del suscrito en torno a este tema, resultando congruente con la actuación que he tenido hasta la fecha.

Desde que asumimos la honrosa representación que nos permite ahora hacer uso de esta Tribuna, hemos precisado nuestra posición respecto a la actuación de algunos integrantes de la anterior administración de gobierno, particularmente de quien tuvo la más alta responsabilidad dentro de la misma. Invariablemente hemos formulado señalamientos que se relacionan con el estado en que se dejó al gobierno local, en detrimento de los colimenses y hemos solicitado se realicen acciones tendientes a determinar la existencia de posibles desvíos de recursos o actos de corrupción. Siempre presentamos propuestas concretas que hacen patente nuestro interés en el tema y que resultan congruentes con una efectiva política de rendición de cuentas, tan anhelada por la población.

Precisamente en ese contexto, una de nuestras primeras acciones como integrantes de esta Legislatura fue promover que se realizara una exhaustiva auditoría a la administración del Licenciado Mario Anguiano, solicitud que también fue sustentada por el Licenciado Ramón Pérez Díaz, quien fungiera como Gobernador Interino del Estado. Luego, el 26 de agosto del año pasado,

presentamos a este Pleno una iniciativa de Acuerdo para formular un exhorto al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, a efecto de que informara a esta Soberanía el avance de la auditoría excepcional realizada al Gobierno del Estado.

El 6 de octubre de 2016, el primero de quienes suscribimos este documento presentó una iniciativa de acuerdo, tendiente a lograr que esta Asamblea formulara un exhorto al Titular del órgano local de fiscalización, para que concluyera los trabajos de la auditoria excepcional practicada a la anterior administración estatal. Posteriormente suscribimos, siendo entonces integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diversos documentos fechados el 4 y 8 de diciembre de 2016, para la fiscalización de la pasada administración de gobierno, así como para exhortar al titular de Poder Ejecutivo para que interpusiera una denuncia penal en contra del anterior Gobernador del Estado; también, para que solicitara una revisión de situación financiera excepcional por 638 millones de pesos, contratados por el Ejecutivo del Estado para refinanciar los pasivos contraídos con la banca privada, cifra a que se refiere el Decreto 565 emitido por esta propia Legislatura.

El 08 de junio de 2016, presentamos una iniciativa de Acuerdo para que el representante jurídico del Congreso formulara una denuncia en contra del Licenciado Mario Anguiano Moreno y de funcionarios de su administración, por conductas que se derivan del resultado de la Revisión EXCEPCIÓN/01/2016; así también se propuso integrar una comisión especial para dar seguimiento a la denuncia penal que se interpusiera como consecuencia de la propia iniciativa y de igual manera para solicitar el embargo precautorio de bienes de los mencionados exfuncionarios. Es conveniente mencionar que dicha iniciativa fue retirada por los suscritos, ante la intervención en ese sentido de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El 8 de diciembre de 2016, presentamos una iniciativa de Acuerdo para convocar a los integrantes de las Comisiones de Responsabilidades y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como al Auditor Superior del Estado, para que recibieran las inquietudes externadas por los representantes de cámaras y asociaciones de empresas e instituciones de las tecnologías de información y comunicación, en el propósito de atender sus dudas e inquietudes, vinculadas con la adquisición de servicios de suministro, desarrollo, instalación, implementación, asesoría y capacitación de un sistema de armonización contable, operación considerada irregular. Nuestra acción fue en apoyo al citado gremio y se dio en el propósito de auspiciar las acciones de fiscalización en un plano de independencia y legalidad tendiente a hacer efectivos los principios básicos de una política de rendición de cuentas.

Estos son solamente algunos de los casos en que los suscritos hemos realizado acciones responsables, concretas, efectivas y palpables, cuyo propósito no es otro que sustentar la petición de un gran número de miembros de la sociedad colimense, que solicitan se determine si el ejercicio de los recursos públicos a

cargo de la anterior administración de gobierno de nuestra entidad fue correcto o no, y en el segundo de los casos, se proceda a reparar el daño causado y a sancionar a quienes pudieran haberlo cometido.

Los resultados de nuestra gestión a este respecto son de sobra conocidos por quienes integramos esta Legislatura y por la población en general; entre ellos podemos contar la conclusión de la auditoría especial, la presentación de una denuncia penal por parte de este H. Congreso, la instauración de procedimientos ante la Comisión de Responsabilidades de esta propia Soberanía. Todos ellos se encuentran actualmente a cargo de instancias a las que somos ajenos y cuyo desempeño seguramente habrá de traducirse en los resultados que todos esperamos; corresponde legalmente a dichas instancias el trámite y resolución de las denuncias y procesos de los que conocen en razón de su competencia y confiamos en que en su actuación habrán de ceñirse a la normatividad que rige en cada uno de estos casos.

Por nuestra parte, habremos de continuar en la posición irreductible de exigir se lleven hasta las últimas consecuencias las acciones que tiendan a lograr un manejo sano de las finanzas públicas, la investigación de posibles irregularidades y la aplicación de sanciones a quienes se hubieran apartado de un recto proceder en su actuación como servidores públicos. Sostenemos la convicción de que esta aspiración la compartimos con la generalidad de quienes integran la presente Legislatura, porque advertimos la disposición que anima a nuestros compañeros Diputados en torno a estos temas.

Por tal motivo y ante las condiciones imperantes en cuanto a los procedimientos instaurados con motivo de las acciones antes descritas, consideramos conveniente se brinde una atención continua a tan importantes temas, particularmente a la evolución del proceso penal incoado a partir de la denuncia presentada por este H. Congreso, situación que nos anima a sustentar la presente iniciativa mediante la cual nuevamente se propone integrar una comisión legislativa especial para dar seguimiento a la denuncia penal a que se alude anteriormente, dotándola de facultades para proponer a esta Asamblea todos los Acuerdos necesarios para el buen proceder de las autoridades que conocen del asunto mencionado. De aprobarse la constitución de este órgano legislativo, estaría integrado por los presidentes de las Comisiones de Responsabilidades, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quienes fungirían como Presidente y Secretarios, respectivamente, así como los coordinadores de los grupos parlamentarios y los Diputados únicos de partido.

Presentamos esta propuesta en el ánimo de contribuir a mejorar las condiciones que prevalecen en cuanto al ejercicio del gobierno en nuestra entidad y particularmente de la función pública, en la inteligencia de que permaneceremos atentos a acciones específicas que promuevan nuestros compañeros legisladores y que tengan este mismo propósito, de consolidar la cultura de la rendición de cuentas, en el ánimo de apoyar todas aquellas que tiendan a combatir de manera

efectiva la corrupción y atender los reclamos sociales más sentidos. Estaremos, compañeros Diputados, prestos a participar en esta cruzada, de acuerdo a los planteamientos formales que se ventilen en esta Tribuna.

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de

A C U E R D O :

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación e integración de una Comisión Legislativa Especial para dar seguimiento a la denuncia penal interpuesta por este propio Congreso, en contra de los CC. Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, presuntos responsables de conductas ilícitas en detrimento de la hacienda estatal, integrada por los presidentes de las Comisiones de Responsabilidades; de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quienes fungirán como Presidente y Secretarios, respectivamente, así como los coordinadores de los grupos parlamentarios y los diputados únicos de Partido.

SEGUNDA.- La Comisión Legislativa Especial a que se refiere el punto anterior contará con las facultades necesarias para dar seguimiento a la denuncia penal a que se refiere este documento, así como para proponer a esta Asamblea todos los Acuerdos necesarios para el buen proceder de las autoridades que conocen de la misma.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente.
Colima, Colima a 14 de febrero de 2017.
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA”

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

JAVIER CEBALLOS GALINDO **LUÍS AYALA CAMPOS**

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Señoras y señores Diputados en virtud de la petición hecha por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, y por las razones por él expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si de aprobarse el documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la afirmativa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor.
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor.
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor.

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor.
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor.
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa.
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, a favor.
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, si.
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor.
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, a favor.
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Lety Zepeda, a favor.
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor.
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor.
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor.
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor.
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor.
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri a favor.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña Lara.

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, saludo con respecto a mi compañera y compañeros de la Mesa Directiva, a mis compañeras y compañeros Diputados aquí presentes, al público que nos acompaña y por supuesto a los amigos y amigas de los medios de comunicación. …….INICIATIVA DE EXORTO AL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, PARA RECONSIDRE EL CAMBIO DE NOMBRE DEL LIBRAMIENTO GRISELDA ALVAREZ Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

CC. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E

Los suscritos Diputados **HÉCTOR MAGAÑA LARA** y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como de los Diputados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III; y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez a fin de que se reconsidere el cambio de nombre del tramo poniente del Libramiento Griselda Álvarez Ponce de León.

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Los municipios, como entidades administrativas dotadas de autonomía constitucional, poseen el privilegio de autodeterminarse, de elegir, por medio de un cabildo, las acciones que tiendan a mejorar las condiciones de su pueblo. Luego entonces, la autonomía municipal resulta un principio constitucional de alta responsabilidad para su ejercicio.

Como sabemos, los nombres de las calles y avenidas, son facultad propia de los Ayuntamientos, se otorgan para recordar y darle identidad a un municipio, para que con el tiempo, esas arterias viales formen parte de nuestro patrimonio histórico, por ello, la nomenclatura de las calles y avenidas es un tema que el Ayuntamiento debe ejercer con responsabilidad, con alta responsabilidad histórica porque no debe ser sujeta a caprichos momentáneos.

El cambio de nombre del tramo poniente del Libramiento denominado Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León, realizado por el Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez resultó por demás lamentable.

Una decisión que, a juicio de muchos villalvarenses, y de muchos colimenses en general, fue muy irresponsable al quitarle el nombre a esa vialidad, de la mujer colimense más destacada a nivel internacional y nacional, una mujer que sin duda, es un referente de Villa de Álvarez.

Como villalvarense, me siento muy decepcionado con la decisión del Cabildo, y que no quede duda, reconozco en la Petatera una tradición histórica de nuestro Villa de Álvarez, un monumento artístico que debe perdurar en el tiempo, sin embargo, también debe reconocerse, lo emblemático que resulta para Villa de Álvarez, por el solo nombre del municipio, la señora Griselda Álvarez.

Pudieron haber nombrado “La Petatera” a un edificio público, a una calle al interior de la municipalidad, en fin, de existir miles de opciones para darle realce a nuestra monumental Petatera, recurrieron a lo más sencillo y a lo más discutido. Eso es lo lamentable.

El cambio de nombre de las vialidades no debe ser sometido sin un análisis previo, sin darle participación a la gente, a nuestra gente. Considero, señoras y señores, que debemos hacer hincapié en que los Ayuntamientos regulen, por conducto del Cabildo, el procedimiento para cambiar de nombre una vialidad, que se garantice que se llevará a cabo un proceso de análisis y de consulta popular, para que con ello, se tomen en cuenta todas las opiniones y no dejemos al arbitrio de unos cuantos, algo tan importante que nos garantiza identidad como pueblo.

Y que quede claro. No se trata de politizar nada como algunas voces ya lo han querido manifestar, tampoco se trata de hipocresías, se trata de evitar caprichos, se trata de que nuestras calles posean, con su nombre, tradición histórica, se trata de identidad, se trata de ejercer el poder con responsabilidad. Solo eso. Ejercer el poder con responsabilidad.

Señoras y señores, por ello, dejamos a su consideración el siguiente Punto de:

A C U E R D O

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a que reconsidere, por conducto del Cabildo municipal, el cambio de nombre que sufrió el Libramiento denominado Griselda Álvarez Ponce de León, en su tramo correspondiente de la Avenida J. Merced Cabrera hasta la Avenida Pablo Silva García y que ahora se denomina “Avenida la Petatera”.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a la autoridad municipal exhortada.

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.

A T E N T A M E N T E
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, ASI COMO LOS DIPUTADOS UNICOS DE LOS PARTIDOS DEL PT, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO

DIP. JOEL PADILLA PEÑA

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ

DIP. EUSEBIO MESINA REYES

DIP.JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.- Me gustaría también si me lo permite compañero Presidente, poder anexar una pequeña reseña de la señora Griselda Álvarez Ponce de León para que se pueda anexar a este punto de acuerdo y que

de aprobarse el exhorto se le pueda agregar también esta reseña al Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Héctor Magaña Lara, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que, hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la Diputada Martha Sosa.

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. He pedido hacer uso de la voz, a título personal, pudiera ser que no sea toda la coincidencia con mi grupo parlamentario, pero lo hago por dos razones. La primera, la figura de Griselda Álvarez Ponce de León, ya está en el reconocimiento no nada más de Colima, sino de todo México, porque nadie le va a quitar haber sido la primer mujer en gobernar Colima, y eso es un orgullo para todas y para todos y digo, de manera especial a las mujeres, pero decir que en Colima tuvimos a la primera gobernadora es motivo de orgullo aquí y en cualquier escenario. Por lo tanto, el que aún tramo de una avenida, se le cambie el nombre de ella, no es en detrimento, no es en demerito, el valor de la señora esta mucho más allá de que pongamos su nombre en todas las calles. Yo invitaría al Diputado de Villa de Álvarez, para que lo vea en ese ánimo, en esa visión que no lo sienta como una ofensa lo que ha hecho el Cabildo de Villa de Álvarez. Tenemos que recordar también y ese es el otro aspecto, que el municipio es libre, que tiene una autoridad propia que lo rige, la decisión no fue de una persona, no fue de la Presidencia Municipal, fue de todo un Cabildo, y la gente, le va a reclamar o le va a reconocer al cabildo, lo bueno y lo malo que haga. A nosotros como Diputados no nos queda estarnos molestando o preocupando porque le cambian un tramo, el nombre a un tramo de una gran avenida. Y mientras el ayuntamiento no incumpla la ley, mientras no violente el Estado jurídico, nosotros no tenemos por que preocuparnos, tenemos que dejarlos ser. Cada instancia tiene su responsabilidad. Nuestro compromiso es cumplir y hacer cumplir la ley, el ayuntamiento no esta violentando en ninguna normatividad para hacerle este exhorto, para hacerle este llamado de atención. Fíjense ustedes ya no recuerdan o no quieren recordarlo,

ese tercer anillo, ha cambiado mucho de nombre; hubo un tiempo en que el ayuntamiento de Villa de Álvarez, a la parte que pasaba por Villa de Álvarez, le puso Manuel J. Clutier, y luego llega otro ayuntamiento y le quita ese nombre y le pone Miguel de la Madrid, finalmente hoy creo que se conoce como paseo de los gobernadores o avenida de los gobernadores; incluso creo que en alguna ocasión le pusieron Fernando Moreno Peña, no discutamos, no perdamos el tiempo en esas cuestiones estériles, el Maquio como Griselda Álvarez, están más allá del bien que del mal, su recuerdo, su aportación a México, su entrega como hombre y mujer que ofrendó su trabajo su dedición para el bien de los demás, ahí está incólume y el que un tramo de una gran avenida cambie por un aspecto tradicional de festejos charrotaurinos, no tiene porque molestarnos ni preocuparnos ni mucho menos andar mandando un exhorto para una autoridad municipal que en su ley orgánica es libre totalmente, no lo olvidemos. Eso es lo que yo diría, yo creo que no tiene caso seguir hablando del tema. Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. ¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Héctor Magaña Lara, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Martha Meza.

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Presidente Diputado. Con su permiso, compañeras y compañeros Diputados, publico que nos acompaña, medios de comunicación. Voy a presentar una iniciativa de decreto que reforma el párrafo VI, fracción I, del artículo 86 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y reforma la fracción III del artículo 260 del Código Electoral del Estado…….. INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO PARA REFORMAR LA CONSTITUCION ESTATAL Y EL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 86 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA; Y REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO.

La que suscribe, Diputada única del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 Fracción I, 83 Fracción I, y 84 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto por la cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado y del Código Electoral, misma que se presenta de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discriminación de la mujer ha sido una realidad constante y observable a través de la historia de la humanidad.

Durante siglos, el género femenino ha sufrido las consecuencias de vivir en una sociedad donde, en tiempos pasados, se consideraba que la mujer no tenía el talento, las capacidades y las cualidades de un hombre; es decir, en los hechos no se le reconocía como un ser humano con derechos plenos.

Largo y arduo ha sido el camino de la mujer para buscar la igualdad frente al hombre, y con esto, el reconocimiento formal y real de que ella también debe ser beneficiaria de los derechos humanos. No es exagerado afirmar que tanto en el ámbito económico, como en lo político y social, es el hombre quien ha tenido históricamente una posición de privilegio.

Y en esta búsqueda de igualdad la Organización de la Naciones Unidas (ONU) ha ejercido un papel trascendental desde su nacimiento en el año de 1945, para la definición, conformación y aprobación de un marco jurídico internacional de protección y defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos políticos como un elemento fundamental de los derechos humanos.

En ese mismo año de 1945 se firmó la denominada “Carta de San Francisco”, en la cual se estableció el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito de los derechos humanos, con lo que se prohibía toda discriminación basada en el sexo.

Otros instrumentos jurídicos a nivel internacional en la materia de derechos humanos que significaron grandes avances, son los siguientes:

a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos;
b. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
c. La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer;
d. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.

Asimismo, nuestra Constitución Federal en su artículo primero garantiza y reconoce los derechos humanos para todas las personas.

Por otra parte, la política ha sido uno de los espacios en los que se han expresado y se siguen manifestando aspectos de desigualdad y desequilibrio entre mujeres y hombres.

Si bien es cierto que desde el año 1953 le fue reconocido a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser electas, es hasta principios de la década de los 90´s del siglo pasado que se iniciaron un conjunto de reformas en materia electoral impulsando la paridad de género, y que culminaron con la reforma política electoral de 2014.

Pero a pesar de que en el orden jurídico a nivel internacional, nacional y estatal, las mujeres ya gozamos de una igualdad formal de derechos frente al hombre, en la actualidad esto no se ha materializado en lo que se pretende alcanzar a través de la paridad de género: no solo la posibilidad de la presencia en los comicios, sino también su participación, en términos de igualdad, en el ejercicio de los cargos públicos.

En este sentido, es muy reveladora la integración que ha tenido el Congreso del Estado a través de los años. Por ello es importante analizar los datos que a continuación se exponen:

LEGISLATURA	PERIODO	DIPUTADOS (HOMBRES)	DIPUTADAS (MUJERES)
XLII	1967-1970	6	1
XLIII	1970-1973	6	1
XLIV	1973-1976	6	1
XLV	1976-1979	6	1
XLVI	1979-1982	7	2
XLVII	1982-1985	8	1
XLVIII	1985-1988	12	1
XLIX	1988-1991	14	3
L	1991-1994	17	3
LI	1994-1997	17	3
LII	1997-2000	16	4

LIII	2000-2003	22	3
LIV	2003-2006	21	4
LV	2006-2009	19	6
LVI	2009-2012	20	5
LVII	2012-2015	19	6
LVIII	2015-2018	16	9

Con esta información podemos apreciar que durante 17 Legislaturas Locales, es decir, en 51 años, ha habido 232 diputados hombres, y solo 54 diputadas mujeres; lo que refleja un desequilibrio total en su integración favorable a los hombres.

Lo que es más grave señalar es que estas inequidades se siguen presentando en años recientes: en la Legislatura LIII (2000-2003) hubo 22 hombres y 3 mujeres; en la LIV (2003-2006) 21 hombres y 4 mujeres; en la LV (2006-2009) 19 hombres y 6 mujeres; en la LVI (2009-2012) 20 hombres y 5 mujeres; y en la LVII (2012-2015) 19 hombres y 6 mujeres. Además, es obvio señalar que ese desequilibrio en la integración del Congreso del Estado no solo es histórico sino que en la actualidad se mantiene en la presente Legislatura LVIII (2015-2018), 16 hombres y 9 mujeres.

Con todo lo antes descrito, es evidente que pese al reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres, en los hechos, los resultados siguen siendo desfavorables, por lo que es necesario establecer aquellos mecanismos legales que aseguren el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular de manera efectiva e igualitaria, pues como lo ha señalado la Sala Superior del TRIFE “La esencia de la cuota de género es alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y se debe reflejar tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo.”

Por lo tanto, es necesario incorporar en nuestra Constitución Política del Estado, así como en el Código Electoral, aquellas acciones afirmativas que nos permitan disminuir la desigualdad e inequidad histórica en la conformación del Congreso Local.

Precisamente, el propósito de la presente iniciativa es contribuir a lograr que la paridad de género en el Poder Legislativo local deje de ser mera aspiración y se convierta en una realidad.

Por último, debido a que la representación proporcional en el Congreso del Estado es número impar (nueve) y existe imprecisión en la redacción del texto vigente en la Constitución Política del Estado, se propone corregir lo antes señalado.

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 86 BIS, Fracción I, Párrafo Sexto, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de junio del año que corresponda, conforme a las siguientes bases:

I. ….

….

….

….

….

Para este último fin, deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa; tratándose de cargos de diputados por el principio de representación proporcional, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán incluir más del 50% de un mismo género**, salvo el caso de número impar, que se efectuará con base en un porcentaje equivalente. En la integración del Congreso del Estado, el Instituto Electoral llevará a cabo las acciones necesarias para garantizar la paridad de género, al realizar la asignación de las diputaciones de representación proporcional.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el Artículo 260, Fracción III del Código Electoral del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 260.- Para la asignación de diputaciones se observará el procedimiento siguiente:

I a la II ….

III. Todas las asignaciones seguirán el orden que los candidatos a diputados plurinominales tengan en las listas respectivas. **En el caso que el género que corresponda conforme a la lista no garantice la paridad de género en la integración del Congreso, el Instituto Electoral del Estado tendrá la obligación de llevar a cabo la sustitución respectiva de acuerdo con el orden de prelación de la lista de cada partido que tenga derecho a la asignación de diputaciones de representación proporcional.**

TRANSITORIO

UNICO: EL presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa se someta a discusión y, en su caso, aprobación, en el plazo indicado por la ley, turnándola a la Comisión correspondiente para su análisis y dictaminación.

ATENTAMENTE
Colima, Col. a 20 de Febrero de 2017

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON

DIPUTADO PRESIDENTE, JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo.

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, medios de comunicación, público que nos acompañan…….INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, PARA QUE ENTREGUE LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE LE ADEUDAN A LA CRUZ ROJA MEXICANA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El Diputado **OCTAVIO TINTOS TRUJILLO**, así como los demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La Cruz Roja Mexicana es una institución que se originó en virtud de la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación a todos los heridos en los campos de batalla. Institución que se esfuerza en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias, y tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar la persona humana.

La Cruz Roja Mexicana no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Es una institución que se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. Siendo un Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

En ese sentido, la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima brinda sus servicios los 365 días de año en el Estado, actuando de forma inmediata en situaciones de desastres, acudiendo en auxilio de quien lo necesite sin costo alguno para quien recibe el servicio.

La cobertura de sus servicios de emergencia en el Estado abarca los Municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán. Dicha Delegación cuenta aproximadamente con 220 voluntarios y voluntarias, siendo su equipo principal 6 ambulancias, incluida una de rescate.

En ese orden de ideas, la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima en información que proporcionó a los suscritos iniciadores, señaló que para operar financieramente su gasto mensual fijo es del orden de $700,000 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

Durante el año 2016, la Cruz Roja en el Estado brindó los siguientes servicios de emergencia:

- Para el Municipio de Colima: 8,220 servicios.
- Para el Municipio de Villa de Álvarez: 3,136 servicios.
- Para el Municipio de Comala: 238 servicios.
- Para el Municipio de Cuauhtémoc: 196 servicios.
- Para el Municipio de Coquimatlán: 274 servicios.
- Para los Municipios de Minatitlán / Ixtlahuacán: 77 servicios.

Por lo que la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima prestó un total de 12,141 servicios en el año 2016.

La referida Delegación señaló que el costo de cada servicio es de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por lo que en el año 2016 realizó una erogación de $5´463,450.00 (cinco millones cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), solo en servicios prestados; los cuales se desglosan de la siguiente manera:

- Para el Municipio de Colima: $3`699,000.00 (tres millones seis cientos noventa y nueve mil pesos 00/100).
- Para el Municipio de Villa de Álvarez: $1´411,200.00 (un millón cuatrocientos once mil doscientos pesos 00/100 M.N.).
- Para el Municipio de Comala: $107,100.00 (ciento siete mil cien pesos 00/100 M.N.).
- Para el Municipio de Cuauhtémoc: $88,200.00 (ochenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.).

- Para el Municipio de Coquimatlán: $123,300 (ciento veintitrés mil trescientos pesos 00/100 M.N.).
- Para los Municipios de Minatitlán / Ixtlahuacán: $34,650.00 (treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Para subsistir la Cruz Roja requiere apoyos económicos como son la Colecta anual, traslados programados, cursos de capacitación externos, programas los "mil amigos" de Cruz Roja, así como la importante aportación de algunos Municipios y sobretodo del Gobierno del Estado.

Así las cosas, la referida institución manifestó que el Municipio de Colima se comprometió a apoyar, durante el año 2016, con $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, cantidad que no ha cambiado desde hace tres años.

El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez se comprometió a aportar, durante el año 2016, la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, apoyo que ha sido el mismo durante los últimos seis años.

Por su parte el H. Ayuntamiento de Comala se comprometió a aportar, durante el año 2016, la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales.

Pese a lo anterior, la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima expuso a los iniciadores que al 3 de febrero de 2017, los H. Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez solo les han entregado el apoyo económico de los meses de enero a junio de 2016. Siendo el Municipio de Comala el único que ha cumplido a cabalidad su compromiso. Por lo que al H. Ayuntamiento de Colima le falta por entregar por concepto de apoyo económico a la Cruz Roja Colima por los meses de julio a diciembre de 2016, la cantidad de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 M.N.); y al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez la suma de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

En ese sentido, los suscritos iniciadores consideramos necesario que esta Soberanía exhorte atenta y respetuosamente a los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, por conducto de sus titulares, con la finalidad de que informen de manera fundada y motivada a este H. Poder Legislativo el motivo por el cual no se le ha otorgado a la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima el apoyo económico que se acordó para el año 2016, correspondiente a los meses de julio-diciembre. En caso de contar con la suficiencia presupuestal se les exhorta atenta y respetuosamente para que entreguen el apoyo pactado de los meses de julio-diciembre a la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima, que en el caso del H. Ayuntamiento de Colima asciende a la cantidad de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 M.N.), y en el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez a la cantidad de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima señaló que los H. Ayuntamientos de Cuauhtémoc y Coquimatlán no han dado respuesta a las solicitudes de apoyo que cada año les han presentado. Lo anterior, en violación al

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que establece el derecho de petición, el cual obliga a cualquier servidor público a responder las peticiones que le sean formuladas por escrito, de manera pacífica y respetuosa.
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se exhorta atenta y respetuosamente a los H. Ayuntamientos de Cuauhtémoc y Coquimatlán por conducto de sus titulares, para que en futuras ocasiones otorguen puntual respuesta a las solicitudes de apoyo económico que les realice la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

P U N T O D E A C U E R D O

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente a los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, por conducto de sus titulares, con la finalidad de que informen de manera fundada y motivada a esta Soberanía el motivo por el cual no se le ha otorgado a la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima el apoyo económico que se acordó para el año 2016, correspondiente a los meses de julio-diciembre. En caso de contar con la suficiencia presupuestal, se les exhorta atenta y respetuosamente para que entreguen el apoyo pactado de los meses de julio-diciembre a la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima, que en el caso del H. Ayuntamiento de Colima asciende a la cantidad de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 M.N.), y en el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez a la cantidad de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta atenta y respetuosamente a los Ayuntamientos de Cuauhtémoc y Coquimatlán, por conducto de sus titulares, para que en futuras ocasiones otorguen puntual respuesta a las solicitudes de apoyo económico que les realice la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima.

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, para que por su conducto se comunique lo dispuesto en el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para los efectos legales correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 15 DE FEBRERO DE 2017
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO	
FEDERICO RANGEL LOZANO	**SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ**
HÉCTOR MAGAÑA LARA	**JUANA ANDRÉS RIVERA**
EUSEBIO MESINA REYES	**JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN**
GRACIELA LARIOS RIVAS	**JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI**
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN	**JOEL PADILLA PEÑA**

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Joel Padilla Peña, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Santiago Chávez Chávez.

Se decretó un receso. Siendo las 21:27 veintiún horas con veintisiete minutos se reanudó la sesión.

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con el permiso Diputado Presidente integrantes de la Mesa Directiva…….. INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAREL ARTICULO 272 Y 276 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA……..

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El Diputado **SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ**, así como los demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual se reforman el artículo 272, párrafo primero y 276 del Código Civil para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

El procedimiento de divorcio sin expresión de causa, fue concebido como un medio efectivo para eliminar conflictos en el proceso de disolución del matrimonio y respetar el libre desarrollo de la personalidad.

Se trata de un procedimiento sumario, regido por los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal.

Esto es, se trata de un procedimiento cuya naturaleza es lograr la satisfacción efectiva, rápida e inmediata del deseo de un consorte de ya no seguir casado.

Dicha figura jurídica atendió a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, establecida en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que con la simple manifestación de voluntad de uno solo de los cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En ese sentido, en el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.

La figura jurídica en comento fue incorporada en el Código Civil para el Estado de Colima en el artículo 272, en el cual se estableció:

> ***ART. 272.-*** *Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, la mujer no se encuentre en estado de gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos sean mayores de edad y no exista obligación alimentaria, y no se encuentren bajo el régimen de tutela; y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen contrajeron matrimonio****, y haya transcurrido un año o más de la celebración del mismo****, se presentarán personalmente ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y en los formatos autorizados, que son casados, manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.*
>
> *El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a*

los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la ratificación, el oficial del Registro Civil los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente del matrimonio anterior.

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de edad, o que la mujer se encuentra en estado gravidez, o que teniendo hijos mayores de edad, éstos se encuentran bajo el régimen de tutela, o son acreedores alimentarios y no han liquidado su sociedad conyugal, y entonces aquellos sufrirán las penas que establezca el Código de la materia.

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores párrafos de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles.

(Lo resaltado es propio.)

En el artículo trascrito se estableció que para poder estar en aptitud de promover el divorcio sin expresión de causa es necesario, entre otras cosas, que haya transcurrido un año o más desde la celebración del matrimonio.

Sin embargo, el día viernes 03 tres de febrero de 2017 dos mil diecisiete se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis: PC.I.C. J/42 C (10a.), que lleva por rubro: DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO CUANDO MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES INCONSTITUCIONAL.

Dicha jurisprudencia inicio su vigencia de obligatoria el día martes 07 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en la cual se estableció que el considerar como requisito *sine qua non* para la promoción del divorcio sin expresión de causa que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del matrimonio es violatorio del Derecho Humano al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que esperar el transcurso de un año constituye una restricción indebida al desconocer el Derecho Humano al libre desarrollo de la personalidad, como especie de la dignidad humana; además porque no respeta la autonomía de la libertad de uno o de ambos cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unido en matrimonio. Violación que se concreta porque el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, en cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada individuo elija, así como impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida.

Así las cosas en virtud del nuevo razonamiento interpretativo de la figura jurídica del divorcio sin expresión de causa realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en estricto respeto y tutela al Derecho Fundamental al libre desarrollo a la personalidad y a la autonomía de la libertad de los cónyuges; es que los suscritos iniciadores proponemos la eliminación en el Código Civil para el Estado de Colima del requisito *sine qua non* del transcurso de cuando menos un año desde la celebración del matrimonio, para poder accionar el procedimiento de divorcio sin expresión de causa. Por lo que se propone la reforma al artículo 272, párrafo primero del Código Civil para el Estado de Colima.

En el mismo sentido, se propone la reforma al artículo 276 del citado ordenamiento sustantivo civil que establece:

> *ART. 276.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de que el divorcio no hubiere sido decretado.* ***No podrán volver a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento sino pasado un año desde su reconciliación.***
>
> (Lo resaltado es propio.)

Puesto que el artículo transcrito, establece la misma disposición violatoria del Derecho Humano al libre desarrollo de la personalidad, como especie de la dignidad humana; además porque no respeta la autonomía de la libertad de ambos cónyuges de decidir, voluntariamente, no seguir unidos en el matrimonio. Lo anterior al establecer el plazo de un año desde la reconciliación de los cónyuges para promover el divorcio por mutuo consentimiento.

Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

D E C R E T O

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 272 y el 276 del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera:

ART. 272.- Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, la mujer no se encuentre en estado de gravidez, y no tengan hijos o, teniéndolos, éstos sean mayores de edad y no exista obligación alimentaria, y no se encuentren bajo el régimen de tutela; y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen contrajeron matrimonio, se presentarán personalmente ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas, firmadas en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada y en los formatos autorizados, que son casados, manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.

…

…

…

ART. 276.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, con tal de que el divorcio no hubiere sido decretado.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 07 DE FEBRERO DE 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO

_____
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ

_____ _____
FEDERICO RANGEL LOZANO **JUANA ANDRÉS RIVERA**

_____ _____
HÉCTOR MAGAÑA LARA **EUSEBIO MESINA REYES**

_____ _____
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES **GRACIELA LARIOS RIVAS**

FLORIÁN

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO	**JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI**
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN	**JOEL PADILLA PEÑA**

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Gaby Sevilla.

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de presentar, de dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo que voy a presentar, yo si quisiera tocar un punto y es sobre la importancia del respecto. El respeto dice que es la posibilidad de construir una mejor sociedad, en la que la violencia, la agresión, la discriminación o el abuso no existen, también tiene que ver con cumplir reglas de convivencia social que hacen un completo desarrollo del bienestar social, es importante respetar las leyes y las normas establecidas por la sociedad. Y ¿Por qué lo digo?, hace unos momentos que inició el, asuntos generales, pues hicimos una fila, hicimos una fila para pasar y anotarnos los que íbamos a presentar un punto de acuerdo y la fila, la importancia de hacer una file, dice que las personas se ubican con ordenamiento en determinado lugar, a la espera de recibir algo o entrar a algún sitio que te toque pues tu turno, a primera vista, dice que ahí se cumple el principio de la fila, pero además, permitir el respeto de ese orden, de llegada para ingresar o recibir algún beneficio. También se relaciona con muchos otros trámites de aspectos de la vida social, que tiene este mecanismo ritual, su manera de ejecutarse por excelencia, verdad. Sería, es un orden que da una persona alterna, en la realización de una actividad quien toma esa lista, bueno, pues debe de procurar que esa lista se respete y no brinquemos y lo digo, porque creo que somos un congreso, aquí hablamos, aquí legislamos a favor de leyes, hacemos propuestas, para que otros las cumplan, nosotros hacemos las propuestas, habrá gente que la va a ejecutar, y no es con el afán de molestar, ya lo había comentado en la sesión pasada, simplemente que nos digan cómo vamos a jugar, que nos digan, mira, te vas a

anotar y de manera aleatoria vamos escogiendo y lo veremos que turno te toca, ahí ya es diferente, yo creo que las reglas del juego se tienen que decir, se tienen que hablar, para ver cómo vamos a trabajar. Desgraciadamente en el Reglamento no existe, creo que esto es una cuestión de orden, aquí hay muchas personas que se dedican, trabajan dentro de la educación y creo que es una cuestión que se educa, se dice como se tiene que trabajar, un ordenamiento, entonces, como tal, a mi me gusta que seamos muy claros, que nos digan cómo le vamos a hacer, y si no pues para que nos paramos pronto y nos hacemos nuestra filita, muy acomodados, con mucho orden, cuando finalmente cada quien se maneja de manera aleatoria. Entonces por eso no quería dejar pasar pues esta oportunidad, estoy aquí en tribuna, y pues esto si seguimos así, pues no habría una cultura social, sería todo esto un caos, en donde cada quien hiciera lo que quisiera. La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco……INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SEMARNAT, PARA QUE INFORME SOBRE LA LAGUNA DEL VALLE DE LAS GARZAS Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada **GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO**, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Delegado Federal en Colima de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Nabor Ochoa López, para que informe a esta Soberanía sobre la situación ecológica de la Laguna del Valle de las Garzas de Manzanillo, así como realice o finalice el estudio de impacto ambiental en relación a los efectos ambientales que apareja la construcción del Parque Metropolitano en dicho espacio; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La presente iniciativa tiene el objetivo de hacer un llamado a las autoridades en materia de medio ambiente a fin de que se vele con plenitud por los recursos

naturales de la población manzanillense y colimense en general. Ello en razón al proyecto anunciado con mayor vigor a partir del inicio de año, la construcción del Parque Metropolitano en la zona de la laguna del Valle de las Garzas en el municipio de Manzanillo.

A finales del 2014, cuando se dio a conocer el ganador de la licitación para la construcción del Parque Metropolitano en las 300 hectáreas que componen la laguna del Valle de las Garzas, arrancó un proyecto positivo para la convivencia social y familiar, así como de atractivos turísticos en el municipio de Manzanillo, lo cual impulsará un ambiente de seguridad y tranquilidad para la población.

A fin de poder concretar este mega proyecto, ha sido necesario sumar esfuerzos para agilizar los procesos en los permisos, la gestión del dinero para la ejecución de la obra, así como la realización de diversos estudios y análisis del impacto ambiental que traerá la construcción del parque metropolitano en la zona de la laguna.

En relación al impacto ambiental que padecerá la laguna, así como el estado actual de ésta, diversos medios de comunicación han señalado que, tras estudios se ha encontrado gran mortandad de especies por la falta de oxigenación necesaria, así como por la cantidad de lodo o basura que obstruye los conductos de agua, haciendo responsable a la Administración Portuaria Integral de dicha situación, tras cerrar las compuertas para evitar el flujo de agua de mar hacia la laguna.

En un intento por mejorar la situación actual de la zona, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM) está arrojando agua a la laguna, a fin de intentar suplir el flujo natural de agua que tenía. Sin embargo, es muy importante tener clara la situación ecológica en que se encuentra la laguna, las causas reales de su deterioro, y cuáles son las medidas correctas para su restauración, en las que debemos participar de manera coordinada las diversas autoridades municipales, estatales y federales.

Con antelación a ello, y ante la próxima construcción del parque recreativo en la zona en comento, Hugo Herrera Mier, presidente del Patronato Proconstrucción del Parque Metropolitano de la Laguna del Valle de las Garzas, anunció a finales del 2016 que los estudios iniciados para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) seguían en proceso. Estos estudios son indispensables para tener certeza de las consecuencias negativas que traerá al ambiente la obra pública, así como la forma de mitigar y sanar el daño que se causará.

En virtud de la importancia que tienen los recursos naturales para la humanidad, y en vista de la preocupante situación que guarda actualmente la laguna del Valle de las Garzas en el municipio de Manzanillo, la Diputada **GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO**, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción advertimos que es necesario que la población

colimense tenga conocimiento, por una fuente oficial, de la situación real de la problemática.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

A C U E R D O

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) en el Estado de Colima, el licenciado Nabor Ochoa López, a fin de que, en estricto cumplimiento a sus atribuciones legales, informe a esta Soberanía sobre la situación ecológica en que se encuentra actualmente la Laguna del Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, por ser un asunto de alto interés público, debido a que esta laguna es uno de los más importantes espacios naturales de la entidad.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado insta a la autoridad anteriormente exhortada para que realice, o en caso de estar en proceso, finalice el estudio de impacto ambiental de la Laguna del Valle de las Garzas, en relación a los efectos que traerá como consecuencia la construcción del Parque Metropolitano en dicho espacio; así como dé a conocer los resultados de ese estudio.

TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 15 de febrero de 2017.
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

_____

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Joel Padilla Peña, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada Gabriela Sevilla Blanco, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos de las comunidades de Cerro Grande, gracias por estar aquí y por estar luchando por este Cerro que nos provee periódicamente de este liquido vital que es el agua. El Diputado……. INICIATIVA DE CRETO PARA REFORMAR DE LEYES ESTATALES PARA CREAR EL MECANISMO DE COMPENSACIÓN POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS.- SE INSERTA INTEGRAMENTE…

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado **RIULT RIVERA GUTIÉRREZ**, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la legislación estatal con la finalidad de instituir la figura de mecanismo de compensación por servicios ambientales hidrológicos; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La presente iniciativa tiene el propósito de crear, en la legislación estatal, un marco de actuación institucional que permita la sustentabilidad de largo plazo para el estado de Colima, del que es quizá el recurso natural más valioso del planeta: el agua. Además, tiene como finalidad contribuir a garantizar el suministro de este vital líquido en las zonas urbanas de la entidad, las cuales dependen de manantiales y cuencas hidrológicas, de donde surge el agua.

El estado de Colima tiene una población de 711,235[3] personas, de las cuales el 89% vive en áreas urbanas[4] y el restante 11% en comunidades rurales[5]. La población urbana está distribuida en las principales ciudades de la entidad, como son: Colima capital, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán, Armería, Minatitlán y Manzanillo. Diariamente, gracias al trabajo de los organismos municipales e intermunicipales, llega sin mayor problema, agua limpia y apta para consumo humano, a cada uno de los hogares de estas urbes.

De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua, el estado de Colima utiliza el 2% del total del agua disponible en el país, ubicándolo como el 7º de mayor consumo per cápita, con aproximadamente 141 metros cúbicos por habitante cada año. Esto significa, de acuerdo a cálculos hechos por la empresa colimense Capp Consultores, que cada persona utiliza en promedio 386 litros de agua al día, lo que equivale a casi 4 veces más, la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Este alto consumo de agua de los colimenses, el cual equivale al de la población de estados como Coahuila y San Luis Potosí juntos, pone en peligro la sustentabilidad del recurso hídrico disponible, por lo que, de continuar con esta tendencia, podría experimentarse escasez en los próximos años. Aunado a esto, también estaría en riesgo la biodiversidad de las zonas origen del agua que se utiliza en las ciudades colimenses, la cual basa su existencia principalmente en la disponibilidad de agua abundante.

Ante este diagnóstico, surgió la demanda de líderes comunitarios y sociales de estudiar las diversas opciones de solución, hasta encontrar una que pudiese brindar respuestas integrales a las problemáticas que se enfrentan. Esta petición fue presentada directamente al Diputado **Riult Rivera Gutiérrez**, iniciador del presente documento legislativo, en diversas reuniones de trabajo, en las que se expresó como necesidad principal el que se gestionaran adecuadamente los recursos hídricos de la entidad, para garantizar la sustentabilidad a largo plazo.

En las reuniones participaron el ciudadano Mariano Jiménez Duarte, Presidente del Ejido El Terrero; el ciudadano José Sánchez, integrante del Ejido El Terrero; la ciudadana Maricela Ruiz Serratos, Secretaria del Comisariado de la comunidad de Platanarillo; la ciudadana Matilde Ayala Aguilar, quien es Comisaria de Campo Cuatro; la ciudadana Tania Román Guzmán, Gerente Operativo de la Comisión de la Cuenca del Río Ayuquila-Armería; el ciudadano Jesús Flores Carrillo, ejidatario de la comunidad de Campo Cuatro, quien además es Presidente de la asociación civil Comunidades de Cerro Grande; y el ciudadano Edwiges Velázquez, quien es comunero de la localidad de Zacualpan.

---

[3] INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

[4] INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

[5] INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Además, fue preocupación, que se ideara algún instrumento institucional que permitiera a las comunidades, ejidatarios y poseedores de terrenos localizados en las zonas de importancia hídrica, es decir, las que son origen del agua que es utilizada en las ciudades, un nivel de bienestar y calidad de vida mínimos, que desactiven los incentivos de sobreexplotar los recursos naturales mediante actividades económicas de aprovechamiento forestal, de agricultura y de ganadería.

En estas reuniones también participaron expertos ambientalistas, como la ingeniera en recursos naturales, Angélica Jiménez, Coordinadora de la Fundación Mabio, A.C., quienes brindaron información y dieron a conocer las distintas experiencias exitosas y mejoras prácticas internacionales y nacionales en la materia. Concretamente, se propuso como política pública pertinente, que optimiza los beneficios y reduce los costos y consecuencias negativas de implementación, la creación de una figura conocida como Mecanismo Local de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos.

Este mecanismo tiene como objetivo instituir un acuerdo vinculante de reciprocidad entre la población beneficiaria de los servicios ambientales hidrológicos -que en este caso es la población urbana que recibe agua potable permanente y salubre- y los prestadores de los mismos –que son los pobladores de las comunidades asentadas en los lugares origen del agua-, por la conservación solidaria de las zonas de protección hidrológica, de manera que se garantice a largo plazo el mantenimiento de la cantidad y calidad de agua suficientes para aprovisionar a la población del municipio o la zona de que se trate.

El dispositivo institucional en mención, ha sido probado en muchas partes del mundo y de México. Ejemplo de ello lo constituyen el Fideicomiso para el Pago de Servicios Ambientales Forestales del Municipio de Coatepec, Veracruz; el Programa de Pago de Servicios Ambientales en Áreas Naturales Protegidas de la Comisión Nacional Forestal; el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey; el Fondo Semilla de Agua del estado de Chiapas; y la Ley que Regula el Pago y Compensación por los Servicios Ambientales en la República de Panamá.

En todos ellos el propósito es proteger las fuentes existentes de agua, beneficiar a las comunidades y a los propietarios que viven en los lugares origen del líquido, y extender la cantidad y calidad de agua potable para beneficio de las poblaciones urbanas futuras. Esto se hace a través de compensaciones monetarias o en especie que se transfieren de manera directa desde las ciudades que reciben el agua, hasta las comunidades donde ésta nace.

Con estas compensaciones, los habitantes de las áreas de importancia hídrica, conservan, manejan y gestionan de forma responsable los ecosistemas naturales, con acciones tales como las siguientes: restauración de sitios degradados, recuperación de suelos y de ecosistemas forestales, protección de la

biodiversidad, cuidado de la belleza natural para la recreación y el ecoturismo, así como educación e investigación especializada en materia ambiental.

En un caso concreto del estado de Colima, se cuenta con la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán, una superficie con gran diversidad de hábitats que está salvaguardada por Decreto Presidencial de 1987, mediante el que se le designó como área natural protegida. Dentro de ésta existe una zona conocida como Cerro Grande, en la que se localiza el manantial El Cóbano, que dispara en promedio 2,300 litros de agua por segundo, de los cuales 1,000 litros se destinan para abastecer al 90% de los habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, a través del acueducto Zacualpan.

En Cerro Grande están asentadas 7 comunidades rurales, en las que habitan aproximadamente 3,500 personas. Estas comunidades son El Terrero, Lagunitas, Campo Cuatro, Platanarillo, La Laguna, Toxín y Zacualpan, las cuales se han visto desfavorecidas en su nivel y calidad de vida, así como en el bienestar económico, debido a las limitaciones impuestas por el Decreto Presidencial referido, que les restringe estrictamente la posibilidad de que aprovechen los recursos naturales de la zona. Es por ello que gran parte de la población de dichas comunidades vive en condiciones de alta y muy alta marginación.

Pero al mismo tiempo, como se dijo, Cerro Grande es el lugar que provee de agua a toda la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. De aquí la importancia de encontrar una respuesta institucional que haga posible el suministro de agua potable por muchas más décadas y que las comunidades rurales origen de este recurso hídrico, incrementen su nivel y calidad de vida, al mismo tiempo que realizan actividades de protección del ecosistema y la biodiversidad. Todo esto podría ser real mediante compensaciones económicas voluntarias por parte de quienes se benefician en los municipios citados, por el suministro de agua.

Es en este sentido, que el suscrito Diputado **RIULT RIVERA GUTIÉRREZ** y sus demás compañeros Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponemos este día un proyecto de reforma integral a la legislación estatal, con el que se instituye la figura de Mecanismo Local de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos, con el que se podrá solicitar la compensación por servicios ambientales hidrológicos a favor de comunidades y de propietarios o poseedores de terrenos localizados en zonas de protección hidrológica, con la finalidad de incentivar la conservación, recuperación y uso sustentable de esos ecosistemas naturales.

En esta iniciativa se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, y la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; en las que se abordan los siguientes puntos:

- Facultar a los organismos operadores de agua potable para gestionar el cobro de aportaciones voluntarias, que sean distintas a las que resultan de calcular las cuotas y tarifas de la prestación de sus servicios.
- Incluir el concepto de servicios ambientales hidrológicos, los cuales se entienden como los beneficios directos e indirectos que recibe la población como resultado de la conservación, manejo y gestión responsable de ecosistemas naturales en áreas de importancia hídrica.
- Instituir la figura de mecanismo local de compensación por servicios ambientales hidrológicos, del cual podrá existir sólo uno en cada municipio o en zonas intermunicipales.
- Establecer un fideicomiso privado, como herramienta financiera para obtener, aplicar, administrar e invertir los recursos propios y donativos resultantes de la implementación del mecanismo local de compensación por servicios ambientales hidrológicos.
- Facultar a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez para incluir en su recibo de cobro de la facturación bimestral una aportación voluntaria, así como restringir el uso de estos recursos a favor de las comunidades localizadas en Cerro Grande.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

D E C R E T O

PRIMERO. - SE **REFORMA** LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 20, HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO CORRESPONDIENTE, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 20.- Corresponderá a los organismos operadores municipales**:**
I a XXVIII….
XXIX. Gestionar el cobro de aportaciones voluntarias que constituyan ingresos distintos a los calculados al aplicar las cuotas y tarifas de la prestación de sus servicios, así como transferirlas a terceros, de acuerdo a la legislación aplicable;
XXX. Las demás que señale esta ley y otras disposiciones legales.

SEGUNDO. - SE **REFORMA** LA FRACCIÓN LXXXVIII DEL ARTÍCULO 3º, HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES; SE **ADICIONA** EL CAPÍTULO IX BIS 'SOBRE LA COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS', INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 72 BIS, 72 TER, 72 QUATER, 72 QUINQUIES, 72 SEXIES Y 72 SEPTIES; DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I a LXXXVII…
LXXXVIII. Servicios ambientales hidrológicos: Son los beneficios directos e indirectos que recibe la población como resultado de la conservación, manejo y gestión responsable de ecosistemas naturales en áreas de importancia hídrica, tales como la provisión de agua, la restauración de sitios degradados en el área de captación hídrica, la recuperación de suelos y de ecosistemas forestales, la protección de la biodiversidad, el cuidado de la belleza natural para la recreación y el ecoturismo, así como la educación y la investigación.
LXXXIX. Tratamiento: Los procedimientos mecánicos, físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las características de los residuos sólidos y se reduce su volumen o peligrosidad, para su posterior aprovechamiento total o parcial;
XC. a XCII…
XCIII. Licencia Local de Funcionamiento: Es un trámite de regulación obligatoria, mediante el cual las fuentes fijas de competencia estatal que emiten o puedan emitir radiaciones electromagnéticas, olores, humos, ruido, vibraciones, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera dan cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Ley.

CAPÍTULO IX BIS
SOBRE LA COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS

ARTÍCULO 72 BIS. - Con base en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 1º de esta Ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, podrán solicitar la compensación por servicios ambientales hidrológicos a favor de comunidades y de propietarios o poseedores de terrenos localizados en zonas de protección hidrológica, con la finalidad de incentivar la conservación, recuperación y uso sustentable de esos ecosistemas naturales.
Para efectos del párrafo anterior, se crearán Mecanismos Municipales e Intermunicipales de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos, pudiendo constituirse solamente uno por cada municipio o en las zonas donde exista convenio de los mismos para la prestación del servicio de agua potable, el cual asentará su domicilio en el municipio donde se haya creado.
Cada uno de estos mecanismos tendrá como objeto instituir un acuerdo vinculante de reciprocidad entre la población beneficiaria de los servicios ambientales hidrológicos y los prestadores de los mismos, por la conservación solidaria de las zonas de protección hidrológica, de manera que se garantice a largo plazo el mantenimiento de la cantidad y calidad de agua suficientes para aprovisionar a la población del municipio o la zona de que se trate.

ARTÍCULO 72 TER. - Los Mecanismos Municipales e Intermunicipales de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos contarán con los siguientes órganos:

I. Junta Directiva, como máximo órgano de gobierno y de coordinación;
II. Comité Técnico de Dictaminación, encargado de la convocatoria y manejo de los proyectos que se financiarán; y
III. Comité de Monitoreo y Evaluación Social, cuya finalidad es transparentar y fiscalizar el uso de los recursos que se administren.

La integración y las atribuciones de los Comités Técnico de Dictaminación, y de Monitoreo y Evaluación serán determinadas por la Junta Directiva en el reglamento interior del Mecanismo de Compensación.

Artículo 72 QUÁTER. - La Junta Directiva estará integrada por:

I. Un representante de las comunidades y de los propietarios y poseedores de terrenos localizados en la zona de protección hidrológica, quien la presidirá;
II. Un representante del organismo operador de agua, quien fungirá como Secretario Técnico;
III. Un representante de cada uno de los Ayuntamientos del municipio donde se crea el mecanismo;
IV. Un representante especialista en medio ambiente, nombrado por una institución académica de educación superior del municipio donde se crea el mecanismo;
V. Un representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo, que pertenezca al Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima;
VI. El Diputado Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del H. Congreso del Estado;
VII. Un representante de la Comisión Nacional Forestal;
VIII. Un representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y
IX. Un representante de una organización no gubernamental constituida legalmente en el estado de Colima que trabaje en la zona donde se crea el mecanismo de compensación, el cual será designado por el Presidente de la Junta Directiva.

Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto, y su desempeño será honorario, por lo que no recibirán remuneración alguna. La Junta Directiva sesionará en la periodicidad que lo considere adecuado y tomará sus acuerdos por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. Para su organización y funcionamiento, la Junta Directiva atenderá al Reglamento Interno del Mecanismo de Compensación, en el que se establecerán sus atribuciones y facultades, de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta Ley y demás legislación en la materia.

Artículo 72 QUINQUIES. - Los Mecanismos Municipales e Intermunicipales de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos establecerán un fideicomiso privado, como herramienta financiera para obtener, aplicar,

administrar e invertir los recursos propios y donativos que conformen su patrimonio. La Junta Directiva fungirá como fideicomitente; en caso de no ser posible, elegirá como tal a una organización no gubernamental con representación mayoritaria o total de los prestadores de servicios ambientales de la zona de protección hidrológica que corresponda.

Artículo 72 SEXIES. - El Fideicomiso se destinará de manera exclusiva a estos propósitos:

I. **Conservar los ecosistemas forestales en zonas de protección hidrológica;**
II. **Compensar a las comunidades y a los propietarios o poseedores de las zonas de protección hidrológica;**
III. **Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de las comunidades y los propietarios o poseedores de las zonas de protección hidrológica; y**
IV. **Mantener a largo plazo los beneficios que obtiene la población a través de los servicios ambientales hidrológicos.**

Artículo 72 SEPTIES. - Los recursos del Fideicomiso de los Mecanismos Municipales e Intermunicipales de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos se integrarán con:

I. **Los ingresos que aporten el fideicomitente y la población beneficiaria de los servicios ambientales hidrológicos;**
II. **Las aportaciones gubernamentales de dependencias federales, estatales y municipales;**
III. **Los intereses y rendimientos que genere la inversión de las cantidades de dinero fideicomitidas; y**

Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto.

TERCERO. - SE **REFORMAN** LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 40.- La CIAPACOV incluirá en el recibo de cobro de la facturación bimestral por los derechos resultantes de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la presente Ley, una aportación voluntaria bimestral con cargo al usuario, por concepto de "Apoyo Voluntario para la Conservación Ambiental de Cerro Grande".

ARTÍCULO 41.- Los recursos que ingresen a LA CIAPACOV, por el concepto señalado en el artículo anterior, **sólo podrán destinarse al Mecanismo Intermunicipal de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos a que hace referencia el artículo 72 Bis de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. Estos recursos deberán concentrarse en**

cuentas específicas y registrarse en la contabilidad de modo que se identifiquen plenamente.

T R A N S I T O R I O:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Los Mecanismos Municipales e Intermunicipales de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos deberán ser creados dentro del plazo de noventa días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Para efectos del artículo anterior, el representante de las comunidades localizadas en la zona de protección hidrológica que deseen crear un mecanismo de compensación, presentará por escrito una petición dirigida al Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del H. Congreso del Estado de Colima solicitando la creación del Mecanismo Municipal o Intermunicipal de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos. Dicha petición deberá estar acompañada del acta en la cual se le designa como representante de las comunidades, misma que será signada por todas las autoridades auxiliares de dichas comunidades.

CUARTO.- Una vez recibida la petición a que hace alusión el artículo anterior, el Diputado Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del H. Congreso del Estado convocará, en un plazo no mayor a treinta días, a los integrantes de la Junta Directiva a que hace referencia el artículo 72 Quáter del presente Decreto a la sesión de creación del Mecanismo Municipal o Intermunicipal de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos.

QUINTO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 15 de febrero de 2017.
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la tribuna el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. La siguiente iniciativa va encaminada también a tratar de resolver o aminorar un problema que aqueja a uno de los sectores vulnerables en particular el sector de las personas sordas, con la intención de que se reconozca como su primera lengua el lenguaje mexicano de señas y como segunda lengua el español escrito…….. INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y LA LEY DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE COLIMA.- SE INSERTA INTEGRAMENTE…

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado **RIULT RIVERA GUTIÉRREZ**, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima, así como de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a la construcción de un Colima incluyente y respetuoso con toda la población que presenta algún tipo de discapacidad auditiva, es decir, de un Estado donde las personas con este tipo de limitaciones sean abrigadas por todo el Pueblo Colimense. Ello mediante la inclusión de la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicanas (LSM) desde los primeros niveles de educación a través del Modelo Bilingüe de Educación de las personas sordas, el cual les pone en contacto con su lengua natural, la Lengua de Señas Mexicanas, y el español escrito, como segunda lengua.

Alrededor del mundo, desde hace un par de años, inició un gran movimiento que centra la atención al respeto e inclusión del sector de la población con algún tipo de discapacidad, entendida ésta como las deficiencias que afectan una función corporal, las limitaciones para ejecutar tareas diarias, o las restricciones en la participación de la vida en sociedad. Estas restricciones, o discapacidades se han clasificado, principalmente, en cuatro: motriz, cognitivo-emocional, psicosocial y sensorial.

La última de éstas, la sensorial, responde a cualquier tipo de deficiencia, por disminución grave o pérdida total, en alguno de los sentidos, como lo es el auditivo, lo cual ocasiona problemas dentro del ciclo de comunicación entre la persona con dicha discapacidad y la sociedad en general.

Para comprender con mayor precisión la temática es necesario explorar la educación que se otorgaba a la comunidad sorda en México durante los siglos XIX y XX. En el siglo XIX, entre los antecedentes más remotos sobre la educación impartida para las personas sin audición, se encuentra la Escuela Nacional de Sordomudos, asimismo, se tiene registro de la creación de la Escuela de Sordomudos y la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos (ENS) como escuela para formar profesores. Ambas institutos creados por decreto presidencial de Benito Juárez.

El 15 de abril de 1861, Benito Juárez, quien era Presidente Interino Constitucional dl país, decreta una Ley de Instrucción; en el apartado correspondiente “De la Instrucción Primaria” se señaló, en el artículo tercero, la creación de una Escuela de Sordomudos (Tamayo, 1972).

De esta manera, la educación de la comunidad sorda en México continúa con la creación de la Escuela Municipal de Sordomudos en junio de 1866. Posteriormente, el presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de Educación, el 2 de diciembre de 1867; de manera particular destaca el Capítulo II, en donde señalaba que el alumnado deberá aprender lengua española escrita expresada por medio del alfabeto manual, y pronunciada cuando haya aptitud para ello en la niña o niño.

En ese mismo decreto se dio el carácter Nacional a la Escuela de Sordomudos, tanto a la que atiende niños sordos como a la que forma profesores de sordos. Entre los objetivos de esta escuela se encontraba la enseñanza del español en su forma escrita, así como expresada por medio del alfabeto manual o de forma oral, en caso de que hubiera “aptitud para ello en el discípulo”. Como se puede observar, no se hacía énfasis en la oralización del sordo, pero sí en el aprendizaje del español.

Ante dichos antecedentes no cabe duda que México es un país multicultural y plurilingüe, sin embargo, aunque hoy en día se reconozca la diversidad de lenguas que se usan en el territorio nacional, pareciera no incluir a las lenguas empleadas por las comunidades sordas: la Lengua de Señas Mexicana (LSM). Este hecho se observa en la falta de una planeación y política lingüística en función de las necesidades de la comunidad con imposibilidad auditiva, y por ende, ha traído como consecuencia un rezago en el ámbito educativo.

Si bien es cierto que el estudio de la LSM es escaso, no se puede negar la existencia de sus usuarios, así como el derecho que tienen éstos a recibir una educación en su propia lengua. El uso de la Lengua de Señas para la educación del Sordo responde, no sólo a los derechos inalienables de las personas, sino, además al reconocimiento del valor de la enseñanza en la lengua materna para el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales y emocionales del educando, como se ha citado en numerosos documentos (UNESCO 1953, 2003; UNICEF 1999).

A pesar de lo anterior, la cotidianidad que se vive en las escuelas con los alumnos sordos nos permite observar cómo se les ha privado de este derecho al excluir el uso de su lengua materna para su enseñanza.

A fin de trabajar en la construcción de una sociedad incluyente, en donde las personas que tienen capacidades diferentes se puedan desarrollar plenamente dentro de la sociedad, el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales como lo son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Protocolo Facultativo de dicha Convención, así como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

De la mano al marco jurídico internacional que ha adoptado el país, se ha creado a nivel nacional la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual tiene como objetivo establecer las condiciones necesarias para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, el Congreso de la Unión ha aprobado diversas reformas a fin de contribuir al empoderamiento de este sector de la población, ejemplo de esto es que la información que se transmite desde el Canal del Congreso debe ser difundida también por medio de la lengua de señas y subtítulos. Además, a mediados del año pasado, una importante reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, atribuye a la Secretaría de Salud la obligación de promover entre el personal médico y el administrativo que atienden a población con discapacidad auditiva, el aprendizaje de la lengua de señas, a fin de alcanzar una debida comunicación entre el personal y esta población.

Por su parte, el Estado de Colima, con una de las mayores prevalencias en México de discapacidad entre la población, siendo éste de 7.4%, ha emprendido diversas medidas en la temática. En el ámbito legislativo, para el 2005 se creó la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. Asimismo, diversos órganos de gobierno han convocado a la realización de actividades y foros para fomentar la conciencia entre la ciudadanía colimense de la necesidad de visualizar a este sector poblacional, así como de integrarlo a la vida cotidiana.

Tras evaluar el panorama que gobierna el territorio colimense, se aprecia que han sido algunas las medidas adoptadas por el gobierno en conjunto a la sociedad civil a fin de abonar al empoderamiento de la población con discapacidad auditiva, y facilitarles el proceso de inclusión a la vida en sociedad. En ese orden de ideas, se advierte que dentro del Estado falta impulsar, con mayor vigor, mecanismos para contribuir a una verdadera inclusión de las personas con discapacidad auditiva desde pequeñas y a lo largo de su vida.

En este sentido se observa un punto pendiente para contribuir al tema, precisamente la educación. En respuesta a esta omisión dentro del estado de Colima, se observa que se ha dejado de acatar lo dispuesto por la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala, dentro del artículo 24, numeral 3, inciso b: “(…) los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas”.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, orienta el actuar de las autoridades educativas al estipular que la Secretaría de Educación Pública deberá incluir, desde los primeros años de educación, la enseñanza de un modelo bilingüe intercultural para la educación de las personas sordas debe en principio incorporar la Lengua de Señas Mexicana como la lengua base para la instrucción en el aula y el español escrito como una segunda lengua

que forma parte de una competencia comunicativa en el sistema educativo. Seguramente al implementar dicha enseñanza en las escuelas de Colima, se contribuirá, no sólo a la inclusión y equidad de los niños con problemas auditivos, sino que, además garantizará que la niñez colimense tenga igualdad de oportunidades, practique la tolerancia, solidaridad, el respeto a la diversidad y la no discriminación.

Al hablar de la Lengua de Señas Mexicanas, nos referimos a aquella lengua reconocida oficialmente como lengua nacional, que forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación, que se refiere a la "lengua de la comunidad de sordos en México, y consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal dotados de función lingüística"[6].

Al referirnos a 'Sordo' y 'Sorda' con letra mayúscula, es en virtud de una convención que se ha utilizado para diferenciar al grupo de personas sordas que reconocen la Lengua de Señas como su lengua natural. El uso de esta convención en la escritura tiene como objetivo establecer una distinción entre la ausencia del sentido de la audición y el reconocimiento de la identidad de grupo. Así la palabra sordo con letras minúsculas hace referencia a la condición auditiva de los no oyentes, mientras que la palabra Sordo con mayúscula conduce a la referencia de un grupo de personas sordas que comparte una lengua de señas. Ello demuestra que el empleo de letras minúsculas o mayúsculas para la palabra sordo no es azaroso.

El uso de la lengua de señas permitirá el desarrollo integral de las personas sordas, y no con ello se descarta la necesidad del aprendizaje del español como una segunda lengua. Es importante el uso de ambas lenguas para diferentes fines y contextos, así como el respeto que debe prevalecer mutuamente entre las culturas oyente y sorda.

La propuesta de un modelo bilingüe intercultural involucra aspectos lingüísticos, pedagógicos, antropológicos, socio-históricos, culturales, políticos y hasta administrativos. Por un lado no podemos negar que la sociedad oyente ha impuesto su visión sobre el rasgo biológico de la sordera al considerarlo como un factor discapacitante, y no como el rasgo que permite la integración de un grupo de personas que lo poseen. La sordera es un rasgo que marca las relaciones sociales de quienes la tienen, impacta en su forma de ver, ser y estar en el mundo, se integran en una comunidad que difiere de la sociedad oyente.

Es así como los Sordos son poseedores de una cultura y una lengua que es diferente a la oral. La lengua se convierte en símbolo de su identidad los cohesiona y los convierte en miembros de una minoría lingüística.

[6] https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-nacional-de-la-lengua-de-senas-mexicana-lsm?idiom=es

El marco teórico en el cual se mueve esta propuesta pedagógica bilingüe intercultural, se encuentra el reconocimiento y la importancia de la adquisición de una primera lengua, en este caso la lengua de señas, considerada como la lengua natural del sordo y la lengua escrita como una segunda lengua.

Ahora bien, en este modelo es fundamental el uso de la lengua de señas. Al respecto es indispensable que en el personal de la escuela haya enseñantes sordos nativos para garantizar que las señas empleadas sean efectivamente la LSM, así como atender al hecho de que los docentes oyentes no empleen alguna forma de español signado, sino que utilicen la lengua de señas. Por tanto, se requiere que los maestros oyentes reconozcan primeramente que las lenguas de señas no son calcos de las lenguas orales; su forma de organización que permite potencializar el uso del espacio señante, de las manos, de los gestos y del cuerpo para comunicar un mensaje, propio de la naturaleza de la modalidad visogestual en que estas lenguas se expresan. Y a continuación entender las diferencias de la estructura lingüística que se observa entre la LSM y el español.

Con el propósito de poner fin a las barreras de comunicación que aísla a las personas sordas en el estado, así como con el objetivo que la niñez colimense sea generadora de una cultura inclusiva, el suscrito Diputado, **Riult Rivera Gutiérrez**, y sus compañeros de Grupo Parlamentario, subrayamos la necesidad de implementar, desde el ciclo de educación inicial, la enseñanza del Modelo Bilingüe de Educación al sordo mediante la implementación de la Lengua de Señas Mexicanas, con los siguientes propósitos principales:

i) Generar una cultura de inclusión, equidad y respeto a las personas con algún tipo de discapacidad auditiva;
ii) Promover, desde niños, el uso de la Lengua de Señas Mexicanas a quienes tienen pérdida total o parcial de este sentido, para facilitar su desarrollo dentro de la sociedad colimense con toda la facilidad posible, y;
iii) Dotar a las niñas y niños sordos e hipoacusicos del estado habilidades y competencias que contribuirán en el proceso de aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita, mismo que los fortalecerá como educandos y futuros ciudadanos mediante el Modelo Bilingüe de Educación al Sordo (LSM y español escrito).
iv) Capacitar, por medio de cursos de actualización docente a maestros que tienen alumnos sordos e hipoacusicos en sus aulas de educación pública y privada en el Modelo Bilingüe de Educación al Sordo y Lengua de Señas Mexicana.
v) Respetar y garantizar el derecho de estudiar en la misma escuela y aula regular a personas con discapacidad auditiva, de igual manera, que los estudiantes integrados a escuelas públicas y privadas que no imparten educación especial, así como en aquellas que imparten educación especial, cuenten con el apoyo o asesoría de profesionales en materia de interpretación educativa de LSM y manejo del Modelo Bilingüe de Educación al Sordo; y

vi) Instituir en escuelas de educación básica, media superior y superior pública y privada, el acompañamiento de Intérpretes en LSM en materia educativa.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

D E C R E T O

PRIMERO.- SE **ADICIONA** LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 11, Y SE HACE EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 11.- La educación que impartan la autoridad educativa estatal y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en cualquiera de sus tipos y niveles, tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I…XVI…
XVII. Difundir y promover en los educandos el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.
XVIII… XXVI…
…

ARTÍCULO 89.- Para alcanzar la equidad en la educación la autoridad educativa estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias llevará a cabo las acciones siguientes:
I… V…
VI. Incluirá la enseñanza del Modelo Bilingüe de Educación al sordo priorizando la Lengua de Señas Mexicanas en la educación pública y privada.
Entendiendo a la Lengua de Señas Mexicanas como la lengua reconocida oficialmente como lengua nacional, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y movimiento corporal, dotados de función lingüística.
El Modelo Bilingüe de Educación al Sordo deberá entenderse como aquel que garantiza el espacio idóneo para el aprendizaje de Lengua de Señas Mexicana en contextos formales de uso como su primera lengua; y el aprendizaje del español escrito como segunda lengua.
VII… XV…
…

SEGUNDO.- SE **ADICIONA** LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 2; EL ARTÍCULO 27 BIS; EL ARTÍCULO 27 TER; SE **REFORMA** EL ARTÍCULO 6; 27; Y 44, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I… VII…
VIII. Lengua de Señas Mexicanas: Lengua reconocida oficialmente como una lengua nacional, que forma parte del patrimonio lingüístico de la nación mexicana, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística.

Artículo 6°.- …
Así mismo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal centralizada y paraestatal, los poderes Legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades de las administraciones públicas municipales centralizadas y paramunicipales, deberán contar con personal necesario capacitado en el uso **de la Lengua de Señas Mexicanas** utilizado por las personas sordas, principalmente en las áreas que tengan atención de manera directa con la población, con la finalidad de que puedan dar un trato y servicio adecuado, digno y eficaz a las personas con este tipo de discapacidad.
…
…

Artículo 27.- La Secretaría de Educación, proporcionará a las escuelas regulares, a través de**l** Centro de Atención de Apoyo Pedagógico a la Educación y la Unidad de Servicios de Atención a Escuelas Regulares, los medios necesarios para que el personal, principalmente el académico, brinden apoyo a los alumnos con discapacidad en el manejo de silla de ruedas, orientación y movilidad, uso del ábaco, lector escritura en sistema Braille, **Lengua de Señas Mexicanas** y, en general, todos los recursos que la tecnología moderna ofrece al proceso de integración educativa, de ser posible, desde preescolar.

Artículo 27 Bis.- La Secretaría de Educación, a fin de crear las condiciones necesarias para una completa integración y desarrollo de las personas con discapacidad auditiva, promoverá la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicanas en la educación pública y privada.
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Educación empleará a maestros capacitados debidamente en el uso de Lengua de Señas Mexicana, para lo cual la Secretaría de Educación Pública, deberá establecer programa de capacitación permanente de Lengua de Señas Mexicana para la planta docente existente en el Estado de Colima, priorizando a los que cuenten con alumnos sordos inscritos en el ciclo escolar correspondiente.

Artículo 27 Ter.- La Secretaría de Educación difundirá el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicanas como lengua oficial, mediante capacitación e investigación a fin de que sea empleada en el Sistema Educativo Estatal.

Artículo 44.- El Gobierno Estatal y los ayuntamientos, en coordinación con el INCODIS, el Instituto Colimense del Deporte, el DIF Estatal, los DIF Municipales, las asociaciones del deporte adaptado en la entidad y demás autoridades competentes, coadyuvarán en el ámbito de sus respectivas competencias en la implementación de programas que:
I…IV…
V. Fomenten la participación de personas con discapacidad en actividades deportivas y culturales a través de eventos, talleres y cursos artísticos, de capacitación teatral, uso del lenguaje braille, **Lengua de Señas Mexicanas** y otros semejantes;
VI… X…

T R A N S I T O R I O:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 15 de febrero de 2017.
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña.

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, de los compañeros Legisladores, medios de comunicación y público que nos acompaña. …….INICIATIVA DE CRETO PARA REFORMA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.- SE INSERTA INTEGRAMENTE…

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E:

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por la que Se reforme el último párrafo del Artículo 4, y el artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el ámbito del Derecho existe un término legal conocido como Antinomia Jurídica o también llamado la Contradicción de la Norma, cuyo concepto es la incongruencia o contradicción real o aparente de las leyes con el sistema jurídico, o consigo mismas, o respecto de otras leyes, o de partes de ellas.

En la actualidad, se acepta la inevitable existencia de contradicciones entre algunas de las disposiciones jurídicas contenidas en las normas de un ordenamiento jurídico.

Puede decirse que existe una contradicción entre dos disposiciones jurídicas cuando la aplicación simultánea de ambas disposiciones a un mismo supuesto fáctico produciría consecuencias jurídicas directamente contrapuestas. O dicho de otro modo, cuando ambas disposiciones no pueden ser válidas al mismo tiempo.

La contradicción es, pues, aquella situación que se produce cuando hay disposiciones jurídicas que, perteneciendo al mismo ordenamiento y teniendo el mismo ámbito de validez, son entre sí incompatibles por imponer conductas opuestas, de modo que su presencia simultánea en el ordenamiento generaría una situación de antinomia.

En este orden de ideas expongo que del análisis de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Encuentro una antinomia jurídica entre estas puesto que sus normas se contraponen una de la otra.

Contradicción que es notoria conforme a lo siguiente:

PRIMERO.- La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios establece en su Artículo Segundo que ***las disposiciones de este ordenamiento no son aplicables en las materias financiera, fiscal, judicial, laboral, electoral, de seguridad pública, de responsabilidad para los servidores públicos, de transparencia y acceso a la información pública, así como las relativas al ministerio público en ejercicio de sus funciones. En relación con los créditos fiscales no se excluyen de la aplicación***

de ésta Ley lo relativo a las multas administrativas derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones de orden administrativo local.

SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima establece en su Artículo Cuarto, 32 conceptos que sirven para el mejor entendimiento de esta Ley, cerrando dicho precepto con un párrafo conteniendo lo siguiente:

A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán supletoriamente la Ley General, los Lineamientos Generales que emitan el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley de Archivos, la Ley del Procedimiento Administrativo y la Ley de Responsabilidades.

A su vez en esta misma Ley en su Artículo Ciento Sesenta y Cinco establece que ***en la tramitación del recurso de revisión se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo.***

Si bien se observa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima hace referencia que será aplicable supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, sin embargo esta ordena que sus disposiciones no son aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Es así que concluyo que se debe reformar las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima para sustentar y fortalecer los criterios y procedimientos que establece esta Ley.

Visto lo anterior, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

D E C R E T O:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforme el último párrafo del Artículo 4, y el artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I a la XXXII. . .

A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán supletoriamente la Ley General, los Lineamientos Generales que emitan el Sistema Nacional de Transparencia, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, la Ley de Archivos y la Ley de Responsabilidades.

ARTÍCULO 165.- En la tramitación del recurso de revisión se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima.

T R A N S I T O R I O:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

El suscrito Diputado solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

A T E N T A M E N T E:
COLIMA, COL. A 15 DE FEBRERO DE 2017

_____

DIP. JOEL PADILLA PEÑA.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión o comisiones correspondiente. En el

uso de la tribuna nuestro compañero Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, ¿declina? muy bien, gracias. En el uso de la tribuna nuestro compañero Eusebio Mesina Reyes.

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso de la Presidencia, de los compañeros Diputados y amigos que aún nos acompañan. El suscrito…….. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE ESTIMULO Y FOMENTO AL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA.- SE INSERTA INTEGRAMENTE…

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El suscrito Diputado **EUSEBIO MESINA REYES**, así como los demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, Periodo Constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

El deporte es mucho más que un lujo o una forma de entretenimiento. El acceso al deporte y la participación en el mismo es un derecho humano y es básico para que los individuos de cualquier edad lleven una vida sana y plena. El deporte, desde el juego y la actividad física hasta el deporte de competición organizado, tiene un papel importante en todas las sociedades. El deporte es fundamental para el desarrollo del niño. Enseña valores básicos tales como la cooperación y el respeto; mejora la salud y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades; es una importante fuerza económica que proporciona empleo y contribuye al desarrollo local; y une a los individuos y las comunidades, superando barreras culturales y étnicas. El deporte es una herramienta rentable para hacer frente a muchos retos en el ámbito del desarrollo y la paz, y ayuda a lograr, de acuerdo con las Naciones Unidas, los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs).

El potencial del deporte como herramienta para el desarrollo y la paz todavía tiene que desarrollarse plenamente. Aunque se reconoce constantemente que el deporte y el juego son un derecho humano, no siempre son vistos como una prioridad e incluso se le llama el “derecho olvidado”. El deporte es considerado como un producto derivado del desarrollo y no como un motor del mismo.

Muchos de los valores básicos inherentes al deporte son compatibles con los principios necesarios para el desarrollo y la paz, como es el caso del juego limpio, la cooperación, el compartir y el respeto. Las habilidades para la vida que se aprenden a través del deporte ayudan a empoderar a los individuos y aumentar el bienestar psicológico, como por ejemplo aumentar la resistencia, la autoestima y la comunicación con otros. Estas características del deporte son beneficiosas para la gente de todas las edades, pero son especialmente importantes para el desarrollo saludable de los jóvenes.

A mayor abundamiento, los vínculos potenciales entre el deporte y la paz también son muy fuertes. Lo podemos ver desde los eventos internacionales, el deporte une a la gente de manera que se pueden superar límites y echar abajo barreras, haciendo del terreno de juego un espacio sencillo y a menudo apolítico para que se den contactos entre grupos contrarios. Por consiguiente, el deporte puede ser un foro ideal para reanudar el diálogo social y superar las divisiones, destacando las semejanzas entre las personas y acabando con los prejuicios.

Estas circunstancias motivan a los suscritos iniciadores para establecer en la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física reformas a través de las cuales se pueda potencializar a través del deporte en el Estado la cultura de la paz y de la legalidad entre los diversos entes y sujetos que intervienen en cualquiera de sus disciplinas deportivas.

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se **reforman** las fracciones X y XI del artículo 1o BIS; el artículo 23 BIS 6; y se **adiciona** la fracción XII al artículo 1o BIS; la fracción XIV al artículo 18; y una fracción XI al artículo 34, recorriéndose en su orden la actual fracción XI; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1o BIS. …

I a la IX. …

X.- El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas;

XI.- En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte; y

XII.- Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de la paz, de la legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.

ARTICULO 18.- …

I a la XIII. …

XIV.- Los lineamientos para la prevención de la violencia y el fomento de la cultura de la paz en el deporte.

ARTÍCULO 23 BIS 6. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial. **Propiciando en todo tiempo la cultura de la paz con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social.**

ARTÍCULO 34.- …

I a la X. …

XI.- Fomentar entre sus compañeros y clubes, actitudes solidarias, propiciar la cultura de la paz, con el fin de lograr que el deporte sea un referente de integración y convivencia social.

XII.- Las demás que le sean señaladas por la presente Ley.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, A 15 DE FEBRERO DE 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO

_____
EUSEBIO MESINA REYES

_____ **JUANA ANDRÉS RIVERA**	_____ **SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ**
_____ **HÉCTOR MAGAÑA LARA**	_____ **FEDERICO RANGEL LOZANO**
_____ **JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN**	_____ **GRACIELA LARIOS RIVAS**
_____ **OCTAVIO TINTOS TRUJILLO**	_____ **JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI**
_____ **MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN**	_____ **JOEL PADILLA PEÑA**

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la tribuna nuestra compañera Diputada Martha Leticia Sosa Govea.

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, buenas noches, por respeto al tiempo que hemos pasado en esta sesión que ya pasan de ocho horas, que hemos estado aquí, digo, nada mas sesionando, porque empezamos a las 10 de la mañana, en la Sala de Juntas, iba a presentar dos iniciativas, haré una sola y voy a resumirla muy brevemente, le pediría Presidente que se sirva instruir que se inserte íntegra en el diario de los debates para omitir todo lo repetitivo y centrarme en lo que es la presentación.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Así se hará Diputada, tomamos nota y yo instruyo a la Secretaría tome nota y se inserte de manera completa en el diario de debates su propuesta.

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Esta iniciativa suscrita por su servidora y por mis compañeros integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional…….. INICIATIVA PARA REALIZAR EL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL A LAS ORGANIZACIONES QUE HACEN EL BIEN COMUN.- SE INSERTA INTEGRAMENTE…

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada **MARTHA LETICIA SOSA GOVEA**, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones a las diez Leyes de Hacienda para los Municipios del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a la realización de los objetivos impuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Colima que trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable de la Entidad. Lo anterior se plantea mediante un apoyo económico a

dichas agrupaciones, mismo que consiste en la realización del descuento de un 50% del impuesto predial al pago que deben hacer estas organizaciones.

Actualmente en el Estado de Colima existen diversas asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, así como fundaciones que han trabajado desde su constitución en la persecución de objetivos y fines en común, coadyuvando así con el gobierno para satisfacer necesidades sociales que el Estado no ha podido garantizar; de la mano que inciden en la luchar por el reconocimiento y protección de derechos humanos de las minorías.

Dentro de estas organizaciones, en Colima se pueden citar casas hogar para niñas y niños que perdieron a sus madres y padres, o para aquellos niños de escasos recursos, albergues para que ayudan a la rehabilitación de personas que caen en drogadicción, así como asilos para adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza, abandono o enfermedad, entre muchos otros tipos de asociaciones civiles.

Al enunciar dichas organizaciones, sobresale una característica fundamental que determina la naturaleza de estas agrupaciones, esta es su carácter altruista y no lucrativo. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil trabajan de manera gratuita. Su único pago es la satisfacción de ver concluidos sus proyectos, sean estos de asistencia social, apoyo a la alimentación popular, asistencia jurídica, promoción de la equidad de género, así como la cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural, por sólo mencionar algunos de los temas que distinguen su labor.

A pesar de que estas organizaciones ciudadanas representan una de las expresiones más nobles de la humanidad en sociedad, las dificultades a las que se enfrentan son tan diversas como severas. Entre ellas, y destacando su primacía, se encuentra la dificultosa situación económica que tienen desde su creación.

Lo anterior en virtud de que este tipo de agrupaciones sociales al constituirse e integrar su patrimonio, es formado por las aportaciones y donaciones de los propios miembros, lo cual restringe, por mucho, la capacidad de maniobra y de acción que puedan tener en la labor diaria para conquistar sus objetivos. Esto equivale a que, si los miembros no tienen una fluidez económica lo bastante amplia para destinar recursos a la organización, entonces, los objetivos y metas que le dieron vida se verán truncados.

Ante este escenario, muchas de las organizaciones civiles que se gestaron hace algunos años en el estado, se vieron imposibilitadas a continuar con sus labores, toda vez que el poco apoyo económico cercenaba su capacidad de actuar. Recientemente, ante la asimilación de esta problemática, se creó en el estado la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.
Como su nombre lo indica, dicha ley busca estimular la creación y duración de las organizaciones ciudadanas en la Entidad, mediante el reconocimiento de diversos

derechos, así como obligaciones en general para estas agrupaciones. Sin contemplar hasta la fecha beneficios tangibles que favorezcan al fortalecimiento duradero de las organizaciones civiles.

Ante la radiografía realizada a la Ley previamente referida, así como al orden jurídico vigente en el Estado de Colima, se contempla que existe un campo de acción legislativa para fortalecer a las multicitadas organizaciones civiles voluntarias. Precisamente mediante el descuento del 50% del importe de impuesto predial que se les cobra a aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

A fin de crear apoyos sólidos que velen por el fomento y fortalecimiento interno de las agrupaciones sociales de carácter altruista, así como de anticipar la legislación a todos los escenarios posibles, es necesario plantear que únicamente se beneficiará a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentren inscritas en el Registro a fin de que los Ayuntamientos cuenten con la certeza de que se estará apoyando a las asociaciones activas, y que tienen constante trabajo a favor de la sociedad colimense.

De esta manera, con esta propuesta se vislumbra que se estaría articulando la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima con las diez Leyes de Hacienda para los diez Municipios del Estado de Colima, a fin de estipular el descuento respectivo.

En esta tesitura, la suscrita Diputada, **Martha Leticia Sosa Govea**, y sus compañeros de Grupo Parlamentario, vislumbramos la imperiosa e impostergable necesidad de fortalecer, de manera indirecta, la estructura y funcionamiento de aquellas agrupaciones civiles que trabajan en pro del Pueblo Colimense, al donar de su tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero para lograr condiciones de vida verdaderamente dignas de quienes menos tienen, y más vulnerables son.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

D E C R E T O

PRIMERO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE ARMERÍA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de

Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…

…

…

…

…

SEGUNDO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRFO CUARTO AL ARTÍCULO 19, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…

Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…
…
…
TERCERO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COMALA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de

Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…
…

CUARTO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…
…

QUINTO.- SE **ADICIONA** UN CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…

…

SEXTO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…

…

…

Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…

…

…

…

…

SÉPTIMO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…

…

OCTAVO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…
…

NOVENO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…

DÉCIMO.- SE **ADICIONA** UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19…
…
…
Mismo supuesto operará para las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y se entenderá que dicha bonificación únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

…
…
…
…
…

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto en el presente Decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 15 de febrero de 2017.
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

_____

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

_____ _____

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A usted Diputada, ratificamos la petición a la Secretaría de que se integre de manera completa en el diario de debates la propuesta de nuestra compañera Martha Leticia Sosa Govea. En el uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano.

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenas noches, con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, amigos de los medios de comunicación aún presentes. Antes de intervenir quiero señalar muy someramente que el día de ayer, lamentablemente falleció el ameritado historiador José Oscar Guedea y Castañeda, como bien lo señala nuestro amigo Juan Ramón Negrete Jiménez, hijo prodigo de Colima, historiador, escritor, poeta, hombre culto y persona ejemplar en su vida pública y privada, laboró aquí en este Poder Legislativo, fue Subdirector de Archivo de la Dirección de Servicios Documentarios en la Quincuagésima Quinta Legislatura en el periodo 2006-2009, contribuyó a que se generara esta serie de listados con todo el rigor histórico y los nombres que correspondían con los integrantes de las diferentes legislaturas. Fue parte de la Asociación colimenses de periodistas y escritores, formó parte de la Comisión para la defensa del territorio del Estado de

Colima, fue miembro también de la Asociación de Estudios Históricos del Estado de Colima. Uno hombre autodidacta, estudió hasta bachiller en ciencias biológicas, nació en Colima en 1935, y formó parte también de una asociación llamada, Amigos del Archivo, visitaba los archivos municipales; tuvo estudios históricos y ensayos sobre el municipio de Armería, por ejemplo; el municipio mas joven del Estado de Colima, sobre el ayuntamiento de Colima, en el periodo 1990-1995, sobre el ayuntamiento de Comala, sobre el ayuntamiento de Ixtlahuacán, sobre las haciendas de Colima, sobre las mujeres de Colima, también, sobre la industria y el comercio en Colima y sería largo enumerar toda la serie de estudios y aportaciones que realizó a nuestra historia, a nuestro idiosincrasia, poeta también, amante de la cultura. Precisamente por ese motivo el año anterior, en el marco de reconocimiento a los adultos mayores estuvo presente aquí, ante esta Soberanía y recibió una mención honorifica, como adulto mayor, distinguido, y desde luego también fue pensionado por este H. Congreso en el decreto 142, de fecha 1 de septiembre del año 2016. Quiero evocar la figura de este hombre ejemplar, reitero, hijo prodigo del Estado de Colima, y que en su memoria, los integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, el día de hoy, a un día de su muerte les pediría atenta y respetuosamente guardáramos un minuto de silencio de pie……. MINUTO DE SILENCIO…….. Gracias. Voy a proceder con la venia de usted Presidente integrantes de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, para solicitar atentamente se inserte en forma íntegra en el diario de los debates, la iniciativa que vamos a presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México, y Partido del Trabajo, de acuerdo al orden constitucional vigente y a la propia legislación que nos rige; que se inserte la exposición de motivos y voy a proceder únicamente a leer la iniciativa con proyecto de decreto en su articulado para reformar algunos artículos de la ley de juventud del estado de Colima……. INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE COLIMA.- SE INSERTA INTEGRAMENTE…

CIUDADANOS SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

El Diputado **FEDERICO RANGEL LOZANO**, así como los demás Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en

los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente **Iniciativa con proyecto de decreto reformar diversos artículos de la Ley de Juventud del Estado de Colima**; de conformidad con la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Con fecha 12 de julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Decreto número 339, por el que se crea la Ley de la Juventud del Estado de Colima.

A tres años de distancia de su entrada en vigor, es indispensable contar con un marco normativo adecuado que permita establecer disposiciones claras, precisas y complementarias de los conceptos tutelados por la Ley de la Juventud del Estado, a fin de llevar a cabo con mayor atingencia las tareas relativas a la planeación, organización, coordinación, promoción, fomento y desarrollo integral de la juventud colimense.

Se propone, en primer término, que los consejeros ciudadanos tengan una residencia efectiva en la Entidad, para lograr un mayor compromiso con las políticas en favor de la juventud colimense; y precisar que los mismos participen en el Consejo por un período de dos años, pudiendo ser reelectos por un período igual. Esto propiciaría una modificación al artículo 25.

Asimismo, se plantea que el Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven en el Estado, tenga una mayor participación y más atribuciones para que cumpla cabalmente en los objetivos que le señala la Ley en la materia. Para ello, se formula adicionar al artículo 27 seis facultades que tiendan a dicho objetivo.

Finalmente, se sugiere clarificar en la fracción II del artículo 28, que las convocatorias a sesiones del Consejo Ciudadano se autorizarán por el propio presidente y se tramitarán por conducto del Secretario.

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente Iniciativa, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

D E C R E T O
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE COLIMA

ÚNICO.- Se reforma el inciso a. del tercer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 25; se adicionan las fracciones IX a XVI del artículo 27; y se reforma la fracción II del artículo 28 de la Ley de Juventud del Estado de Colima, para quedar como sigue:

“Artículo 25.- […]

[…]

[…]

a.- Ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos y contar con residencia efectiva no menor de un año en el Estado;

b. a g.- […]

Los consejeros ciudadanos participarán en el Consejo por un período de dos años, pudiendo ser reelectos por un período igual.”

“Artículo 27.- […]

I a VIII.- […]

IX.- Promover la formulación y ejecución de programas y acciones interinstitucionales en materia de atención a la juventud;

X.- Establecer mecanismos de coordinación con los sectores público, social y privado para el cumplimiento de las políticas, programas, estrategias y acciones dirigidas a los jóvenes;

XI.- Impulsar el pleno respeto a los derechos de los jóvenes y promover su difusión entre los diversos sectores sociales;

XII.- Orientar y establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias y organismos para la elaboración de diagnósticos, acerca de la situación de los jóvenes en el Estado de Colima;

XIII.- Promover ante los Ayuntamientos la creación de institutos municipales de atención a la juventud;

XIV. Evaluar los avances y logros de los programas y acciones orientadas al beneficio de los jóvenes;

XV.- Establecer grupos de trabajo a los que les asigne el cumplimiento de asuntos específicos; y

XVI.- Las demás que le señalen otras disposiciones legales y aquellas necesarias para el cumplimiento de su objeto.”

“Artículo 28.- […]

I.- […]

II.- Convocar, por conducto del Secretario, a sesiones ordinarias y extraordinarias y presidir las mismas;

III a VIII.- […]”

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputados que suscribimos la presente Iniciativa, solicitamos que sea turnada a la Comisión o Comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente, lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

A T E N T A M E N T E
Colima, Col., a 15 de febrero de 2016.

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN
DIPUTADA ÚNICA DEL PVEM

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI
DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO DEL NUEVA ALIANZA

DIP. JOEL PADILLA PEÑA
DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO TRABAJO

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA **DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS**

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO **DIP. J. GUADALUPE BENAVIDES FLORAN**

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA **DIP. EUSEBIO MESINA REYES**

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la comisión o comisiones respectivas atendiendo la petición del diputado de que se integré de forma completa en el diario de los debates. En el uso de la tribuna nuestra compañera Leticia Zepeda Mesina.

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si, efectivamente muchas horas ya de trabajo aquí, pero seguramente la ciudadanía, nos agradece el trabajo que estamos realizando no. 15 iniciativas, se presentaron hoy diputado? 15 dictámenes y otros tantos asuntos generales, entonces si seguimos asi muy pronto vamos a ponernos a la par del trabajo que tenemos por ahí rezagado. 20 dictámenes, bien. 20 puntos del orden del día, no, no, muy trabajadores esta noche. Bien, yo no quiero dejar pasar que un año, asi, asi es, la semana pasada se cumplió un año de que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, tomo la rienda del estado, igual que como ocurrió cuando llegó a la Presidencia Municipal de Colima, sucedió con la gubernatura, recibirla de Mario Anguiano. Sobra decir las atrocidades que cometió este último en ambas administraciones, su característica principal fue el endeudamiento injustificado, el tráfico de influencias y una pésima administración y desde luego se manifestó en la calidad de vida de los niños, de los jóvenes y adultos mayores. Si bien en este año de administración se ha visto el deseo de insertar un orden administrativo y financiero, lo cual es valioso, queda en duda tomas de decisiones como la compra de los terrenos de la campana, estos que Mario Anguiano ya había pagado con uno de sus múltiples empréstitos que le autorizaron en legislaturas anteriores. Entre otros temas, recuerdo muy bien, los slogans de la campaña del actual gobernador, “vas a vivir feliz y Seguro”, desgraciadamente a 365 días de su administración su principal

promesa no ha sido cumplida. Se ha cambiado de secretario de Seguridad, de Procurador, y este tema junto con el de la impartición de justicia, expedita y ciega, no ha sido posible cumplirla, y una muestra de ella es el caso de Mario Anguiano y colaboradores que sigue esperando. En el rubro del desarrollo económico, como es la generación de empleos bien remunerados y asentamientos de empresas que nos puedan aportar, tampoco tenemos noticias. Uno de los contrapesos del ejecutivo es precisamente este Congreso, que en teoría, representa a los ciudadanos, situación que en muchas ocasiones se pierde de vista. En la reciente aprobación de la Ley de Presupuesto, se deja a discreción del ejecutivo, mover partidas previamente autorizadas por esta Soberanía de manera discrecional y sin mas reserva que la decisión que tome el ejecutivo sobre el tema. Esto es un retroceso en el sistema democrático. En el arte de gobernar, no solo se debe de tener habilidades técnicas sobre la conducción administrativa del estado, también es muy necesario dominar lo político, esto incluye tener mucho contacto con la ciudadanía, requiere también fomentar la participación de la misma en asuntos de gobierno y eso implica que tengan presencia en todos los comités en donde se asignen obras y contratos, que por cierto, en la nueva Ley de la materia, se limita la participación de los ciudadanos quedando a juicio de los directores. En materia de salud, el reciente cambio de secretario ha dejado un mal sabor de boca, pues todo parece indicar que al tratar de meter disciplina y orden en el sector costó una renuncia. Pudieron más las viejas prácticas. Colima no espera, es necesario, urgente e indispensable, que este gobierno se dinamice, existen temas que empobrecerán mas a nuestro estado, como es el caso de las pensiones, por nombrar alguno. Muchos ciudadanos valoramos que sus autoridades no se enriquezcan a costo del erario público, yo preguntaría, entre el gobernador, los funcionarios, líderes sindicales y Diputados, habrá quienes se quieran unirse a este equipo llamado Colima. Es el momento de hacerlo y nuestras generaciones lo agradecerán. Es cuánto.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputada, después de su posicionamiento presentará un exhorto, muy bien. En el uso de la tribuna nuevamente nuestra compañera Leticia Zepeda Mesina.

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, me voy a fin de abreviar, me voy a ir directamente a la exposición de los motivos……..INICIATIVA PARA EXHORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO A QUE FIRMEN LOS

CONVENIOS PARA EXPEDIR PASAPORTES EN TECOMAN Y MANZANILLO.- SE INSERTA INTEGRAMENTE…

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.-

La suscrita diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado.- en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con exhorto dirigido al titular de la Consejería Jurídica y al Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Colima

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado mes de abril de 2016 presenté un exhorto dirigido al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional, con el objetivo de que informara el estado en el que se encontraban las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los municipios de Tecomán y Manzanillo.

Lo anterior, debido a que no se contaba con el equipo necesario para la expedición de pasaportes en dichos municipios, y que por consecuencia el personal que labora en las oficinas ubicadas en el municipio de Colima resultaba ineficiente para atender la demanda de los colimenses.

Se logró que el presupuesto necesario para la renta de equipos que se requiere para expedir dicho documento se incluyera en el Presupuesto de Egresos 2017, sin embargo los contratos de arrendamiento del equipo para la expedición y renovación de pasaportes no han sido firmados.

Por lo anterior, se hace un atento exhorto al titular de la Consejería Jurídica, y al Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Colima, para que se realicen las acciones conducentes para llevar a cabo la firma de los contratos que doten a las oficinas de Tecomán y Manzanillo del equipo requerido para la lectura del iris, huellas digitales y fotografías que son esenciales para la tramitación del pasaporte.

Por lo anterior expuesto, se propone a este Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente

A C U E R D O :

PRIMERO.- Se exhorta al Lic. Andrés Gerardo García Noriega, titular de la Consejería Jurídica y al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario de Gobierno del Estado de Colima, para que lleven a cabo las acciones necesarias para la firma de los contratos que dotarán el equipo que dará el servicio para la expedición y renovación de pasaportes en los municipios de Tecomán y Manzanillo.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente decreto, instrúyase al Oficial Mayor del Congreso del Estado para que notifique el mismo.

Con fundamento con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE
Colima, Col. A 15 de Febrero de 2017

Diputada Leticia Zepeda Mesina
Movimiento Ciudadano

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Leticia Zepeda Mesina, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Fueron 7 siete votos. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 7 siete votos a favor del documento que presenta la Diputada Lety, por lo cual no procede por no alcanzar la votación suficiente.

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes

compañeras y compañeros Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse, el día 22 veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 10 diez horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 23:06 veintitrés horas con seis minutos del día 15 quince de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, declaro clausurada la sesión ordinaria número 24 veinticuatro, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias, buenas noches.